

12 de enero de 2017

Victoria Márquez Mees
Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
Correo electrónico:
mecanismo@iadb.org

Estimada Sra. Márquez Mees,

Los firmantes somos miembros de la Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè (“la Kolektif”), una organización colectiva de familias que fuimos desplazadas de la tierra que cultivábamos en Chabert durante décadas para dejar espacio al Parque Industrial Caracol (“PIC”) en el noreste de Haití.¹ Fuimos despojados de nuestras tierras sin la notificación, consulta o compensación adecuadas. Cuando se seleccionó la ubicación del PIC, no se tomaron en cuenta los costos reales que enfrentamos, y mucho menos se mitigaron. Seguimos sufriendo daños significativos debido a la pérdida de nuestra tierra. También tenemos los impactos acumulados en los ámbitos ambiental y social derivados de la construcción y operación del PIC y las instalaciones asociadas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) financió el PIC desde sus primeras etapas y ha seguido invirtiendo en este proyecto con frecuencia regular. Al hacerlo, el BID ha violado sus políticas relacionadas con la Reasentamiento Involuntario (PO-710), Igualdad de Género (PO-761), Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (PO-703) y Acceso a la Información (PO-102). Por lo anterior, presentamos esta inconformidad al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (“MICI”). En primer lugar, buscamos la oportunidad de resolver estos problemas con el BID y el organismo implementador, la Unidad Técnica de Ejecución (“UTE”) del Ministerio haitiano de Economía y Finanzas (“MEF”), sin más retraso, dentro del marco de la Fase de Consulta del MICI.

A pesar del daño sufrido a la fecha, consideramos que sigue siendo posible que obtengamos la totalidad de la compensación y rehabilitación en cumplimiento con las obligaciones del BID, por medio del diálogo constructivo entre nosotros, nuestros representantes, el BID y la UTE. Como parte de cualquier diálogo, buscamos discutir las siguientes soluciones, descritas en mayor detalle más adelante, que la Kolektif diseñó en colaboración con cerca de 210 víctimas individuales:

- Compensación financiera justa;
- Un mecanismo de verificación de la compensación y presentación de inconformidades
- Revisión de los criterios y la lista de personas vulnerables;
- Compensación no financiera justa, para rehabilitar los medios de subsistencia; y
- Apoyo a los proyectos educativos de las familias de las víctimas.

¹¹ Para una descripción detallada de la *Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè* y sus organizaciones hermanas, además de los detalles de contacto, consulte el Apéndice 1. Como se explica en el Apéndice 1, la Kolektif solicitó que Accountability Counsel y ActionAid Haití actúen como sus representantes en el proceso de presentación de inconformidades del MICI. La autorización para designar al representante formal se anexa en el Apéndice 2.

Adicionalmente, la Kolektif solicita un proceso de consulta nuevo y significativo, que explique los actuales riesgos ambientales y sociales y sus impactos y facilite la contribución de las comunidades afectadas en la manera de utilizarlos.

Si las partes no son capaces de acordar una solución, solicitamos que la inconformidad pase a la etapa de Verificación de la Observancia. Cabe anotar que no estamos solicitando confidencialidad.

Esta inconformidad se profundiza en cinco encabezados:

I.	Descripción de esta inconformidad.....	2
II.	El BID es uno de los principales inversionistas en el PIC y comparte responsabilidad por sus fallas e impactos	6
III.	Fuimos desplazados sin previo aviso, sin las formalidades adecuadas y sin compensación adecuada.....	9
IV.	Nuestras inquietudes generales en el ámbito ambiental y social	52
V.	Nuestro intento por resolver estos problemas no han tenido éxito	61

I. Descripción de esta inconformidad

El PIC es un parque industrial orientado a las exportaciones con una extensión de 250 hectáreas ("ha"), compuesto por una serie de edificios industriales y administrativos, plantas de almacenaje y tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales, una planta de energía eléctrica de 10MW y la infraestructura asociada. Se ubica en lo que era la tierra agrícola más fértil del área, aproximadamente a cuatro kilómetros tierra adentro de la Bahía Caracol, un ecosistema compuesto de un manglar costero sensible, algas marinas, la bahía y un arrecife de coral que se extiende de Cap Haitien hasta la Lagon aux Boeuf y hacia la República Dominicana.² El río Trou-du-Nord es parte del sitio.

El proyecto recibió una aprobación acelerada después del devastador terremoto de enero de 2010.³ José Agustín Aguerre, el Gerente de Departamento para Haití en el BID, ha sido citado afirmando que la "urgencia del proyecto" requería algunos atajos. "Si se tuviera que llevar a cabo esto dentro del proceso normal de planeación y financiamiento y después toma de decisiones, y sólo entonces empezar a buscar clientes y sólo entonces empezar la construcción, habríamos pasado diez años sin tener un parque industrial."⁴ En esta prisa por generar beneficios económicos relacionados con la exportación, los impactos sociales y ambientales del proyecto se pasaron por alto y no se gestionaron adecuadamente, a costa de nuestras comunidades.

La ubicación del PIC se seleccionó a fines de 2010 luego de una evaluación de pre-factibilidad, financiada por el BID, en 18 ubicaciones potenciales.⁵ Sin embargo, esta evaluación no incluyó el análisis completo en los ámbitos ambiental y social⁶ y describió erróneamente la

² Este ecosistema es biológicamente significativo, además de un importante recurso de la comunidad. Véase la sección IV.A.ii más adelante

³ En diciembre de 2010, la Comisión Interina de Recuperación de Haití ("CIRH") aprobó el financiamiento para el Parque Industrial del Norte, que se convirtió en el PIC luego de seleccionarse la ubicación de Caracol. Véase Henri-Claude Müller-Poitevien "Haiti's Battle to Shake off a Poor Reputation (Huffington Post, 7 Sept. 2012) <http://huff.to/2atUb9p>.

⁴ Deborah Sontag "Earthquake Relief Where Haiti Wasn't Broken" (NY Times, 5 Jul. 2012) <http://nyti.ms/1KUfV8T>.

⁵ Referencia de proyecto: HA-T1074 (aprobado 13 agosto 2009). Véase más adelante la lista de proyectos relevantes del BID en el

Apéndice 3.

⁶ Koios Associates, *Final Report: Development of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities for Haiti*

(20 Sept. 2010), pp. v, 37, 81 <http://bit.ly/2aL14oU> ["Koios (2010)"].

ubicación del PIB como "libre de habitación y cultivo intensivo".⁷ De hecho, la ubicación del PIC se encontraba en tierra agrícola excelente, cultivada en parcelas por un mínimo de 442 campesinos y sus familias, sumando aproximadamente 3,500 personas.⁸ En una Evaluación de Impacto Ambiental y Social ("EIAS") realizada con premura en 2011 después de presentarse el desplazamiento, registra que la consulta pública reveló lo siguiente:⁹

"...el suelo del sitio seleccionado es el más fértil en toda la zona, incluso durante sequías. También es fuente de ingreso de un gran número de ocupantes que no tienen otra actividad más que cultivar esta tierra. Familias enteras dependen de estas parcelas para alimentar a sus hijos y pagar cuotas escolares, cuidados de salud y reembolso de deudas. ... En términos culturales, algunas familias han ocupado estas tierras durante varias generaciones. Los ocupantes han desarrollado lazos naturales con la tierra, e incluso algunos han establecido hábitos de nutrición. Casi todos los días durante todo el año, utilizan hojas o vegetales que contribuyen a su dieta."

Nuestras familias fueron desplazadas¹⁰ de la ubicación del proyecto sin más que cinco días de aviso, en o cerca de entre el 4 y el 14 de enero de 2011, cuando el territorio se demarcó y delimitó con enrejado en preparación para la construcción del PIC.¹¹ Este desplazamiento ocurrió antes del desarrollo de un Plan de Acción de Reubicación ("PAR") y todo otro debido proceso y debida consulta requeridos por la Política Operativa del BID sobre Reasentamiento Involuntario.

Los consultores del BID y la UTE más tarde desarrollaron un PAR y paquetes de compensación.

Sin embargo, ese proceso se vio marcado por consultas comunitarias inadecuadas así como fallas en el debido proceso y retrasos significativos. Como se explica en la sección III más adelante:

- La consulta y negociación se llevó a cabo principalmente en asociación con "líderes

⁷ *Idem*, pp. 55-57.

⁸ La cuantificación realizada por el BID y la UTE del número de desplazados ha fluctuado entre 366 y 442 familias, con un promedio de ocho miembros por familia; para mayor detalle, *consultese la* sección III.B más adelante.

⁹ Koios Associates, *Study of the Environmental and Social Impacts of the Industrial Park in the Region of Northern Haiti* (13 mayo 2011), Apéndice 2, p. 8 <http://bit.ly/2aLHVBU> ["ESIA"]. El EIAS aceptó independientemente que la tierra es "muy fértil" (p. 27), que "las actividades económicas en y alrededor del sitio del proyecto se podrían caracterizar como de agricultura de subsistencia ... [con estimaciones que indican que] 50 por ciento de los productos se venden comercialmente y 50 por ciento se consumen" (p. 96), y que estas comunidades "podrían ser muy vulnerables a los cambios sociales externos" (*Idem*).

¹⁰ Utilizamos el término "desplazado" para referirnos a nuestro desplazamiento económico. No fuimos desplazados de un lugar de abrigo, pero perdimos una fuente clave de ingreso y seguridad alimentaria cuando perdimos esta tierra cultivada. Entendemos que el concepto de "desplazamiento" para el BID incluye desplazamiento económico y tomamos el mismo enfoque en esta inconformidad.

¹¹ ActionAid USA *Building Back Better? The Caracol Industrial Park Parque Industrial Caracol and post-earthquake aid to Haiti* (Enero 2015) <http://bit.ly/2j8b4MA> ["ActionAid (2015)"]; Gender Action *Caracol Industrial Park Parque Industrial Caracol: Social and Gender Impacts of Year One of Haiti's newest IFI-funded Industrial Park* (2013) <http://bit.ly/2axULXQ> ["Gender Action PIC"]. Tanto el PAR y la información de Base reconocen el "cierre provisional" del sitio. El PAR explica: "El proyecto comenzó oficialmente el 4 de enero de 2011. A la fecha [Sept. 2011]: la instalación de un enrejado temporal delimitando las 246 hectáreas ya se completó..." (p. 14) y " [d]esde el establecimiento del cierre provisional y la llegada reciente de oficiales de seguridad en el sitio, ahora se limita el libre tránsito" (p. 24): *Plan d'action pour la compensation competencia et le rétablissement des moyens d'existence des personnes affectées*, (Sept. 2011) <http://bit.ly/2aDnZPR> ["RAP (2011)"]. Véase también Erice AZ *Ligne de base socioéconomique* (fechado en agosto de 2011), pp. 14, 18, 24-25, 39 ["Baseline"], en el Apéndice 1 del PAR (2011). Los datos Base calcularon nuestra pérdida de ingreso a partir de enero de 2011: p. 39.

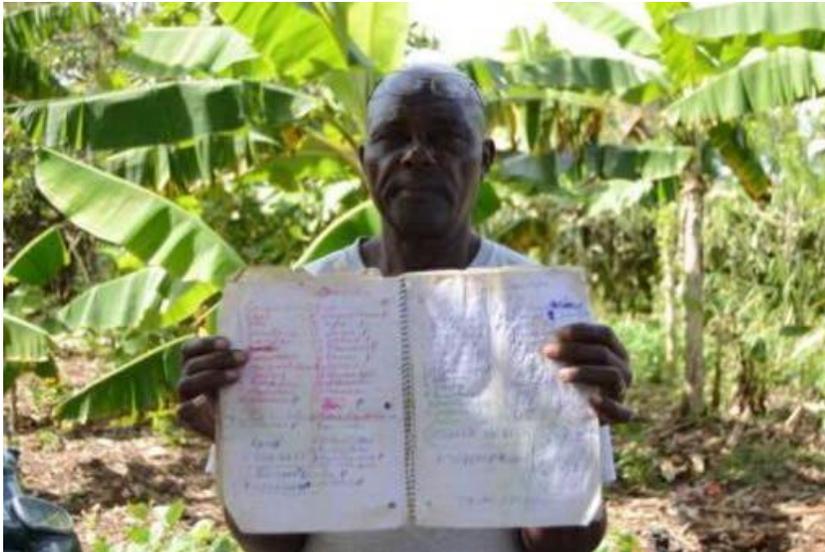
naturales" seleccionados por consultores del BID en junio de 2011, que no fueron elegidos o que no eran verdaderos representantes de nosotros como víctimas. La información sobre el proyecto y el PAR nunca se pusieron a nuestra disposición en un formato apropiado que tomara en cuenta las bajas tasas de alfabetización o el lenguaje (criollo).

- Las opciones de compensación que se nos presentaron se basaron en un debido proceso impreciso e inadecuado. Entre otros problemas, el BID y la UTE: no identificaron adecuadamente y en una primera etapa el número de los desplazados; no logró cuantificar con precisión nuestras pérdidas; y fracasó en el intento de determinar adecuadamente la disponibilidad de tierras alternativas. Este último error llevó al BID y la UTE a abandonar el acuerdo original de proporcionar tierra de reemplazo, ofreciendo en su lugar un paquete inferior de compensación en efectivo casi tres años después de nuestro desplazamiento.
- El BID y la UTE no identificaron correctamente ni mitigaron el riesgo significativo de empobrecimiento surgido de nuestras circunstancias individuales en combinación con características generales, incluyendo la forma en la que fuimos desplazados y las difíciles condiciones enfrentadas por las comunidades agrícolas rurales en Haití.
- El BID y la UTE no investigaron adecuadamente ni mitigaron los impactos, diferentes y desproporcionados, para las mujeres.
- Muchas de las víctimas sufrieron retrasos excesivos en la entrega de su compensación, con algunas que siguen esperando seis años después. Durante este periodo, la zona en y alrededor de Caracol ha experimentado fuertes aumentos en el costo de vida y demanda por alimentos, vivienda y tierra, reduciendo aún más el valor de nuestra compensación.

Esta y otras fallas en el procedimiento resultaron en un paquete de compensación inferior que ha demostrado ser inadecuado para alcanzar nuestra rehabilitación socioeconómica.

“He trabajado mi tierra por 21 años y luego me obligaron a dejarla por la construcción de este parque. Cultivo frijol negro, yuca, maíz, maní y bananos en mi tierra y he criado a todos mis hijos gracias a esta tierra. Contrataría 100 trabajadores temporales durante nuestra temporada de plantación. Les pagaba 150 gourdes al día y ofrecía dos comidas diarias. Si tuviéramos el apoyo que necesitamos para cultivar nuestra tierra nos iría bien. Ahora que perdí mi tierra no tengo un centavo.”

Elie Josué, tenía un lote de 4.5 ha. Aquí aparece con un registro de las personas que trabajaron para él.



Credit: Marilia Leti/ActionAid

Como se explica en mayor detalle en la sección III, la gran mayoría de víctimas se encuentra en una peor posición socioeconómica que antes del desplazamiento y enfrentan inseguridad financiera y alimentaria. Durante las entrevistas en detalle que realizamos en mayo de 2016,¹² 54 de 58 entrevistados reportaron que se encuentran actualmente en una situación económica inestable, con 48 de 58 obligados a incurrir en deudas con regularidad. Seis de los 58 reportan no contar con ninguna fuente de ingreso.¹³

A pesar de que el daño causado por la pérdida de nuestra tierra es la inquietud principal de la Kolektif, también estamos preocupados por la falta de información y consulta sobre riesgos ambientales y sociales potencialmente serios e impactos asociados con la construcción y operación del PIC y sus instalaciones asociadas. Como se comenta en la sección IV más adelante, hemos escuchado reportes de:

- Daño y daño potencial al río Trou du Nord y a la Bahía Caracol;
- Contaminación y menor disponibilidad de aguas freáticas;
- Posible contaminación de aire y tierra derivada del PIC y la planta de electricidad y del aumento en la población asociada con estos desarrollos;
- Condiciones laborales muy inferiores en el PIC; y
- Riesgos e impactos sociales relacionados con el aumento en la población en la zona.

Sin una consulta informada sobre estos temas, carecemos de información sobre: la posibilidad y la seriedad de estos riesgos e impactos; cómo podrían afectarnos en el presente o el futuro; y cómo se están gestionando exitosamente. Deberíamos tener voz en las decisiones que afectan nuestro modo de vida, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente natural.

Por estas razones, establecimos la Kolektif . Nuestra coordinadora, Jocelyn Prévil, explica:

“Éramos dueños de una tierra que habíamos recibido de nuestros padres o que habíamos comprado. Con esa tierra podíamos vivir. Representaba todos los pequeños detalles que necesitamos para vivir. Esta tierra era responsable por la educación de nuestros hijos y de nosotros mismos. Para realizar nuestros estudios dependíamos de nuestra tierra.

En 2011, escuchamos que nos botarían de la tierra que teníamos. Que el Estado haitiano, con el BID, tomaría nuestra tierra sin un acuerdo con nosotros. Nos invadieron para tomar la tierra que era nuestra. Así, escogieron a los líderes naturales y ADTC, que decía que no era posible que tomaran nuestra tierra sin compensaciones para ayudarnos a vivir. Y así fue como el Estado haitiano prefirió darnos un poco de dinero, que no representaba la tierra que nos quitaron. En 2011 nos dieron dinero para seguridad alimentaria y cosechas perdidas. En 2012 también hicieron lo mismo, pero no tomaron en cuenta ni la inflación ni el costo real de vida, cuando el costo de vida había aumentado.

Nos ofrecieron tierra, pero para dárnosla, tenían que quitar la tierra a otros agricultores que vivían ahí. Los agricultores de Fond Blanc dijeron ‘Sí, no tenemos ningún problema con eso, podemos dar la tierra, pero necesitamos que toda la tierra mejore para beneficiar a todos’. Ellos (la UTE y el BID) dijeron que no podían mejorar la tierra, que lo tenían que hacer los agricultores solos. Así que los agricultores de Fond Blanc dijeron ‘No, no nos pueden quitar nuestra tierra para poner a otras personas así nada más, tiene que haber una negociación para que vengan a nuestra tierra de una manera que nos beneficie a todos.’ Cuando vieron esto, ellos (la UTE y BID) decidieron darnos dinero, no tierra.

¹² Con el apoyo de nuestros asociados ActionAid Haiti y AREDE

¹³ Véase Apéndice 6, resumen de los resultados de las entrevistas

Pedimos compensaciones definitivas, algunos pidieron 15 años de compensaciones, otros 20, otros 25. Ellos (la UTE y el BID) eligieron darnos 5 años de compensación. Y nos quitaron la compensación de seguridad alimentaria, sólo nos dieron las compensaciones de cosechas perdidas. Y eso no representaba nada para nosotros. La tierra representa la vida para nosotros. El poco dinero que nos dieron se acabó en un mes, dos meses. La tierra nos ayudó a pagar la educación de nuestros hijos y a tener comida para vivir. Y después de que se llevaron nuestra tierra, vimos cómo aumentaba el precio de los alimentos, porque nuestra tierra en Chabert era la más fértil, especialmente para producir guisantes, maíz y bananos. La tierra fértil era el 95 por ciento de la tierra en Chabert.

Cuando vimos que, cómo la vida había cambiado para nosotros, nos reunimos en 2014. Como agricultores. Vimos cómo están viviendo ahora nuestros hijos, dijimos este parque industrial debería ayudarnos, pero nuestras condiciones de vida están peor. Este parque, en lugar de ayudarnos a avanzar, empeoró nuestra vida. Hay más gente, los costos son más altos, no hay hospital, no hay escuela. No nos ayudaron con la reforestación o un nuevo camino, y mientras no podemos respirar bien por el polvo.

Así que decidimos crear el Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè, nos reunimos, votamos por el cambio, dijimos no podemos quedarnos así, necesitamos hablar para reclamar nuestros derechos y nuestras obligaciones. Creamos el Komite que fue elegido por las víctimas, para obtener compensaciones más justas. Hemos tenido dificultades desde 2014.”

Jocelyn Prévil, 9 de julio de 2016

II. El BID es uno de los principales y constantes inversionistas en el PIC y comparte responsabilidad por sus fallas e impactos causados

El BID financió el PIC desde sus primeras etapas y sigue financiándolo, por medio de cinco créditos que suman cerca de US\$242 millones y mediante múltiples adjudicaciones de cooperación técnica.¹⁴ La entidad implementadora es el MEF del gobierno haitiano, por medio de sus organismos la UTE y más recientemente la Société Nationale des Parcs Industriels (“SONAPI”)¹⁵.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó un crédito inicial de US\$55 millones el 25 de julio de 2011. El crédito contaba con diversos componentes, aunque su meta principal era la construcción de nueva infraestructura, incluyendo el PIC, diseñada para volver a Haití del Norte en un centro comercial y de población. En relación con el PIC, el BID se comprometió a financiar: obras de infraestructura, incluyendo edificios industriales y administrativos, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales; nuevas viviendas en el área; compensación por reubicación; y evaluación, mitigación y supervisión socio-ambiental.¹⁶

Un grupo de otros inversionistas desarrolló las instalaciones asociadas para el PIC. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (“USAID”) se comprometió a financiar

¹⁴ Véase Apéndice 3, lista de proyectos del BID.

¹⁵ Responsabilidad por la gestión del PIC transferida parcialmente a la SONAPI en mayo de 2014. Entendemos que la UTE sigue siendo responsable por todas las actividades de construcción del PIC, incluyendo la supervisión de la planta permanente de tratamiento de aguas residuales (“PPTAR”), mientras que SONAPI está a cargo de todas las demás operaciones y la gestión del PIC. El BID ha afirmado abrumadoramente que “SONAPI tomó la autoridad de gestión el 1 de mayo de 2014 sin la suficiente capacidad para administrar los aspectos ambientales y sociales del [PIC]”: HA-L1091 Environmental and Social Strategy, ¶¶1.5, 4.11 [“HA-L1091 ESS”], en el Apéndice 3 hasta HA-L1091 Project Profile (sin fecha) <http://bit.ly/2aAyC8b>.

¹⁶ HA-L1055 Grant Proposal (sin fecha), pp. 6-7 <http://bit.ly/2anWzRE>.

hasta 4,000 viviendas,¹⁷ una nueva planta de generación de energía eléctrica de 10MW¹⁸ y mejoras portuarias.¹⁹ La Comisión Europea acordó financiar las obras viales.²⁰

El proyecto del PIC "se clasificó como categoría A en vista de los impactos social y ambiental potencialmente significativos de la operación del parque, que podría extenderse a lo largo de una amplia zona geográfica y sería permanente o duradero"²¹ Sin embargo, incluso como lo admitió el mismo BID, el debido proceso respecto a los renglones ambiental y social para el PIC no fueron adecuados.²² Como se discutió en la sección III, fuimos desplazados sin advertencia previa, mucho menos con consulta y los riesgos e impactos adecuados en términos de mitigación y reubicación. El BID mismo ha descrito el ESIA como "incompleto" debido a lo inadecuado de los detalles del programa y la información de base.²³ Hasta agosto de 2011, como la fecha más temprana, no se había realizado una evaluación de base de los desplazados, e incluso entonces no logró identificar con precisión a los desplazados ni cuantificar las pérdidas. El Directorio aprobó el proyecto en julio de 2011 a pesar de las fallas mencionadas.²⁴

El PIC comenzó su construcción en 2011 y ha estado operando desde marzo de 2012. La expansión continuó con significativos retrasos o falta de disponibilidad hasta la fecha de algunos de los servicios e infraestructura previstos.²⁵ A fin de continuar esta expansión, el BID otorgó cuatro créditos adicionales (todos clasificados como Categoría A).²⁶ El BID, entonces, otorgó, en total, los siguientes créditos de base para este proyecto:

- HA-L1055: Programa de Infraestructura**, aprobado el 25 de julio de 2011;
- Programa de Infraestructura Productiva** aprobado el 13 de septiembre de 2012;
- HA-L1081: Programa de Infraestructura Productiva** aprobado el 16 de diciembre de 2013;
- HA-L1091: Programa de Infraestructura Productiva III** aprobado el 11 de diciembre de 2014;
- HA-L1101: Programa de Infraestructura Productiva IV** aprobado el 14 de diciembre de

¹⁷ USAID inicialmente trató de preparar 15,000 lotes de tierra para construcción de vivienda y construcción de viviendas en hasta 4,000 de estos lotes. Para septiembre de 2014, el número planeado de lotes se redujo en 87 por ciento a 2,013, con 906 de las viviendas a ser construidas por USAID (una reducción de 77 por ciento): Oficina de rendición de cuentas del gobierno *Haiti Reconstruction USAID Has Achieved Mixed Results and Should Enhance Sustainability Planning* (Jun. 2012), p. 18 [“GAO (2015)”].

¹⁸ HA-L1055 Propuesta de subvención, ¶1.11(d). La planta de energía eléctrica es una instalación asociada véase HA-L1101 Environmental and Social Strategy, ¶3.7 [“HA-L1101 ESS”], en el Apéndice 3 a HA-L1101 Project Profile (sin fecha) <http://bit.ly/2aUm6BE>.

¹⁹ Entendemos que el proyecto del puerto se retrasó y su estatus actual es incierto

²⁰ HA-L1055 Grant Proposal, ¶1.11(d)

²¹ *Idem*, ¶2.3. También se esperaba que otras obras de rehabilitación se clasificaran como B, aparentemente llevando a la descripción del crédito como categoría B en algunos documentos y categoría A en otros.

²² Koios, los consultores que produjeron la EIAS, podrían no contradecir esta descripción. Conceden que la EIAS se produjo a un nivel adecuado para un proyecto Categoría B (un nivel menor que un proyecto de Categoría A): iii. Koios también hace referencia a la premura de las fechas límite para completar su análisis: EIAS, p. vi.

²³ Véase HA-L1081 Environmental and Social Management Report (Nov. 18, 2013), ¶3.21 <http://bit.ly/2aAMqma> [“2013 ESMR IGAS”]; y HA-L1101 ESS, ¶3.4.

²⁴ Entendemos que el Director Ejecutivo de Estados Unidos se abstuvo de votar, posiblemente debido a la falta de adecuación del debido proceso. Véase “Earthquake Relief Where Haiti Wasn’t Broken” (NY Times, 5 Jul. 2012) <http://nyti.ms/1KUFV8T>.

²⁵ Véase HA-L1101 ESMR (Nov. 2015), ¶2.5 <http://bit.ly/2aEhvj> [“2015 ESMR IGAS”].

²⁶ Véase también Apéndice 3, lista de proyectos relevantes del BID.

2015;²⁷

Estos créditos subsecuentes y las actividades de expansión se han visto plagados de fallas en la gestión de los riesgos ambientales y sociales.²⁸ En noviembre de 2015, el BID admitió que el PIC continuaron incumpliendo con una serie de requisitos, incluyendo: no cumplir con la Ley Laboral de Haití; no establecer mecanismos de quejas para los trabajadores y la comunidad; no proveer a los empleados alimentación y agua potable de manera adecuada; y no establecer y mantener un sistema adecuado de salud ambiental y gestión de la seguridad.²⁹ El PIC habría incumplido con las normas de descarga de aguas residuales de no haber sido porque el Directorio dispensó el requerimiento en 2013 debido a la continua incapacidad del parque para cumplirla.³⁰ El BID también reconoció que el proyecto estaba (y probablemente sigue así) incumpliendo con su Política de Reasentamiento Involuntario, debido a los retrasos en proporcionar la compensación final.³¹ Aunque el BID identificó estas fallas en la evaluación de créditos previos e incluyó requisitos específicos en la documentación legal, las fallas persistieron.³² En noviembre de 2015, el BID explicó que "existen varios [temas] en los que la falta de avance en las operaciones previas plantea dudas en torno a si el proyecto en efecto llenará los requisitos de cumplimiento."³³

Esencialmente, el BID siguió financiando y ampliando el proyecto, a pesar de la creciente evidencia en torno a la gestión inadecuada de los impactos negativos y los riesgos en los ámbitos ambiental y social. Al parecer, 'no había marcha atrás' a pesar del creciente costo financiero, ambiental y social.³⁴

Esta serie de créditos ha sido complementada por una gama de estudios de financiamiento de proyectos de cooperación, creación de capacidad institucional y obras civiles para intentar mitigar los impactos social y ambiental del PIC. Un proyecto de este tipo sirvió para apoyar el establecimiento de "Three Bay Protected Area ("PN3B"),³⁵ un proyecto motivado, al menos en parte, por inquietudes sobre el impacto del PIC sobre el ecosistema crucial de Bahía Caracol.³⁶ El BID admite que la proximidad del PIC al PN3B" inicialmente generó inquietud a nivel internacional sobre el impacto negativo" del PIC y que "las garantías expresadas por el BID sobre la toma de las

²⁷ Este crédito aparentemente concluye las inversiones directas del Banco en el PIC, con una fecha de conclusión esperada en 2020.

²⁸ Véase también la discusión sobre los impactos ambiental y social en la sección IV.A más adelante.

²⁹ 2015 ESMR, ¶1.13, nota de pie 2. Véase también 2015 ESMR, ¶¶1.9, 3.5, 4.10, 5.5 y Cuadro 3.1.

³⁰ Véase la sección IV.A.i más adelante

³¹ 2015 ESMR, ¶3.5.

³² Véase HA-L1091 ESS, ¶1.4.

³³ 2015 ESMR, ¶1.13.

³⁴ Lo anterior se apoya, hasta cierto punto, en la propia evaluación del BID acerca de la eficacia en términos de desarrollo de estos proyectos. Véase de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) *IDB-9 Evaluation of IDB's Commitments to Haiti* (Mar. 2013) at p. iii <http://bit.ly/2aUSxjj>: "La evaluación de la OVE identificó retos específicos [al éxito de la nueva estrategia de desarrollar un centro industrial en la parte norte del país]. Estos fueron validados por consultas realizadas durante la misión en el país y muchos de los retos se incluyeron en las observaciones de la Administración en la Matriz de Eficacia del Desarrollo (DEM) de las operaciones aprobadas. Entre estos se incluye: ...(iii) los enormes déficit productivos y de infraestructura social asociados con el desarrollo del PIC; (iv) el hecho de que se necesitara atender externalidades sociales y ambientales aumenta el costo de inversión del proyecto..."

³⁵ El Parque Nacional Tres Bahías ("PN3B") es un esfuerzo de conservación para proteger y restaurar la vida marina salvaje en el norte de Haití. El gobierno de Haití anunció el Parque oficialmente el 9 de octubre de 2013.

³⁶ HA-L1101 ESS, ¶2.5; TC Abstract *HA-T1180: Mitigación de los impactos ambientales del PIC en Bahía Caracol*.

(2014) <http://bit.ly/2aW42Zx>.

medidas de mitigación necesarias para salvaguardar las zonas marinas protegidas serían puestas a prueba durante la operación del parque dentro de los próximos 5 a 10 años."³⁷

Aunque el PIC ha traído consigo cierto nivel de desarrollo positivo al norte de Haití, a la fecha no ha logrado cumplir las expectativas con respecto al potencial de desarrollo esperado. A pesar de las proyecciones iniciales en torno a que el PIC empleará a 18,000 personas para 2014,³⁸ y hasta 37,000 para 2020,³⁹ el reporte del PIC para julio de 2016 indica que sólo empleó a 9,266 personas.⁴⁰ Observamos que el empleo en el parque no es opción para muchas de las víctimas, pues el parque emplea principalmente a mujeres jóvenes.⁴¹ Asimismo, como se comentó en la sección IV, entendemos que las condiciones laborales en el PIC son deficientes, con toda una serie de violaciones de salarios, salud y seguridad, incluyendo reportes de acoso sexual de empleadas. Aunque la planta eléctrica asociada aumentó la disponibilidad de electricidad, muchos de nuestros miembros - y otras familias en la zona- aún no tienen acceso o no tienen los fondos para comprarlo.⁴² A pesar de la inversión del BID para mejorar la capacidad técnica del gobierno haitiano, la evaluación del BID en torno a la sostenibilidad de largo plazo del PIC es poco alentadora:

"La experiencia a lo largo de los últimos cinco años indica que incluso los requisitos básicos de gestión en el campo social y ambiental consistentes no sólo con las políticas del BID, sino también con las normas de la industria resultan difíciles de implementar debido a la capacidad limitada, la competencia de prioridades y limitaciones de recursos.

Tomando en consideración la totalidad de los posibles impactos de mediano y largo plazo y los riesgos descritos en este documento y el historial ambiental y social del PIC hasta la fecha, en general, el [PIC] y, en particular, esta última operación, presenta un alto riesgo para la reputación del BID. De particular importancia es la capacidad limitada (o nula) de SONAPI para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del [PIC], incluyendo que el [PIC] implemente un sistema de gestión de EHS adecuado, de manera que su operación no cause efectos negativos sobre las comunidades colindantes y el PN3B y el río Trou du Nord..."⁴³

III. Fuimos desplazados sin previo aviso, sin las formalidades adecuadas y sin compensación adecuada

A. Antecedentes factuales adicionales

A principios de enero de 2011, cerca de 442⁴⁴ agricultores y sus familias, incluyendo las

³⁷ 2015 ESMR, ¶1.3.

³⁸ Instituto Americano de Arquitectos y otros *Cumulative Impact Assessment for Regional Development in the Cap-Haïtien to Ouanaminthe Urban Corridor* (26 ago. 2012), p. 17 <http://bit.ly/2aGFWgl> ["CIA (2012)"].

³⁹ Véase IDB "Fact sheet: The IDB and Haiti's Caracol Industrial Park" (6 Jul. 2012) <http://bit.ly/2aALWku>.

⁴⁰ SONAPI, *Q2 2016 Update - Parc Industriel de Caracol* (20 Jul. 2016), p. 6, <http://bit.ly/2allhSI>.

⁴¹ A 2015, 67 por ciento de empleados del PIC eran mujeres, muchas de ellas menores de 30 años de edad (Nicola Luksic, Tom Howell "Haiti shows how wealthy countries 'continue to cause disaster'" (CBC News, 15 Sept. 2015)

<http://bit.ly/1KdJpPe>), como las describió el BID, "mujeres en edad fértil" (HA-L1101 ESS, ¶4.35; 2015 ESMR, ¶4.32).

⁴² Jason Beaubien "Will 'Made In Haiti' Factories Improve Life in Haiti?" (NPR, 14 Feb. 2013) <http://n.pr/2aDodGo>.

⁴³ 2015 ESMR, ¶¶1.3 y 4.55

⁴⁴ Los estimados del BID y la UTE han calculado entre 366 y 442 familias: para mayor detalle, refiérase a la sección III.B.iii más adelante.

familias de la Kolektif, cultivaban parcelas en la zona Caracol-Chabert, que terminaría convirtiéndose en la ubicación del PIC. Nuestra tierra es muy fértil, apoyando el cultivo de mango, papaya, toronja (pomelo), frijol, yuca, maíz, cacahuate y plátanos, entre otros cultivos.⁴⁵ Algunas familias también alimentaban ganado⁴⁶ Estos productos agrícolas y el ganado fueron seleccionados como fuente importante de ingresos, la venta en mercados locales, y de comida para nuestras familias.⁴⁷ Algunos de los mayores lotes apoyaron a una serie de trabajadores agrícolas además de dueños de propiedades.⁴⁸ Algunas familias han trabajado la tierra durante generaciones.⁴⁹

“Tenía medio “carreau” (lote) [1.6 acres] donde plantaba todo tipo de frutos. Tenía pomelo, naranja dulce, mangos –todo—Tenía todo tipo de frutos ahí. De hecho, cosechaba guandú, que venía en Okap (Cap-Haitien) para poder mandar a mis hijos a la escuela.”

Pierre Vincent.

A pesar de la importancia de la agricultura como medio de vida en el norte de Haití, es difícil encontrar tierra tan fértil y productiva. La agricultura es una importante fuente de alimentos y manutención, pero no es fácil. En las zonas rurales, 75 por ciento de la actividad económica proviene de la agricultura. Aún así, estas comunidades se encuentran entre las más pobres de Haití, con 75 por ciento viviendo bajo la línea de pobreza.⁵⁰ Haití está constantemente a punto de una crisis alimentaria.⁵¹ Las mujeres son particularmente vulnerables, pues son las principales responsables por alimentar a sus familias.⁵² Estos temas se ven exacerbados por la persistente inseguridad en la tenencia de la tierra: la mayor parte de la tierra en Haití es de posesión informal;⁵³ y existe un historial de confiscación de tierras apoyada por el Estado, incluyendo en Caracol-Chabert⁵⁴

Sin haber sido informados, nuestra valiosa tierra fue seleccionada como ubicación del PIC.

45 El estimado de base calculó que la tierra producía 1,400 toneladas métricas de fruta y vegetales al año, además de tierra de pastoreo sostenible para ganado.

46 Baseline, p. 2, ¶4.

47 El RAP reconoció que, para casi 80 por ciento de las víctimas, la agricultura y la ganadería eran las principales fuentes de ingreso. Los pequeños comercios y la venta de otros servicios contribuyó sólo marginalmente al ingreso: RAP (2011), pp. 28 y 30. El estudio de base estimó que 30 por ciento de las frutas y vegetales cultivados eran canalizados al autoconsumo: Baseline, p. 2, ¶4.

48 ActionAid (2015), p. 4 y la historia de Elie Josué' en párrafos anteriores.

49 ActionAid (2015), p. 4-6. Nuestra relación con la tierra se extiende aún más: véase nota de pie 54

50 ActionAid (2015), pp. 10-11.

51 Véase nota de pie 191 más adelante. La CIA (2012) destaca que el Noreste importaba 55 por ciento de sus necesidades alimentarias: p. 20.

52 ActionAid (2015), p. 10. Véase también la discusión de inquietudes de género en la sección III.B.iv más adelante

53 Véase nota de pie 58 más adelante.

54 De acuerdo con la historia oral de nuestra comunidad, la tierra de Caracol-Chabert fue originalmente otorgada al General de Plaisance por sus servicios durante la guerra de independencia de Haití (~ 1804). Una serie de propietarios haitianos sucedió al General, que utilizó la tierra para pagar una deuda. Durante los años 20, 35,000 hectáreas de tierra fueron apropiadas por el gobierno de Haití y otorgadas a diferentes compañías para producción a gran escala de sisal, primero, y después de caña de azúcar (con un grave impacto negativo para las comunidades locales). En 1986, la partida del dictador Jean-Claude Duvalier ofreció la oportunidad para que las comunidades regresaran y cultivaran la tierra: véase ActionAid (2015), p. 5; Baseline ¶3.1.

A fines de 2010, una evaluación de pre-factibilidad de 18 posibles ubicaciones financiada por el BID, identificó tres sitios preferibles, de los cuales la ubicación del PIC era uno de ellos⁵⁵, y cuatro sitios aceptables. Sin embargo, el estudio, por admisión propia, no involucró ningún análisis integral en el ámbito ambiental y social.⁵⁶ Describía el PIC como "propiedad del Estado": afirmación audaz dado que el autor no verificó oficialmente la afirmación⁵⁷ y considerando que aproximadamente 95 por ciento de la tierra en Haití está gobernada por usos y costumbres o informalmente (e incluso el gobierno no está seguro de sus tenencias).⁵⁸ Incluso más dañino fue el hecho de que la evaluación describía equivocadamente el sitio del PIC como "carente de habitantes y cultivo intensivo"⁵⁹ cuando lo contrario perceptible claramente. Se eligió la ubicación Caracol-Chabert como sitio para el PIC debido, en gran parte, a sus recursos hidráulicos de calidad superior:⁶⁰ los mismo recursos hidráulicos que hicieron la tierra tan productiva y valiosa cuando se cultivaba.

El resultado fue el desplazamiento de cerca de 3,500 personas,⁶¹ incluyendo a nosotros y nuestras familias⁶² de esta tierra entre el 4 y el 14 de enero de 2011, cuando fue delimitada y cercada para el PIC. Nuestras cosechas fueron destruidas. Tres familias perdieron sus casas; el equipo fue destruido o quedó inutilizado; y la iglesia de la localidad fue demolida más adelante.⁶³ Algunas familias tuvieron algunos días de notificación previa, cuando escucharon los planes para el PIC en la radio o de boca de algún funcionario visitante. Otros no tuvieron aviso previo alguno.⁶⁴ El desplazamiento se dio antes de cumplir con los requisitos de debido proceso del BID. No se realizó un RAP, un EIAS y no se registró consulta o participación comunitaria significativa.

Entre enero y junio de 2011, se llevó a cabo con prisa un EIAS. Aparte de una reunión el 27 de enero con más de 250 "ocupantes" del sitio,⁶⁵ no parecen haberse realizado consultas sustantivas con los miembros de la comunidad directamente afectados sino hasta junio de 2011, fecha en la cual el EIAS parece haber concluido, a pesar de una gama de reuniones que se realizaron con anterioridad con autoridades locales y nacionales.⁶⁶

La falta de consulta comunitaria se refleja en las imprecisiones que contiene el EIAS. Mientras que el EIAS reconocía que el sitio del PIC era una zona agrícola que proporcionaba el principal sustento para una serie de familias, equivocadamente estimó que los afectados ascendían a

55 Descrito como el Madrasse, cerca de Chambert (#15), véase Koios (2010), <http://bit.ly/2aLI4oU> pp. 56-57.

56 *Idem*, pp. v, 37, 81.

57 *Idem*, p. 57.

58 ActionAid (2015), p. 5. El registro y la obtención de propiedad legal es un proceso altamente problemático, alentando la práctica de usos y costumbres aplicada por la mayoría de los haitianos. Véase GAO USAID *Infrastructure infrastructure Projects Have Had Mixed Results and Face Sustainability Challenge* (13 Jun. 2013), p. 33 <http://bit.ly/2aOMwU9>; Baseline, p. 28, ¶¶3.2-3.3; RAP, p. 26.

59 Koios (2010), pp. 55-57

60 ESIA, pp. 16-17.

61 La UTE y el BID no ha proporcionado todos los detalles del número de personas afectadas. Sin embargo, sus estimados se refieren a un promedio de ocho personas por familia y entendemos que por lo menos 442 familias fueron afectadas: véase sección III.B.iii más adelante.

62 Como se explicó en la nota de pie 10, utilizamos el término "desplazado" para hacer referencia a nuestro desplazamiento económico.

63 RAP (2011), p. 24.

64 Véase, por ejemplo, ActionAid (2015), p. 4; Gender Action *CIP PIC*, p. 22.

65 ESIA, Apéndice II, p. 7.

66 Véase la sección III.B.iii más adelante.

un total de 1,000,⁶⁷ , cuando la cifra efectiva era de más del triple: cerca de 3,500. Asimismo, el EIAS siguió manteniendo la premisa de que la tierra era propiedad del Estado, sin calificación⁶⁸ cuando, como lo reconoció más tarde el BID, nuestras familias tenían toda una serie de derechos formales y de costumbre con respecto a la tierra.

Esta EIAS también afirmó que la zona Caracol-Chabert seguía siendo la ubicación preferida, a pesar de los riesgos e impactos asociados en el ámbito ambiental y social.⁶⁹ Lamentablemente, su breve análisis de alternativas fue inadecuado, al no poner el énfasis necesario en el impacto del proyecto y mostrarse simplemente influenciado por el hecho de que el sitio ya había sido seleccionado. El obstáculo clave para que se diera un cambio de ubicación fue el "riesgo de retraso" asociado con la adquisición de la tierra.⁷⁰ No existía reconsideración detallada de otras ubicaciones "preferidas" o "aceptables" que hubiesen sido identificados por la evaluación de pre-factibilidad, tomando en cuenta el impacto de la reubicación del sitio Caracol.⁷¹ En lugar de lo anterior, enfatizó que: "Haití está recibiendo la

⁷¹

atención de la comunidad internacional...Estos compromisos son raros, a menudo limitados en plazo y olvidados con facilidad. ...el inicio del proyecto es ahora o nunca..."⁷²

Como se mencionó anteriormente, este EIAS sería descrito más tarde por el BID como "incompleto" y complementado por una serie de otros estudios de impacto ambiental y social.⁷³ No obstante, el Directorio aprobó el proyecto el 25 de julio de 2011, antes de atender estas fallas.

El primer estudio integral del impacto de la reubicación fue el estudio de base, conducido por consultores del BID. Erice Az,⁷⁴ y, aparentemente, finalizaron con el RAP en septiembre 2011, ocho meses después, habíamos sido desplazados de nuestra tierra. El estudio encontró que 366 familias desplazadas de las cuales tres tenían títulos legales sobre la tierra, ⁷² eran "fermiers de l'État": con derechos legales a utilizar la tierra; los restantes tenían una variedad de derechos a la tierra basados en usos y costumbre.⁷⁵ El estudio estimaba que más de 75 por ciento de estas familias vivía bajo la línea de pobreza.⁷⁶ Aún así, sólo caracterizó a 51 hogares como especialmente vulnerables al empobrecimiento.⁷⁷

Aunque el estudio de base representó una mejora marcada con respecto a los informes

⁶⁷ ESIA, p. 16.

⁶⁸ *Idem*, pp. 16-17.

⁶⁹ *Idem*, pp. 17-18.

⁷⁰ *Idem*, p. 17.

⁷¹ Se registró una breve discusión acerca de los otros dos sitios preferidos, no en el análisis de alternativas, sino en una sección explicando la lógica detrás de la selección del sitio Caracol. Esta discusión simplemente fue un recuento del proceso de toma de decisiones: claramente no se enfoca en reconsiderar esa decisión. *Idem*, p. 16. *Idem*, p. 18.

⁷² Véase 2013 ESMR, ¶3.21; HA-L1101 ESS, ¶3.4.

⁷³ Para fines de estas evaluaciones, se consideró a Erice AZ como de independencia cuestionable. La cabeza de Erice AZ (Palème Mathurin) también era Presidente de la comisión CTMO-HOPE (Comisión Presidencial Tripartita para la Implementación de la ley HOPE, que estableció el acceso preferencial de prendas de vestir haitianas como importaciones a Estados Unidos), a cargo de atraer inversiones de la industria del vestido (entre otras tareas) hasta por lo menos abril de 2011: Gender Action *CIP PIC*, p. 8, note 39.

⁷⁴

⁷⁵ RAP (2011), pp. 22-23 and ¶3.2.

⁷⁶ Viviendo con menos de 1 dólar de EE.UU al día: Baseline, p. 2, ¶6.

⁷⁷ Véase RAP (2011), p. 25, Apéndices 10 y 11; sección 0 más adelante; y Apéndice 10 de este documento.

previos comisionado por el BIA, también presentó fallas significativas⁷⁸ Fue preparado y terminado en un plazo inapropiadamente corto, con base en una cantidad insuficiente de entrevistas y consultas colectivas e individuales. Como resultado, no logró identificar a 76 familias desplazadas --cerca de 20 por ciento de las desplazadas por el PIC-- que fueron entonces excluidas de los procesos de consulta, y la mayoría de los cuales parecen haber sido excluidos de los paquetes de compensación iniciales y emitidos en 2011.⁷⁹ Tampoco logró cuantificar con precisión las pérdidas sostenidas por las familias. Asimismo, el estudio no logró: identificar riesgos diferenciados por género o proponer medidas de mitigación basadas en género⁸⁰ o incluir el género como factor de vulnerabilidad, a pesar del RAP, que afirmó que se trataba de un criterio relevante.⁸¹ Al final, mientras que se identificó a cuatro familias encabezadas por mujeres fueron identificadas como vulnerables, el estudio de Base identificó a otras 28 unidades encabezadas por mujeres que no lo fueron.⁸²

El estudio de base recomendó compensar las siguientes categorías de pérdida discutidas en mayor detalle abajo.⁸³

- **Cosechas perdidas:** A fin de compensar a las familias por la pérdida de su ingreso agrícola para el año 2011 (de enero de 2011⁸⁴ debido al "cierre provisional"⁸⁵ del sitio), el estudio de base recomendó que cada familia recibiera 1,450 dólares por hectárea, el ingreso neto promedio por año que generaba la tierra perdida.⁸⁶ Si las actividades agrícolas no se hubieran restaurado a tiempo, se habría tenido que pagar la misma cantidad al año siguiente.⁸⁷
- **Pérdida de seguridad alimentaria:** La tierra perdida fue una importante fuente de seguridad alimentaria, además de ingreso, con cerca de 30 por ciento de la cosecha de frutas y vegetales utilizada para autoconsumo.⁸⁸ Como resultado de la pérdida de ingreso, en combinación con la cosecha perdida, las familias enfrentaron una seria escasez de alimentos.⁸⁹ En congruencia con lo anterior, el estudio de base recomendó que las familias recibieran apoyo financiero adicional para pagar por la adquisición de comida por una serie de meses, calculada sobre la base del número de personas en cada familia y sus necesidades.⁹⁰ Estimó que las familias consumían, en promedio, el

78 Véase nota 74 anterior.

79 Fuimos advertidos por el BID y la UTE que las compensaciones de seguridad alimentaria erogadas en septiembre de 2011 fueron distribuidas a 382 familias: véase Apéndice 4, minutas de reunión; Apéndice 5, Aide Memoire. El BID todavía se refería a sólo 382 familias desplazadas a fines de 2013; véase la sección III.B.iii más adelante.

80 Como resultado, el RAP no identifica ningún riesgo relacionado con género, ni tampoco registra medidas de mitigación: RAP (2011), pp. 50-52.

81 *Idem*, pp. 34, 36 y Apéndice 10. En cualquier caso, la consideración de género no debería haberse limitado a los jefes de familia.

82 *Compara el RAP* (2011), Apéndice 11 (identificando cuatro familias encabezadas por mujeres) o el Apéndice 10 de este documento con 32 familias encabezadas por mujeres identificadas en el estudio de base, p. 1, ¶2 and pp. 15, 406. Es posible que fueran más, pues el estudio de base no está terminado.

83 Baseline, pp. 44-45. Ni el estudio de base ni el RAP recomendaron compensar a ninguno de los 720 trabajadores agrícolas que cultivaron la tierra a cambio de salarios: véase Baseline, ¶¶4.7-4.8; RAP (2011), pp. 40-41.

84 Baseline, p. 39.

85 Véase las referencias a "cierre provisional" en Baseline, pp. 14, 18, 24-25, 39.

86 *Idem*, pp. 4 ¶7, 39-40, 44-45.

87 *Idem*, p. 4 ¶7.

88 *Idem*, p. 2, ¶4.

89 *Idem*, pp. 40-41.

90 *Idem*, p. 3 ¶7.

equivalente de \$1,000 dólares de alimento por hectárea.⁹¹

- **Daños a la propiedad:** El estudio de base notó que ya se había pagado alguna compensación, en forma monetaria, por la destrucción de las cercas durante el cierre del sitio. Los pagos ascendieron a \$75,000, aparentemente realizados en julio de 2011.⁹²
- **Apoyo de transición:** apoyo financiero para actividades no agrícolas (comercio, sal, transporte, hospitalidad, etc. para proporcionar una fuente alternativa y transicional de ingreso mientras se reemplazaba la tierra agrícola.⁹³
- **El reemplazo de la tierra agrícola tan pronto como sea posible",⁹⁴ además del apoyo continuo para el desarrollo de la tierra en forma de inversiones en irrigación, drenaje, mecanización, tipo y densidad de cosecha óptimos.⁹⁵**
- **Vivienda:** dada la edad avanzada de algunos operadores del sitio (para quienes sería difícil restablecer la fuente de ingreso) y la situación de extrema vulnerabilidad en la que las familias vivían, muchas de las cuales dependían de ingresos generados por el sitio, algunas familias deberían recibir vivienda como una alternativa de recuperación de la subsistencia. Esta vivienda podría rentarse parcialmente para ofrecer una fuente de ingreso regular.⁹⁶
- **Apoyo para pastoreo de ganado:** dado que la tierra se utilizaba también para pastoreo además de cultivo, las autoridades deberían mitigar la pérdida de esta tierra de uso ganadero al mejorar otras tierras de pastoreo y proporcionar acceso a forraje y heno.⁹⁷

Al mismo tiempo que se preparaba el estudio de base, los mismos consultores (Erice AZ) desarrollaron el RAP y negociaron acuerdos de compensación.

Las consultas y negociaciones tuvieron lugar principalmente con una "Asociación de Líderes Naturales de Caracol" (ALENAC), seleccionada y confirmada por Erice AZ en dos reuniones que se realizaron el 18 y 19 de junio de 2011.⁹⁸ Los líderes naturales fueron descritos por Erice como "relativamente sencillos" de identificar, pues eran "aquellos que han consolidado su ascenso por la red mediante su experiencia o empatía o nivel de compromiso desinteresado para gestionar las relaciones entre comunidades y familias...aquellos a quienes todas las personas piden consejo en tiempos difíciles."⁹⁹

Los 41 "líderes naturales" no fueron elegidos ni confirmados por una mayoría de víctimas. Sólo 58 y 76 personas asistieron a las dos reuniones en las que se eligió a los líderes, y no queda

⁹¹ *Idem*, p. 41. Consulte también p. 45.

⁹² *Idem*, p. 39.

⁹³ *Idem*, p. 4 ¶7. Consulte también pp. 44-45.

⁹⁴ *Idem*, p. 45.

⁹⁵ *Idem*, p. 4 ¶7.

⁹⁶ *Idem*, pp. 4 ¶7, 45.

⁹⁷ *Idem*, p. 4 ¶7, p. 43-44.

⁹⁸ RAP (2011), Apéndice 2, p. 121. Erice AZ describió a ALENAC como "una plataforma que representa los intereses comunitarios de aquellos directa e indirectamente afectados por el proyecto. Esta es la interacción más directa con los PAP..." Las fechas de reunión se identifican en la p. 129.

⁹⁹ Baseline, ¶2.9.

claro a partir de los registros cuántos de los asistentes eran en efecto víctimas.¹⁰⁰

Tampoco se dieron otros pasos para asegurar que los "líderes naturales" fuesen representantes de las víctimas. Muchos de los "líderes naturales" no eran víctimas. Sólo 22 miembros de ALENAC son identificables con claridad como víctimas a partir de las listas incluidas en el estudio de base y presentadas por la UTE en junio de 2016¹⁰¹ (aunque estas listas, como se discute más adelante, no son comprehensivas).¹⁰² La UTE y el BID admitieron, en una reunión con representantes de la Kolektif, que en la premura por elaborar el plan de compensación "no fue posible evaluar si eran legítimos o no"¹⁰³

Tampoco las reuniones del 18 y 19 de junio constituyeron encuentros de consulta. Los participantes no recibieron información detallada acerca del proyecto, su impacto y sus riesgos potenciales, así como tampoco las medidas de mitigación propuestas.

Para exacerbar este enfoque limitado y no representativo a las consultas formales, la UTE y el BID no garantizaron que la información sobre el proyecto, el RAP y los paquetes de compensación fueran disponibles para nuestra revisión -el grupo más amplio de víctimas- en un formato y lengua apropiados (tomando en cuenta las bajas tasas de alfabetización y en criollo). El criollo es el único idioma de la gran mayoría de las víctimas. Aún así, no existe documentación del proyecto en este idioma, así como tampoco los acuerdos de compensación de 2011. Incluso si se contara con ellos, se habría requerido mayor detalle en la explicación oral durante diversas etapas en los procesos de consulta y negociación, debido a los niveles de alfabetización.¹⁰⁴

El RAP fue concluido en septiembre de 2011 y el marco general de compensación fue tema de un Acuerdo Protocolario firmado por la UTE y ALENAC el 9 de septiembre de 2011.¹⁰⁵ Los jefes de familia (representando entre 366 y 382 familias) firmaron posteriormente acuerdos individuales de compensación en septiembre y octubre de 2011.

Con base en nuestra revisión,¹⁰⁶ el cuadro siguiente es un resumen de las compensaciones acordadas en comparación con las recomendaciones correspondientes en el estudio de base y el RAP. Este cuadro destaca una serie de inquietudes específicas que mantenemos en torno a los cálculos para llegar a la compensación, incluyendo en los casos en los que la compensación parece diferir de lo recomendado en el estudio de base o el RAP y donde las recomendaciones del estudio de base o el RAP eran problemáticas por sí mismas. Estas inquietudes específicas se suman a las preocupaciones generales que se discuten más adelante.

¹⁰⁰ RAP (2011), Apéndice 2, p. 129.

¹⁰¹ Apéndice 13, UTE Liste des personnes compensées définitivement (Compensation monétaire) + Montants définitifs payés.

¹⁰² Apéndice 7, comparación entre las listas de víctimas de ALENAC y el estudio de base a junio de 2016. Tres miembros de ALENAC tienen nombres similares, pero no idénticos, a los listados como víctimas. 16 miembros de ALENAC definitivamente no están listados como víctimas.

¹⁰³ Apéndice 4, minutas de la reunión. La descripción de ALENAC en el RAP --como producto de la auto-organización por parte de las víctimas no es precisa: RAP (2011), p. 18

¹⁰⁴ El estudio de base registra que 33.3 por ciento de los 366 (identificados en aquél entonces) jefes de las familias desplazadas eran analfabetas, mientras que 49 por ciento tenían un nivel educativo de escuela primaria o menos: Baseline, p. 18.

¹⁰⁵ RAP (2011), Apéndice 3

¹⁰⁶ Hemos revisado 49 acuerdos de cosechas perdidas y seguridad alimentaria y tres acuerdos de propiedad destruida. Véase Apéndice 11.

i. Cuadro 1. Compensación 2011

Recomendaciones del estudio de base y el	Acuerdos de compensación ¹⁰⁷
<p>Cosechas perdidas en 2011: El PAR y el estudio de base recomendaron \$1,450 por hectárea por año, estimado como el margen promedio neto producido en tierra agrícola en el área.¹⁰⁸</p> <p>Sin embargo, este enfoque no incluyó las diferencias entre lotes (debido a cosechas diferentes, irrigación o frecuencia del cultivo). Así, subestimó significativamente la compensación para un gran número de agricultores cuya tierra producía márgenes netos de cerca de \$3,120 por hectárea por año.¹⁰⁹</p>	<p>De los 49 acuerdos que hemos revisado, la mayoría de las familias recibió \$1,449 por hectárea, pero una familia no recibió compensación alguna y otras fluctuaron entre \$1,385 y \$1,469 por hectárea.¹¹⁰</p> <p>No resulta claro por qué una familia no recibió esta compensación, ni tampoco por qué se registran discrepancias entre los montos por hectárea que recibieron las diferentes familias de agricultores.</p>
<p>Pérdida de seguridad alimentaria en 2011: El estudio de base inicialmente reconoció que la cifra de seguridad alimentaria debería reconocer las necesidades de nuestras familias,¹¹¹ antes de sugerir que sería apropiado un pago de \$1,000.¹¹² El estudio de base estimó</p>	<p>De los 49 estudios que hemos revisado, la compensación fluctuó entre \$0 y \$1,440 dólares por familia (con un promedio de \$814 por hectárea).¹¹³ Funcionarios de la UTE y el BID advirtieron al Kolektif que esta compensación fue cuantificada al asignar</p>

¹⁰⁷ Consulte el modelo de acuerdo de compensación en el Apéndice 8.

¹⁰⁸ Baseline, pp. 40 and 44; RAP (2011), p. 40 y Apéndice 8.

¹⁰⁹ El estudio de base reconoció que los márgenes netos de 48 hectáreas irrigadas se encontraban en el rango de \$3,118.75 por hectárea por año: p. 39.

¹¹⁰ Véase Apéndice 11. Como se explica en ese apéndice, hemos alcanzado la cifra en dólares a un tipo de cambio de 1 dólar equivalente a 40 gourdes, con base en una aproximación del tipo de cambio en esas fechas

¹¹¹ Baseline, p. 3 ¶7.

¹¹² *Idem*, pp. 41, 45.

¹¹³ *Idem*, p. 2, ¶4.

que 30 por ciento de la producción fue para autoconsumo;¹¹⁴ y, aparentemente, se equiparó esto con \$1,000 dólares por hectárea.¹¹⁵ El PAR coincidió en que tendría que pagarse la compensación por seguridad alimentaria, adoptando la cifra de \$1,000 dólares por hectárea.¹¹⁶

Este enfoque no se basó en una cuantificación adecuada de las necesidades de las familias en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, el costo nominal de una canasta de alimentos era de 907.9 gourdes (\$22.70) al mes en enero de 2011, lo que ascendía a 10,895 gourdes (\$272.37) al año.¹¹⁷ El estudio de base no hace referencia a la seguridad alimentaria que proporcionan los productos animales del ganado cuya producción apoya esta tierra.¹¹⁸

la suma de \$246,000 (\$1,000 por hectárea) y dividirlo por el número de familias identificado en aquél entonces (382, un aumento con respecto a las 366 familias identificadas en el estudio de base, a pesar de que este último concluyó dentro de algunas semanas de esta ronda de compensación) y un estimado del número promedio de personas por familia (8),¹¹⁹ que ascendió a \$80 por persona por año, o \$0.22 por persona por día. De nuevo no queda claro por qué tres familias que cultivaban la tierra y dependían de esta para su seguridad alimentaria no recibieron compensación.¹²⁰

¹¹⁴ *Idem*, pp. 41, 45.

¹¹⁵ RAP (2011), p. 40 y Apéndice 8 (\$246,000 asignados en total).

¹¹⁶ Coordination Nationale de la Securite Alimentaire ["CNSA"] *Bulletin #1: Le Panier Alimentaire en Haiti* (Jun. 2012), p. 1 <http://bit.ly/2b8M9VY>. Hemos utilizado el costo nominal de la seguridad alimentaria en 2011 en lugar del "costo real". El "costo real" toma en cuenta la inflación, incluyendo los aumentos en el ingreso. En los casos en los que el ingreso aumentó, el "costo real" es más bajo que el nominal (el precio corriente de los alimentos), para reflejar el mayor poder de compra. En este caso, no tendría sentido deducir de los precios corrientes de los alimentos un supuesto aumento en el ingreso cuando este ingreso no existió debido a nuestro desplazamiento. La cifra de seguridad alimentaria asigna 1,870 calorías por persona por día.

¹¹⁷ Véase, por ejemplo, la historia de Vigenise Bien Aime más adelante.

¹¹⁸ Véase Apéndice 11.

¹¹⁹ Apéndice 4, minutas de la reunión. *Consúltese también* 2013 ESMR, ¶3.58 ("Los pagos anuales por pérdida de cultivos de subsistencia comprendieron... \$80 dólares por miembro de la familia").

¹²⁰ Es posible que dos de las tres familias que no recibieron compensación por seguridad alimentaria fueran propietarias de dos lotes de tierra y recibieran compensación por seguridad alimentaria por un lote pero no por el otro. Con base en la información recabada a la fecha, esta explicación no está disponible para la tercera familia: véase el Apéndice 11. En cualquier caso, ni la UTE ni el BID nos confirmaron formalmente la razón de esta discrepancia.

<p>Propiedad destruida: El estudio de base observó que la compensación por propiedad destruida se había pagado por separado en julio de 2011, describiendo este caso como cercas destruidas por un total de \$66,000 dólares.¹²¹ El PAR recomendó compensar adicionalmente a los propietarios de "dos casas y media" (una en construcción) que fueron demolidas y la construcción de una nueva iglesia,¹²² por un costo total de \$61,000 dólares.¹²³ El PAR no proporciona desglose detallado o indicación en torno a cómo se calculó este total.</p>	<p>Estos acuerdos se alcanzaron por separado y no explican cómo se calculó la compensación. Hemos revisado dos acuerdos de compensación firmados en julio de 2011, que proporcionaron cerca de \$1,122 dólares y \$310 dólares por propiedad destruida.¹²⁴ Un acuerdo de compensación adicional, firmado en septiembre de 2011, proporcionó cerca de \$1,125 dólares.¹²⁵ Aunque la UTE advirtió a ActionAid Haiti que \$88,893 dólares se distribuyeron para la propiedad destruida,¹²⁶ esta cifra no se puede reconciliar fácilmente con las diferentes categorías de propiedad destruida, y las cifras a las que se hace referencia en el estudio de base y el RAP y los montos individuales y receptores de estos pagos no se han publicado. Como resultado, no nos ha sido posible evaluar si todos los agricultores afectados han recibido una compensación justa por la propiedad destruida.</p>
<p>Apoyo de transición: Tanto el estudio de base como el RAP han hecho énfasis en que las víctimas necesitaban entrenamiento y apoyo para obtener empleos que recuperaran su seguridad alimentaria y sus ingresos.¹²⁷ Sin embargo, sus propuestas no fueron detalladas y el RAP sólo asignó \$76,000 a esta iniciativa: suma trivial para restablecer el sustento de más de 360 familias.¹²⁸</p>	<p>El acuerdo protocolario registra que el la UTE acordó ofrecer capacitación de transición y apoyar a las víctimas en preparación para posibles empleos durante la construcción del PIC.¹²⁹ Como se comenta más adelante, casi ninguna de las víctimas se benefició de este apoyo.¹³⁰</p>

¹²¹ Baseline, p. 39.

¹²² RAP (2011), p. 45. El estudio de base no recomendó específicamente esta forma de compensación.

¹²³ RAP (2011), Apéndice 8. El PAR (2011) también reconoce que la compensación se paga por equipo instalado por el agricultor en el sitio en cuestión: véase RAP (2011), p. 40.

¹²⁴ Véase Apéndice 11.

¹²⁵ *Idem*

¹²⁶ Información proporcionada en diciembre de 2014. Más información a petición expresa.

¹²⁷ Baseline, p. 2, ¶6; RAP Plan de Acción para el Reasentamiento (2011), pp. 11, 14, 41.

¹²⁸

¹²⁸ RAP (2011), Apéndice 8. Con base en las 366 familias identificadas por el estudio de base, lo que asciende a \$207 dólares por familia.

¹²⁹ *Idem*, Apéndice 3, art 2

¹³⁰ Véase el cuadro 2 más adelante.

<p>En relación con la compensación final, el RAP¹³¹ recomendó que las víctimas no vulnerables puedan elegir entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de pequeñas empresas: capacitación, apoyo técnico y financiero (entre \$3,000 and \$8,400) to para establecer una pequeña empresa,¹³²¹³² con un presupuesto total de \$180,000 dólares para este fin,¹³³¹³³ • Sustitución de tierras: sustitución de tierras en Terrier Rouge/Fond Blanc para ser adquiridas por la UTE, mejoradas para aumentar su productividad y distribuirlas entre las familias víctimas en lotes de 0.5 a 4 hectáreas¹³⁴ El costo se estimó en \$6,000 por hectárea¹³⁵ 	<p>Los acuerdos individuales de compensación de 2011 no especificaban la compensación final. Sin embargo, el artículo 2 del Acuerdo Protocolario firmado entre la UTE y ALENAC reconoció que se proporcionaría compensación de largo plazo en forma de: tierra por tierra, apoyo para la iniciativa empresarial y otras facilidades para las familias más vulnerables.¹³⁶ El Artículo 6 añadió que, si la tierra agrícola de reemplazo no estaba lista para fines de noviembre de 2011, el ingreso se proporcionaría para la temporada 2011-2012, o si, para junio de 2012 no se implementa otra de las medidas de compensación mencionadas en el Artículo 2, la UTE pagaría un año extra de</p>
<p>365 de los 366 hogares identificados en tiempos del estudio de base, eligieron tierras de reemplazo como su forma preferida de compensación final.¹³⁷</p>	<p>cosecha y escasez de alimentos para los afectados.</p>

¹³¹ El RAP sumó la opción de desarrollo de pequeñas empresas. El estudio de base recomendó sustituir la tierra o la vivienda para familias vulnerables.

¹³² RAP Plan de Acción para el Reasentamiento (2011), pp. 33-34, 42-44. Para calificar para este tipo de compensación, la persona desplazada tenía que cumplir con por lo menos tres criterios adicionales relacionados con la experiencia, "calificación intelectual", edad y aptitudes financieras.

¹³³ *Idem*, Apéndice 8, con base en una boleta inicial de \$3,000 dólares y la oportunidad de participar en el programa de microempresa del BID (un valor máximo adicional de \$5,400 por persona).

¹³⁴ *Idem*, pp. 42-43.

¹³⁵ *Idem*, Apéndice 8.

¹³⁶

¹³⁷ RAP (2011), Apéndice 3.

<p>En relación con la compensación final, el RAP recomendó que las familias vulnerables recibieran vivienda mediante cupones para comprar y rentar (al menos parte de) una casa para ganar la manutención alternativa.¹³⁸ El RAP presupuestó \$120,000 dólares para esta propuesta con base en 40 cupones de \$3,000 dólares¹³⁹ No se explicó por qué sólo se propusieron 40 cupones cuando 51 hogares fueron evaluados como vulnerables.</p>	<p><i>Véase arriba.</i></p>
--	-----------------------------

En resumen, la compensación interina y de transición proporcionada en 2011 no compensó con justicia nuestras pérdidas. Algunos de los defectos que se originaron en la recomendación del estudio de base y el RAP, que no cuantificaron con precisión nuestras cosechas perdidas o la seguridad alimentaria a nivel individual y de familia, y que no establecieron un plan integral para rehabilitar nuestro sustento. Estos defectos resultaron de la aparente incongruencia y la incoherente aplicación de las recomendaciones del estudio de base y el RAP, resultando en diferentes familias que recibieron diferentes montos de compensación, algunos menor de lo que tendrían derecho a recibir bajo el RAP-sin explicación adecuada alguna. También se observan brechas de conocimiento debido a la falta de información precisa acerca del tipo de compensación distribuido.

En relación con la compensación final, se registraron retrasos significativos. En última instancia, el BID y la UTE abandonaron la opción de sustitución de tierras.

De hecho, otras comunidades cultivaron la alternativa de tierras en Terrier Rouge, identificadas por la UTE, bajo la práctica de usos y costumbres. Las víctimas solicitaron a la UTE hacer arreglos con estas comunidades para permitir compartir la tierra sin conflicto, o encontrar tierras alternativas, sin reclamos. Los agricultores utilizaron la tierra en Terrier Rouge y estaban dispuestos a compartirla, pero sólo bajo ciertas condiciones.¹⁴⁰ La opción fue descartada porque la UTE y las personas viviendo en el lugar no llegaron a un acuerdo en la implementación. En este punto, la UTE y el BID unilateralmente abandonaron la compensación como opción a favor de compensaciones en dinero en efectivo (con la excepción de algunos hogares vulnerable).

Muchos detalles de esta decisión -- abandonar el acuerdo para proporcionar tierra alternativa -- siguen sin aclararse para nosotros, a pesar de nuestras solicitudes a la UTE y el BID de proporcionar más información.¹⁴¹ Un memorándum enviado por la UTE y el BID al Kolektif simplemente menciona "dificultades de campo"¹⁴² y un reporte complementario

¹³⁸ El otro eligió apoyo al desarrollo de negocios. *Idem*, p. 44.

¹³⁹ *Idem*, Apéndice 8.

¹⁴⁰ Acte d'Engagement between la UTE y L' Association des Petits Planteurs du Nord Est (23 ago. 2012), apéndice en el Apéndice 14. *En contraste*, el IGAS de 2013 que afirma que "la fuerte oposición de los grupos interesados que declararon utilizar el área que se había identificado originalmente para el reasentamiento con base en intercambio de tierras en Fond Blanc/Glaudine" y que "la Asociación de pequeños agricultores del noreste amenazó a las familias afectadas y afirmó que estaban utilizando la tierra para agricultura y ganadería": ¶3.58. Nuestra memoria no apoya esta versión de eventos.

¹⁴¹ Véase sección V y Apéndice 12, relacionado con nuestros esfuerzos por resolver los problemas.

¹⁴² Apéndice 5, Aide Memoire, ¶III(F).

menciona "la falta de voluntad de los ocupantes ilegales de la Asociación de pequeños agricultores del noreste."¹⁴³

Aunque comprendemos que el BID afirmará que la mayoría de las víctimas aprobó la decisión de abandonar la compensación con tierras,¹⁴⁴ muchas víctimas con las que hemos hablado sintieron que no tenían más opción que aceptar la compensación con dinero en efectivo en ese punto, pues temían no recibir nada.¹⁴⁵ Algunas incluso expresaron que las "obligaron a firmar" los acuerdos finales de compensación y que se les dijo que si no los firmaban, no recibirían ningún dinero.¹⁴⁶ El RAP también explicó que las preferencias de algunas víctimas por efectivo, desde un principio, se vieron motivadas por la inquietud de que el gobierno no proporcionara la compensación no monetaria, como se experimentó en otros procesos problemáticos de reasentamiento en el área.¹⁴⁷ De cualquier forma, las entrevistas a profundidad realizadas por la Kolektif con 58 víctimas muestran que 20 (34 por ciento) afirmaron que aún estarían a favor de la compensación con tierras en 2013, opción que no fue respetada.¹⁴⁸

¹⁴³ Alix Innocent, Chargé de Coordination du PAR *Rapport: Rencontre de Discussions Pour La Mise En Ceuvre d'un Cadre de Négociation entre L' UTE et Les Agriculteurs de Chabert* (19 Ago. 2013), p. 1 apéndice en el Apéndice 13.

¹⁴⁴ 2013 IGAS, ¶3.60.

¹⁴⁵ Véase, por ejemplo, las entrevistas con Dieudonné Florvil, Ilna St Jean, Louis Tirène, Marie Suze Zephirin, Vigenise Bien Aime, y Rémi Augustin todas fechadas el 11 de julio de 2016 (disponible a petición expresa, aunque, algunos extractos se publican más adelante) junto con la historia de Marie Marthe Rocksaint.

¹⁴⁶ Entrevistas con Dieudonné Florvil, Ilna St Jean, Louis Tirène, Vigenise Bien Aime, y Rémi Augustin con fecha 11 de julio 2016 (disponible a petición expresa, algunos extractos se reproducen más adelante).

¹⁴⁷ RAP (2011), p. 38.

¹⁴⁸ Apéndice 6, resúmenes de entrevistas.

Debido a los retrasos, se emitió más compensación en 2012 y 2013, como se detalla en el Cuadro 2.

ii. Cuadro 2. Compensación en 2012 y 2013

Compensación en 2012 y 2013	Comentarios adicionales
<p>2012 y 2013 perdieron cosechas y seguridad alimentaria: Entendemos que la mayoría (si no todas) de las familias recibió pagos adicionales como compensación, para explicar el retraso en recibir su compensación final.¹⁴⁹ Aunque solicitamos una lista completa de compensaciones otorgadas (a nivel de familia) por parte del BID y la UTE, no recibimos esta información.¹⁵⁰ En mayo de 2016, fuimos advertidos durante una reunión con el BID y la UTE que los montos de las compensaciones para 2012 y 2013 por pérdida de cosecha y seguridad alimentaria fueron los mismos que en 2011 y no lo fueron ajustados por incrementos en el costo de vida desde ese año.¹⁵¹</p>	<p>Al igual que se repitieron los defectos anteriores en el cálculo de la compensación de 2011, esta ronda de compensación no logró tomar en cuenta el notable incremento en el costo de vida, alimentos y vegetales en Caracol desde 2011 (que se discute más adelante).</p> <p>Dados los cambios en el número de personas identificadas como desplazadas, desde 366 hogares, hasta 442, en diferentes documentos entre 2011 y 2015,¹⁵² es imperativo que el BID y la UTE publiquen una lista acertada de aquellos que recibieron esta compensación y crear un mecanismo para que las quejas se resuelvan</p>
<p>La compensación final en efectivo se emitió a fines de 2013, excepto por 35/36 hogares vulnerables (discutido más adelante).¹⁵³ De acuerdo con el BID y la UTE, la compensación final en efectivo fue calculada con base en cinco años de cosechas perdidas (\$1,450 por año) con un aumento que tomaba en cuenta el aumento del costo de vida de (1.1725 índice).¹⁵⁴</p>	<p>Este cálculo fracasa por completo en cuantificar con precisión el valor de la tierra perdida o el costo de sustitución de la tierra. Como se discute más adelante, se ha comprobado que es insuficiente para rehabilitar los modos de vida de los desplazados.</p>

¹⁴⁹ Apéndice 4, minutas de reuniones; Apéndice 5, Aide Memoire, BID-UTE.

¹⁵⁰ Véase sección V y Apéndice 12.

¹⁵¹ Apéndice 4, minutas de reuniones

¹⁵² Véase la explicación completa en la sección III.B.iii más adelante.

¹⁵³ Véase Apéndice 9, ejemplo del acuerdo de compensación final para 2013. Hemos revisado 190 acuerdos. Apéndice 4, minutas de la reunión.

¹⁵⁴ Apéndice 4, minutas de reuniones; Apéndice 5, Aide Memoire, BID-UTE.

<p>35/36 ¹⁵⁵ hogares vulnerables recibieron ofertas de vivienda, pago de pensiones o cartas de crédito para obtener un nuevo lote de tierra en arrendamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10/11 familias eligieron recibir vivienda; • 14 personas de 65 escogieron recibir una pensión del Estado de 8,000 gourdes al mes (cerca de \$120 dólares al mes); • 11 personas eligieron recibir cartas de crédito para obtener tierras.¹⁵⁶ 	<p>Muchas de estas familias experimentaron retrasos adicionales en la recepción de la compensación. Nueve de 14 familias que solicitaron el pago de pensiones aún esperaban a principios de 2015, y una estaba todavía esperando en noviembre de 2015.¹⁵⁷ De las 10 de 11 familias que solicitaron vivienda, 10 todavía esperaban esa vivienda en mayo de 2016 y podrían seguir esperando a la fecha.¹⁵⁸</p>
<p>Capacitación y apoyo para el sustento en la transición: Con base en la lista proporcionada por el BID y la UTE, sólo siete de las cabezas de familia afectadas identificadas en el estudio de base (es decir, menos de 2 por ciento) se beneficiaron de las capacitaciones que el Institut National de Formation Professionnelle (Instituto Nacional de Formación Profesional, "INFP") otorgó a 210 personas¹⁵⁹ De las 58 víctimas que entrevistamos, ninguna había recibido capacitación y sólo una tenía a un hermano que aprovechó la oportunidad.¹⁶⁰</p>	<p>Al parecer, las capacitaciones organizadas por el INFP no tenían como finalidad compensar la pérdida de tierra o la rehabilitación del sustento necesario para la mano de obra calificada en el corto y mediano plazos"¹⁶¹ en el PIC sin dar prioridad alguna a las familias víctimas.</p>

Estos "acuerdos" de compensación no se negociaron de manera justa. No contamos con información suficiente ni oportunidades para entender y evaluar adecuadamente los paquetes de compensación y enfrentamos un diferencial de poder significativo dado que nuestra tierra ya se había perdido. Como mencionamos antes, para agosto/septiembre de 2013, muchos de nosotros temíamos no recibir nada. Muchos aún queríamos tierras de reemplazo, pero se nos negó esta opción. Y para aquellas víctimas que prefirieron compensación en dinero en efectivo, solicitaron una suma equivalente a cerca de 15 años de cosechas perdidas, no cinco años, pues era el monto que

¹⁵⁵ Tanto el BID como el la UTE observaron que 35 familias fueron tratadas como "vulnerables"; sin embargo, en documentos proporcionados por la UTE en junio de 2016, se identifican 36 familias: véase el Apéndice 13, *Plan de compensation: Choix d'options d'accompagnement par les personnes vulnérables y Cotisations a payer pour les agriculteurs délocalisés dans le cadre du programme PIC*

¹⁵⁶ Comprendemos que este sistema de cartas de crédito resultó en que la UTE adquiriera un título de arrendamiento para lotes de tierra identificados por los agricultores afectados después de revisar el estatus de la tierra: véase 2015 ESMR,

¶4.33. No sabemos si el beneficiario recibió apoyo (o cómo lo recibió) de la UTE u otros servicios del Estado para encontrar la tierra y negociar el precio.

¹⁵⁷ HA-L1101 ESS, ¶3.15; 2015 ESMR, ¶4.34.

¹⁵⁸ Como resultado de los retrasos en el sitio de vivienda del BID ubicado en Terrier Rouge. Se hizo un intento por colocar a estas diez familias en un sitio de vivienda de USAID que también fracasó: 2015 ESMR, ¶4.34.

¹⁵⁹ Formation UTE/INFP (Caracol) *Liste des participants* (x4, sin fecha), apéndice en el Apéndice 13.

¹⁶⁰ Apéndice 6, resúmenes de entrevistas..

¹⁶¹ INFP *Rapport d'exécution du Programme de formation professionnelle lié à l'implantation du Parc Industriel de Caracol* (Oct. 2012), p. 1 apéndice en el Apéndice 13.

consideraban necesario para compensar su pérdida y recuperar totalmente su sustento.¹⁶² No tuvo lugar una verdadera negociación y sufrimos las consecuencias.

“Trabajé mi tierra durante veintidós años, pero me hicieron dejarla sin ninguna compensación. Después, el gobierno mandó investigadores que estaban preguntando por todo tipo de información sobre nosotros, pero nunca nos dijeron cuánta compensación nos iban a dar. No hubo negociaciones, nos dijeron que aceptáramos la compensación que nos iban a dar. Pensamos que el parque nos iba a beneficiar. Primero nos prometieron tierra, luego vivienda, luego todo lo que obtuvimos fue un pequeño monto como compensación.

Marie Marthe Rocksaint es una pequeña agricultora y madre de dos hijos



Crédito: Marilia Leti/ActionAid

La falta de adecuación en la compensación se complicó con los fuertes incrementos en el costo de vida en Caracol registrados desde 2011. La inflación oficial en Haití fue de 8.4 por ciento en 2011 y de 6.3 por ciento en 2012.¹⁶³ Los precios de mercado de las cosechas que las víctimas cultivaban en Chabert mostraron un incremento aún mayor durante el mismo periodo. En los mercados de Cap Haïtien, el precio de una libra de guisantes negros aumentó de 25 gourdes en enero de 2011 a hasta 50 gourdes en enero de 2013, un incremento de 100 por ciento (y de 60 por ciento en Ouanaminthe).¹⁶⁴ De haber continuado cultivando sus tierras en 2012 y 2013 y los años subsiguientes, las víctimas habrían vendido su producción a precios significativamente más altos.

El costo de la vivienda también aumentó dramáticamente. ActionAid Haití encontró que, en algunas comunidades, los hogares que se habían rentado por entre \$32 y \$55 dólares al mes estaban alquilándose por \$215 dólares al mes en 2014.¹⁶⁵ La actualización de 2015 para la Evaluación de

¹⁶² Apéndice 13, *Rapport: Rencontre de Discussions*, p. 2; entrevistas con Ilna St. Jean y Vigenise Bien Aime, con fecha 11 de julio de 2016 (disponibles a petición expresa).

¹⁶³ Transformation Index BTI 2016 *Haiti Country Report* (2016), p. 16 <http://bit.ly/2aTvpBZ>.

¹⁶⁴ CNSA *Fiches de collecte de prix de marché* marzo (3 ene. 2011) y (16 ene. 2013), <http://bit.ly/2aH85sP>.

¹⁶⁵ ActionAid Haiti (2015), p. 13.

Impacto Acumulativo confirma que Terrier-Rouge experimentó un aumento en el costo de la vivienda e incrementó la demanda alimentaria.¹⁶⁶ El alquiler en Trou-du-Nord aumentó de manera similar, casi duplicándose.¹⁶⁷

La pérdida de ingreso adicional -y el aumento en el costo de los alimentos- no se tomaron en cuenta en la compensación por cosechas perdidas y seguridad alimentaria para 2012 y 2013. Aunque la cifra para la compensación final tomó en cuenta parte de la inflación (un índice de 1.1725), este fue un ajuste modesto en comparación con los aumentos reales y específicos experimentados en la zona de Caracol.

Como resultado, la compensación final demostró ser inadecuada para garantizar un nivel de vida equivalente para las víctimas.

También se registraron problemas con la identificación de familias vulnerables. Entre 2011 y 2013, el número de familias identificadas como vulnerables, y la evaluación de familias específicas como vulnerables o no, cambió de manera dramática.

“Pedí una casa y tierra, pero no me dieron ni la casa, ni la tierra. Sólo nos dieron un poco de dinero. ... Tomé el dinero de todas maneras, porque si no no tendría nada, así que firmé y tome el dinero. ... No podía comprar tierra. Pero ahora todo es difícil de comprar. Y fue más difícil pagar la escuela de los niños.”

Marie Suze Zephirin.

- Como ya se mencionó, en 2011, 51 familias se consideraban especialmente vulnerables, incluyendo sólo cuatro de los hogares encabezados por mujeres.¹⁶⁸ Hasta este punto, sólo 366 familias afectadas habían sido siquiera identificadas. A pesar de la afirmación de la UTE en torno a que las personas de 75 años o más fueron tratadas como vulnerables,¹⁶⁹ hemos identificado dos personas mayores de 75 años que no fueron incluidas en la lista de personas vulnerables en el RAP de 2011.¹⁷⁰
- En 2013, se estableció una nueva lista y, a pesar del aumento en el número de familias afectadas al parecer ya reconocidas por la UTE y el BID, esta nueva lista redujo el número de familias vulnerables a 35. Hemos identificado al menos una mujer en esta lista.

sin embargo nuestra información es incompleta, pues ni el BID ni la UTE han proporcionado un desglose completo por género de estas familias vulnerables.¹⁷¹

¹⁶⁶ UTE & Golder Associates *Mise À Jour de L'évaluation de L'impact Cumulatif Sur L'environnement du Projet D'aménagement du Parc Industriel de Caracol: Étude d'impact environnemental cumulative* (13 Nov. 2015), p. 77 <http://bit.ly/2b054T5> [“CIA Update (2015)”].

¹⁶⁷ *Idem*, pp. 77-78.

¹⁶⁸ RAP (2011), Apéndice 11, pp. 155 y 156

¹⁶⁹ *Idem*, Apéndice 10.

¹⁷⁰ Véase Apéndice 11.

¹⁷¹ Véase nuestra comparación de las dos listas en el Apéndice 10. Esta información la integramos a partir de múltiples fuentes dentro de documentos proporcionados por el BID y la UTE en junio de 2016, pues no proporcionaron una lista completa. De hecho, contamos una persona más --un total de 36 personas-- en lugar de las 35 citadas por el BID y la UTE:

- Sólo ocho víctimas, incluyendo seis mayores de 65 años, que fueron listadas como vulnerables en 2011 fueron incluidas también en la lista de 2013.

A pesar de nuestras solicitudes, ni el BID ni la UTE ofrecieron una lista clara de los criterios utilizados en 2013, ni una explicación para el considerable cambio entre las dos listas.¹⁷²₁₇₂

Un informe proporcionado por el BID y la UTE en junio de 2016 afirma que los jefes de familia vulnerables en 2013 fueron quienes eran "propietarios de menos de 1 hectárea" y ganaban menos de 8,000 gourdes (\$200 dólares) al mes, o aquellos mayores de 65 años de edad.¹⁷³ Tiene sentido que las personas de más de 65 años representen un criterio distinto y suficiente para determinar vulnerabilidad, pues las personas mayores de esas edad enfrentan dificultades para establecer una fuente de ingreso sustituta. Sin embargo, este conjunto de criterios está limitado de manera inapropiada, pues no reconoce el género, la salud, la (in)seguridad de vivienda, la estructura familiar, el costo relativo de vida y otros indicadores relevantes de vulnerabilidad.

La afirmación del BID y la UTE en torno a que estos criterios establecieron la lista de personas vulnerables de 2013 también es incongruente con las conclusiones del estudio de base y la información recolectada. Entre otros temas:

- El estudio de base concluye que 68 jefes de familia tenían más de 65 años de edad en 2011 (tan sólo de 351 hogares que se identificaron como desplazados en esta parte del estudio de base), y aun así, sólo un total de 35 familias quedaron en la lista como vulnerables en 2013.¹⁷⁴
- De los 58 jefes de familia entrevistados en mayo de 2016, nueve personas tenían más de 65 años de edad en 2013.¹⁷⁵ Todas las nueve personas recibieron compensación en efectivo y, por ende, no fueron tratadas como vulnerables. Con base en nuestra revisión de la documentación, hemos identificado al menos 32 personas mayores de 65 años en 2013, pero que no fueron tratadas como vulnerables.¹⁷⁶ Anne Leroy, cuya historia se comenta en la sección 0, es un ejemplo de alguien que recibió compensación en efectivo a pesar de tener más de 65 años en 2013.

Sin más información acerca de los criterios y el proceso utilizado para determinar la lista de vulnerabilidad de 2013, resulta difícil obtener conclusiones contundentes acerca de la validez de la lista. Sin embargo, con base en la información contenida en el estudio de base y la información que hemos recolectado, parece que los 35 hogares identificados en 2013 no constituyen una lista completa de quienes deberían haber calificado, incluso aplicando los criterios, altamente limitados, del BID y la UTE.

Dada la falta de información y consulta, los retrasos y las promesas incumplidas que hemos sufrido a lo largo de este proceso, fue casi inevitable que la compensación ofrecida fuera inadecuada para lograr nuestra rehabilitación socioeconómica. Y así ha sido. La gran mayoría de

Apéndice 13, UTE *Plan de compensation: Choix d'options d'accompagnement par les personnes vulnérables* y *Cotisations a payer pour les agriculteurs délocalisés dans le cadre du programme PIC*

¹⁷² Véase secciones V y Apéndice 12.

¹⁷³ *Rapport: Rencontre de Discussions*, p. 2 apéndice en el Apéndice 13.

¹⁷⁴ Baseline, pp. 11-13. 21 de los cuales tenía más de 75 años de edad.

¹⁷⁵ Apéndice 6, resúmenes de entrevistas..

¹⁷⁶ Apéndice 11, tabla de compensación.

víctimas reporta que se encuentra en una peor posición socioeconómica que antes del desplazamiento y enfrentan inseguridad financiera y alimentaria. De los 58 jefes de familia que entrevistamos en mayo de 2016, encontramos que:¹⁷⁷

- 54 reportaban que se encuentran ya en una situación económica inestable, con 48 de ellos obligados a endeudarse con regularidad;
- 46 reportan encontrarse en peor situación que antes de perder su tierra, 11 expresaron que su situación no es mejor ni peor y sólo uno afirmó estar en mejor situación.
- Cuatro afirmaron que no recibieron toda la compensación reportada en los acuerdos a este fin y dos expresaron no recibieron compensación alguna;
- Los hijos de ocho de las víctimas emigraron a la República Dominicana debido a la falta de oportunidades económicas. Otros reportan que la disminución en el ingreso y los retrasos en recibir la compensación impidieron que las familias financiaran la educación de sus hijos;
- Las víctimas usaron principalmente su compensación financiera para sufragar gastos inmediatos e inevitables que cubrían antes con el dinero obtenido de la cosecha de sus cultivos: alimentos (49), cuotas escolares (47) y pago de adeudos (37);
- Para una mayoría, sus ingresos provienen actualmente de la actividad agrícola (cultivos o ganadería) en tierra de menor calidad que alquilan o que poseían en otras zonas o como trabajadores agrícolas (33). Once familias generan ingresos vendiendo carbón, diez tienen pequeñas empresas, cinco cosechan sal, tres son obreros de construcción y tres son pescadores;
- Ninguna de las víctimas entrevistadas tuvo acceso a sustento de transición y sólo una reporta que un miembro de la familia recibió capacitación; y
- seis reportan no tener fuente de ingresos después del desplazamiento.

“Tenía media hectárea de tierra. Tenía pimientos; tenía papaya; tenía árboles de mango. Tenía todo tipo de cosas ahí. Tenía muchas cosas que crecían en mi tierra: maíz, yuca, frijol negro, etcétera. Cuando [el representante del Gobierno] vino aquí, vino con todos los agricultores y les hizo creer un montón de cosas sobre su tierra. Dijo que recibiríamos una suma de dinero que hasta cuando nuestros hijos tuvieran hijos, sería más de lo que necesitarían. Eso es lo que dijo. Nos presionaron también. Dimos la tierra porque nos exigieron hacerlo, pero dijeron que tendríamos una utilidad. Ahora, por mi media hectárea me dieron 47,630 gourdes (\$1,190 dólares).”

Philomise Pierre.

¹⁷⁷ Véase Apéndice 6, resumen de los resultados de las entrevistas.

“Ellos [la UTE y el BID]dijeron que no podían conseguir tierra y que entonces nos darían dinero para comprar tierra. Luego nos dieron un poquito de dinero, no podíamos comprar tierra porque ¡es tan caro! No podíamos comprar tierra. La cantidad de dinero que nos deberían haber dado, no nos la dieron ... si me hubieran dado suficiente dinero habría comprado tierra. Pero no me dieron suficiente dinero.”

“Hasta tengo una pequeña casa que empecé a construir y tuve que parar porque no puedo hacer nada. No puedo comprar concreto.”

“Cuando nos consultaron, pedimos casas, pequeños negocios, les pedimos que cuidaran bien a nuestras familias. Luego dijeron: ‘Pues pidieron casas, no podemos hacer eso, les vamos a dar dinero.’ ... ¡Yo no quería firmar! ¡No quería firmar! Decidieron tener una reunión con nosotros y dijeron, ‘Les vamos a dar dinero.’ Yo no quería firmar, y dije, ‘Eso no es la cantidad que dijeron que nos iban a dar para poder comprar tierra que podemos trabajar para ayudar a nuestros hijos.’ En ese momento nos obligaron a firmar, y nos dijeron, ‘Pero todos los demás firmaron.’ Me obligaron a firmar para conseguir un poco de dinero. ¡ Pero no alcanza! ¡Todo es muy caro! La escuela de los niños: tengo cinco hijos.”

Rémi Augustin.

“Era una tierra muy fertile. Yo podia cultivar maíz, cacahuates y frijol negro y tenía dos cosechas al año. Ahora tengo que comprar comida importada de la República Dominicana que es mucho más cara. Antes el maíz costaba 4-5 gourdes por kilo, ahora cuesta 100.”

Etienne Robert tiene 72 años y cuatro hijos. Era propietario de un lote de tierra dividido a la mitad por los muros del PIC.



Crédito: Marilia Leti/ActionAid

B. El BID violó sus políticas operativas en torno al Reasentamiento Involuntario, la Igualdad de Género y el Cumplimiento con Políticas Ambientales y Salvaguardias

i. Desplazados sin salvaguardas

La violación más obvia y grave de la política del BID fue el desplazamiento inicial de por lo menos 442 agricultores y sus familias (cerca de 3,500 personas) del lugar del proyecto entre el 4 y el 14 de enero de 2011, antes de la preparación de un RAP y otros procesos y pasos de consulta. Esta violación se registraba cuando el Directorio aprobó el proyecto.¹⁷⁸

La elaboración de un RAP es obligación fundamental de acuerdo con la Política Operativa del BID sobre Reasentamiento Involuntario, diseñada para garantizar que las personas reubicadas reciban una compensación justa y adecuada.¹⁷⁹ Una vez que el BID y la UTE decidieron que el sitio del PIC era el más deseable para lograr los objetivos del proyecto, fue necesario elaborar un RAP completo.¹⁸⁰ Este RAP necesitaba desarrollarse con base en datos de partida precisos¹⁸¹ y siguiendo un proceso de consulta comunitaria y participación significativos,¹⁸² antes de que el Directorio aprobara el proyecto.¹⁸³

El Documento de Antecedentes de la Política de Reasentamiento Involuntario explica la importancia de completar el RAP a principios del ciclo del proyecto:

"La evaluación temprana de la magnitud y naturaleza del reasentamiento puede evitarse en caso de ser posible. El desarrollo del plan de reasentamiento debe entonces estar ligado con las etapas de preparación del proyecto principal, de manera que la viabilidad del programa de reasentamiento pueda evaluarse como parte del proyecto general, con la evaluación cubriendo los flujos de costos y beneficios de todos los componentes. ... el plan de reasentamiento debe estar listo para evaluación al mismo tiempo que todos los demás componentes del proyecto..."¹⁸⁴

LA elaboración temprana del RAP también "facilita la selección y adquisición de sitios de reubicación o de la tierra y las viviendas necesarias para el reemplazo en especie..."¹⁸⁵

No obstante, el RAP sólo se concluyó y publicó meses después de que nuestras familias fueron desplazadas del sitio del PIC y dos meses después de que el Directorio del BID aprobó su primer crédito al proyecto. El incumplimiento con la obligación de completar un RAP y todas las demás diligencias necesarias y pasos de consulta nos causaron profundos daños. Los procesos de evaluación del proyecto y selección de ubicación no tomaron en cuenta el grave impacto sobre nuestras vidas. No se observaron intentos por evitar o minimizar este daño antes de que sucediera. Sin advertencia, perdimos una importante fuente de ingreso y seguridad alimentaria. No tuvimos

¹⁷⁸ En violación adicional de la Política Operativa del BID sobre Reasentamiento Involuntario (oct. 1998, OP-710), ¶V(6) ["RP"].

¹⁷⁹ *Idem*, ¶III(2).

¹⁸⁰ *Idem*, ¶V. No se aplican ninguna de las excepciones en el RP, ¶IV.

¹⁸¹ *Idem*, ¶V(1).

¹⁸² *Idem*, ¶V(2).

¹⁸³ *Idem*, ¶V(6).

¹⁸⁴ Involuntary Resettlement Background Paper (Oct. 1998), p. 32 <http://bit.ly/2aBa8f9>. Véase también Eighth Replenishment Document, que requiere que: "Cuando un proyecto tiene un componente de reasentamiento, el plan de reasentamiento se elaborará en las primeras etapas de diseño del proyecto y estará disponible al momento en que el proyecto se presente al Directorio. Este plan de reasentamiento se proporciona en resúmenes ambientales y evaluaciones de impacto ambiental": citado en Involuntary Resettlement en IDB Projects: Principles and Guidelines, pp. 6-7 <http://bit.ly/2b08sNC>.

¹⁸⁵ Involuntary Resettlement Background Paper, p. 33.

oportunidad de planear para esta transición, ni recibimos apoyo transicional adecuado. No se aseguró la disponibilidad de tierras alternativas o de reemplazos antes de nuestro desplazamiento. Cuando se intentó tomar estas medidas era ya demasiado tarde para evitar el daño.

ii. Selección prematura del sitio y falta de un análisis detallado de alternativas

La selección prematura del sitio -- antes de cualquier análisis de impacto integral ambiental, social y de reasentamiento-- violó los requisitos relacionados con llevar a cabo un análisis detallado de alternativas y tomar las medidas para evitar o minimizar el reasentamiento involuntario.

El objetivo dominante de la Política de Reasentamiento consiste en "minimizar el trastorno del sustento de las personas viviendo en la zona de influencia del proyecto, [incluyendo] al evitar o minimizar la necesidad de desplazamiento físico..."¹⁸⁶ Con este objetivo, la Política de Reasentamiento explícitamente requiere que se realice todo esfuerzo para evitar o minimizar la necesidad de reasentamiento involuntario..."¹⁸⁷ Lo anterior incluye requisitos relacionados con:¹⁸⁸

- Llevar a cabo un análisis detallado de las alternativas del proyecto a fin de identificar soluciones económica y técnicamente factibles mientras que a la vez se elimina o minimiza la necesidad de reasentamiento involuntario;
- Contar con un estimado razonable del número de personas con posibilidad de verse afectadas y un estimado de los costos de reasentamiento, al analizar los costos entre alternativas;
- Prestar atención particular a consideraciones socio-culturales, incluyendo la vulnerabilidad de la población afectada y la disponibilidad de sustitución de activos en especie; y
- Cuando un gran número de personas o una parte significativa de la comunidad afectada se vería sujeta a reubicación o el impacto afecta activos y valores que son difíciles de cuantificar y compensar, luego de haber explorado otras opciones, dar seria consideración a la alternativa de no avanzar con el proyecto.

El BID y la UTE no lograron satisfacer ninguno de estos requisitos antes de la selección de la ubicación del PIC y el desplazamiento de las víctimas.¹⁸⁹

Una alternativa obvia que tendría que haberse explorado seriamente fue la posibilidad de otra ubicación para el proyecto. Como se comentó anteriormente, el sitio del PIC se ubica en una de los terrenos más fértiles de la zona, que generó en promedio 1,400 toneladas métricas de alimentos al año,¹⁹⁰ en una región y un país que sufre carencias alimentarias frecuentes.¹⁹¹

¹⁸⁶ RP, ¶II.

¹⁸⁷ *Idem*, ¶III(1).

¹⁸⁸ *Idem* The Environmental and Safeguards Compliance Policy (Ene. 2006, OP-703) también requiere un estudio de alternativas del proyecto, incluyendo un escenario sin proyecto: ¶4.19 <http://bit.ly/2au4FpV> ["Safeguards Policy"].

¹⁸⁹ La Política de Reasentamiento no distingue entre el BID y su cliente al establecer estas obligaciones. En este caso, el BID no garantizó que se cumplieran las obligaciones, por parte del primero o de su cliente, en circunstancias en las que este incumplimiento era obvio

¹⁹⁰ RAP (2011), p. 29; Baseline, p. 2, ¶4.

¹⁹¹ Véase, por ejemplo, LA Times "Drought compounds food crisis in Haiti (Feb. 11, 2016) <http://bit.ly/2aTvpBZ>. De acuerdo con un informe reciente del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, 1.5 millones de haitianos se consideran en un caso de "inseguridad alimentaria seria": *Haiti Emergency Food Security Assessment* (Feb. 2016), p. 1, <http://bit.ly/2aR2LCD>.

“Donde eligieron poner el parque es casi criminal. Dieron prioridad a las necesidades de Estados Unidos, pero no a lo que los haitianos necesitan para producir y alimentarse.”

Doudou Pierre Festil, Líder comunitario, Director Ejecutivo de Mouvement Peyizan Acul y Je Nan Je

Como ya se mencionó, el sitio del PIC se seleccionó con base en información inadecuada e imprecisa acerca de su riesgo e impacto ambiental y social. La evaluación de pre-factibilidad --que identificó la ubicación del PIC en Caracol-Chabert como uno de los tres sitios "preferidos"-- no incluyó ningún análisis integral ambiental y social. También describió erróneamente la tierra como "carente" de cultivo intensivo, cuando lo opuesto era viable, demostrando la dolorosamente inadecuado proceso de diligencia debida. Como resultado, el impacto del reasentamiento ni siquiera formó parte de la recomendación de la ubicación.¹⁹²

Estos errores no se corrigieron antes de la selección del sitio, no antes de la aprobación del proyecto por parte del Directorio. Incluso la Evaluación de Impacto Acumulado encargada por el BID fue crítica del proceso de selección de la ubicación.¹⁹³ El reporte recomendó que las evaluaciones de ubicación futuras consideraran tanto el impacto ambiental (incluyendo el social) como el fiscal.¹⁹⁴

Esta violación continuó durante el proceso de reasentamiento. Aunque el ESIA contenía un breve análisis de alternativas,¹⁹⁵ este análisis no satisface los requisitos de la Política de Reasentamiento del BID ¶III(1), pues:

- No se basó en un estimado razonable del número de personas desplazadas. Estimó que mil personas serían desplazadas, cuando el número observado fue más del triple, cerca de 3,500;¹⁹⁶
- No incluyó una estimación real del costo de reasentamiento, incluyendo al minimizarlos derechos de nuestras familias a la tierra, sosteniendo que era propiedad del Estado sin calificación, cuando contábamos con una serie de derechos legales y consuetudinarios;
- No logró evaluar la disponibilidad de tierra sustituta;
- No logró dar consideración seria a otras ubicaciones, dado que la evaluación de pre-viabilidad de Koios identificó *siete* sitios que eran aceptables o preferidos. El ESIA simplemente hizo un recuento del razonamiento original para elegir el sitio de Caracol, en comparación con los otros dos sitios preferidos, sin cuestionar esta decisión con base en la nueva información acerca de su impacto ambiental y social y sin seriamente ofrecer alternativas (como los otros cuatro sitios aceptables); y
- No dio consideración suficientemente seria a una opción sin proyecto, como se requería dado el gran número de personas que debían ser reubicadas en una zona donde era

¹⁹² Koios (2010), pp. 55-57.

¹⁹³ CIA (2012), p. 2

¹⁹⁴ *Idem*, p. 6.

¹⁹⁵ ESIA, pp. 17-19.

¹⁹⁶ El documento del BID Principles and Guidelines on Involuntary Resettlement en su p. 28, explica lo siguiente: *"Existe una tendencia a subestimar el número de personas afectadas en los estudios iniciales de factibilidad (véase los estudios de casos en el Apéndice I) y esto a menudo lleva a subestimar los costos de reasentamiento. Esto a menudo ha llevado a rebasar costos, escasez de recursos para completar los componentes del plan de reasentamiento y mayor empobrecimiento de la población afectada."*

difícil obtener tierra de reemplazo. Por el contrario, el EIAS simplemente razonaba que el riesgo en términos de reputación era demasiado alto: que el proyecto ya tenía una gran visibilidad y que, si no se aprovechaba en ese momento la oportunidad de recibir inversión internacional, "es muy poco posible que se presente de nuevo en el futuro."¹⁹⁷ Lo anterior no puede ser adecuado para justificar seguir con un proyecto que desplazara a aproximadamente 3,500 personas de la tierra que era su sustento y su seguridad alimentaria, sin opción clara de reasentamiento.

El defectuoso proceso de selección del sitio y la falta de un análisis detallado de alternativas generó graves daños a nuestras familias. Fuimos desplazados sin que se cubrieran los costos totales del desplazamiento o se considerara de forma adecuada la disponibilidad de tierra alternativa. El BID nos impuso los daños del reasentamiento sin haber considerado adecuadamente alternativas menos dañinas.

iii. El fracaso en la recolección de información adecuada y precisa acerca de las víctimas y sus pérdidas

La Política de Reasentamiento requiere, en múltiples puntos, que el BID base sus decisiones en información adecuada y precisa sobre el impacto del desplazamiento y las características de los afectados. En este caso, la debida diligencia, llevada a cabo de manera acelerada e inadecuada -- realizada sólo después del desplazamiento-- hizo este objetivo imposible, en violación de la política del BID.

Se requieren datos de base precisos para lograr un proceso de reasentamiento sólido y justo. La Política de Reasentamiento requiere que se reúna información de base precisa tan pronto como sea posible, incluyendo "información sobre el número de personas que se reubicarán y sobre sus características socioeconómicas y culturales, incluyendo la desagregación por género."¹⁹⁸ Además, la política requiere que el diseño de los paquetes de compensación, así como la consulta comunitaria y los procesos de toma de decisiones tomen en cuenta "las características de la población reubicada de acuerdo a cómo se le identificó en los datos de base desagregados con respecto a género, origen étnico, edad y cualquier otro factor que apunte a casos de necesidades especiales o vulnerabilidad."¹⁹⁹ El BID también está obligado a garantizar que las víctimas reciban compensación justa por toda la gama de pérdidas y recibir el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.²⁰⁰

El BID no cumplió con estos requisitos --y otros-- en varias instancias cruciales.

Por ejemplo, el EIAS equivocadamente estimó que sólo mil personas habían sido desplazadas por el proyecto, cuando el número real se acercaba más a 3,500.²⁰¹ Lo anterior violó los requisitos del BID de proporcionar un estimado razonable de los números de personas con probabilidad de verse afectadas por el desplazamiento, como parte de sus alternativas de análisis y como parte del RAP preliminar que tiene como propósito anexarse al EIAS.²⁰² El EIAS tampoco incluyó una estimación de los costos de reasentamiento, requerida como parte de su análisis de

¹⁹⁷ ESIA, p. 19.

¹⁹⁸ RP, ¶V(1).

¹⁹⁹ *Idem*, ¶V(3).

²⁰⁰ *Idem*, ¶V(3).

²⁰¹ El estimado de base calcula que las familias contaban un promedio de ocho miembros: pç11, ¶2.1. Este cálculo podría ser conservador. En las entrevistas dla Kolektif con 58 víctimas, se encontró que las familias tenían un promedio de 9.4 miembros: Apéndice 6, resumen de los resultados de las entrevistas.

²⁰² RP, ¶¶III(1), V(6).

alternativas.²⁰³ Por último, expresó, sin suficiente investigación o calificación, que el sitio del PIC era propiedad del Estado, a pesar del hecho de que --como el BID terminaría por reconocer-- las familias tenían una gama de derechos formales y consuetudinarios con respecto a la tierra.

Para complicar estas violaciones e incumpliendo el requisito de que el RAP se encontrara disponible antes de la consideración del Directorio,²⁰⁴ el ESIA fue el único documento disponible para el Directorio al momento de aprobar el proyecto. El resultado de estas fallas es que el proyecto fue aprobado y avanzó sin la consideración adecuada de los riesgos y el impacto de la reubicación.

El estudio de base y el RAP también subestimaron el número de familias afectadas, en violación de los requisitos para que el RAP (tanto preliminar como final) incluyera un estimado razonablemente preciso del número de personas que recibiría opciones de compensación.²⁰⁵ El estudio de base y el RAP afirmaron que se había desplazado a 366 familias, aunque a veces el estudio de base sólo registra información sobre 351 de estas familias.²⁰⁶ El mismo mes que se concluyó el RAP --septiembre de 2011-- el BID y la UTE aparentemente se dieron cuenta que se había afectado a 16 familias más, utilizando el nuevo total de 382 para calcular la compensación de seguridad alimentaria.²⁰⁷ El estimado siguió variando, y el ESMR de noviembre de 2013 ya contaba a entre 382 y 383 familias.²⁰⁸ Las versiones de 2014 y 2015 hacían referencia a 442 familias.²⁰⁹ (aunque el ESMR de 2015 inexplicablemente se refería a 383 familias en otro punto²¹⁰). El BID y la UTE confirmaron en una reunión reciente con representantes del Kolektif que el número final es de 442,²¹¹ aunque varios documentos siguen haciendo referencia a diferentes números de familias.²¹²

Los persistentes errores en el recuento de familias desplazadas debería haber sido evidente para el BID, que no tomó los pasos adecuados para corregir los errores de manera oportuna. Como se discutió anteriormente, el BID estaba al tanto que el EIAS estaba incompleto. De aquí que, casi inmediatamente después de finalizar el estudio de base, que especificó que se había desplazado a 366 familias, el BID y la UTE aparentemente compensaron hasta 382 familias por pérdida de seguridad alimentaria, indicio claro de que el estudio de base también estaba incompleto.²¹³

Estos errores no son triviales. y tuvieron dos consecuencias serias. Primero, significó que el

²⁰³ *Idem*, ¶III(1).

²⁰⁴ *Idem*, ¶V(6).

²⁰⁵ *Idem*, ¶V(6). Véase la nota de pie 196, arriba, para una explicación de la importancia de este cálculo.

²⁰⁶ Baseline, pp. 14 y 16.

²⁰⁷ Véase el Cuadro 1 en la sección III.A anterior.

²⁰⁸ 2013 ESMR, ¶¶1.8 y 3.59.

²⁰⁹ 2014 ESMR, ¶4.36; 2015 ESMR, ¶4.33

²¹⁰ 2015 ESMR, Cuadro 3.1, p. 24.

²¹¹ Apéndice 4, minutas de la reunión.

²¹² Cuando se solicitó una lista completa de estas familias, la UTE respondió con una lista de 367 cabezas de familia: la lista de 366 del estudio de base más un nombre adicional: véase sección V, Apéndices 12 y 13 (*Liste des personnes compensées définitivement (Compensation monétaire) + Montants définitifs payés*). Esta lista de 367 familias fue descrita por la UTE como "definitiva" y, aún así, no incluyó los nombres y familias identificables a partir de otros documentos de la UTE: consulte el Apéndice 11, donde hemos combinado la lista de la UTE (los primeros 367 nombres) con información disponible de otras fuentes. El Aide Memoire que distribuyeron el BID y la UTE después de la reunión con representantes de la Kolektif, se refiere sólo a 382 familias, cuando esto se contrapone claramente con comentarios hechos durante la reunión: Apéndice 5, BID y la UTE Aide Memoire.

²¹³ Véase nota de pie 79 anterior.

impacto y los costos del proyecto habían sido subestimados cuando se tomaron decisiones importantes (incluyendo la aprobación del Directorio) para proceder con el proyecto. Segundo, reflejó que un número significativo de familias desplazadas había sido excluido de los primeros procesos de consulta y compensación: en algún punto en septiembre de 2011, parecen haber sido excluidas 16 familias,²¹⁴ mientras que 60 familias más parecen haber sido excluidas hasta algún punto de 2013.²¹⁵

Asimismo, el estudio de base subestimó significativamente los costos sufridos por las víctimas y los recursos necesarios para rehabilitar su sustento y seguridad alimentaria, incumpliendo los requisitos para recabar información de base precisa acerca de las características socioeconómicas y ofrecer una compensación justa por las pérdidas sufridas.²¹⁶ Por ejemplo, el estudio de base no logró identificar el valor de la propiedad destruida en el caso de cada familia. Tampoco logró cuantificar de manera adecuada las necesidades de las familias con relación a su seguridad alimentaria, resultando en una compensación arbitraria "por hectárea" que no tenía relación alguna con las verdaderas necesidades alimentarias de las familias. Asimismo, subestimó el valor de las cosechas perdidas, especialmente para las familias cuyas tierras produjeron más del margen promedio neto. Y tampoco cuantificó de manera adecuada los recursos que las familias necesitarían para restablecer su sustento y su seguridad alimentaria. Aunque reconoció que "es una necesidad restablecer la producción de alimentos para familias vulnerables además de las compensaciones" y que "ofrecer la oportunidad de ganar ingresos agrícolas y no agrícolas es imperativo",²¹⁷ no fue capaz de realizar una evaluación específica de las familias para determinar qué recursos serían necesarios para lograr estos resultados. En general, el BID y la UTE parecen haberse centrado en hacer el paquete de compensación tan simple y general como fuera posible, para su propia tranquilidad, en lugar de buscar genuinamente compensar las distintas pérdidas de las víctimas.

Por último, a fin de cumplir el requisito de diseñar el paquete de compensación basado en una información de base razonablemente precisa, el BID debería haber actualizado la información de base como fuera necesario a medida que pasaba el tiempo y las circunstancias cambiaban. En violación de este requisito, el BID y la UTE no evaluaron y tomaron en cuenta los aumentos en el costo de vida después de 2011 antes de finalizar las compensaciones de cosecha perdida y seguridad alimentaria para 2012 y 2013.²¹⁸ El BID y la UTE tampoco fueron capaces de llevar a cabo una nueva evaluación de los recursos necesarios (y asignar estos recursos) para lograr la rehabilitación socioeconómica de las víctimas, en circunstancias en las que no se ofrecía ya tierra de reemplazo y habían pasado dos años desde que se finalizó el RAP.

Fue inevitable entonces que se desarrollaran paquetes de compensación con base en esta información inadecuada e imprecisa, lo que demostró la imposibilidad de compensar y rehabilitar el sustento y la seguridad alimentaria de las víctimas.

iv. No considerar y mitigar el riesgo de género

²¹⁴ Cuando se llegó a versiones definitivas del EAIS, el estudio de base, el RAP y los acuerdos de compensación. Aunque entendemos que se distribuyó la compensación de seguridad alimentaria a 382 familias, no se identificaron en ningún documento antes de este punto.

²¹⁵ Con base en el hecho de que el IGAS de noviembre de 2013 siguió refiriéndose a 382/383 familias: 2013 ESMR, ¶¶1.8, 3.59.

²¹⁶ RP, ¶V(3).

²¹⁷ Baseline, p. 2, ¶6.

²¹⁸ Véase la sección III.A arriba y la sección III.B.ix, más adelante

Como parte de esta brecha de información, el BID también violó su obligación de identificar, analizar y mitigar los riesgos e impactos de la diferenciación de género asociados con el reasentamiento.²¹⁹ La Política de Reasentamiento específicamente requiere que la información de base se encuentre "desagregada por género".²²⁰ Los paquetes de reasentamiento también deben tomar en cuenta las diferencias de género.²²¹ La Política Operativa del BID sobre Igualdad de Género en el Desarrollo ("Política de Igualdad de Género" también contiene obligaciones relevantes, incluyendo requisitos de:

- Tomar en cuenta la diversidad de estructuras familiares, en particular, las familias encabezadas por mujeres: ¶4.11(b);
- Tomar en cuenta diferencias de género, incluyendo las relacionadas con diferencias en el uso del tiempo: ¶4.11(c);
- Tomar en cuenta las desigualdades de género en el poder y la capacidad de la toma de decisiones y buscar la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de consulta pública: ¶4.11(g), ¶4.6;
- Prestar particular atención a las vulnerabilidades de las mujeres pobres, indígenas y de ascendencia africana: ¶4.4;
- Requerir un análisis de relevancia de temas de género durante la preparación de sus operaciones, de manera que se identifique y atiendan los riesgos e impactos adversos: ¶¶4.13(a), 4.13(b), 4.19. Estos riesgos podrían incluir: no tomar en cuenta los derechos de las mujeres a heredar o poseer tierras; introducir desigualmente el trabajo no pagado; introducir condiciones que limitan la participación de las mujeres; negar prestaciones basadas en licencia de maternidad o embarazo; y, aumentar el riesgo de la violencia de género: ¶4.15;
- Introducir medidas para evitar, prevenir o mitigar cualquier impacto adverso o riesgo de exclusión con base en género: ¶¶4.13(a), 4.13(b), 4.15; y
- Establecer indicadores que midan la implementación de esta política por parte del Banco, incluyendo los informes de seguimiento de proyectos que contemplen resultados específicos de género: ¶5.1, Apéndice 1.

El documento de antecedentes sobre el reasentamiento involuntario del BID identifica dos riesgos de género que son particularmente relevantes en el contexto del desplazamiento:²²²

- Primero, resulta importante garantizar que las mujeres productoras y trabajadoras reciban compensación y programas de rehabilitación para cubrir la pérdida de sus activos personales, actividades productivas y recursos de propiedad común. No debería suponerse que la compensación en efectivo se distribuya igualmente dentro de la familia; y
- Segundo, la planeación de reasentamiento debería tomar en cuenta los puntos de vista de las mujeres afectadas por este y reflejar sus prioridades, lo que podría diferir

²¹⁹ RP, ¶¶V(1) y V(3) y Operational Policy on Gender Equality in Development (OP-270) (2010) ["Gender Equality Policy"] <http://bit.ly/2b21aqD>.

²²⁰ RP, ¶V(1).

²²¹ *Idem*, ¶V(3).

²²² Involuntary Resettlement Background Paper, p. 28

considerablemente de las de los hombres.

Ambas observaciones son relevantes a este caso.

Es bien sabido que las mujeres tienen un papel como generadoras de ingreso en el sector agrícola de Haití.²²³ Este papel necesita reconocerse en los paquetes de compensación. No debería suponerse que la compensación ofrecida a los jefes de familia (hombres en su mayoría) serán distribuidos a las mujeres de la familia.

Además, debido a las diferencias de género en las oportunidades de empleo y preferencias de hombres y mujeres en el área, la rehabilitación del sustento de las mujeres probablemente requiere recursos, capacitación y apoyo financiero.. diferentes.²²⁴ Este fue en particular el caso una vez que se tomó la decisión de no ofrecer tierra en sustitución como compensación, requiriendo que las mujeres llevaran a cabo otras actividades como fuente de ingreso. Se ha indicado en informes que en Haití, las mujeres en las áreas rurales enfrentan más dificultades para acceder a oportunidades de empleo formal y recursos educativos.²²⁵ Con base en entrevistas que hemos realizado, encontramos que más mujeres han establecido pequeñas empresas a comparación de los hombres, que han encontrado más trabajo agrícola y manual, ya sea por necesidad o preferencia.²²⁶ En consecuencia, las mujeres se han beneficiado significativamente más del apoyo para el desarrollo empresarial a diferencia de, por ejemplo, entrenarse en las aptitudes manuales. Aunque algunas mujeres del grupo de víctimas han tomado empleos en el PIC, estos puestos traen consigo varias inquietudes acerca de violaciones laborales y condiciones deficientes de trabajo, incluyendo un mayor riesgo de acoso sexual (que se discute más detalladamente en la sección IV).

Asimismo, las mujeres encabezaron un número significativo de las familias: 32 de acuerdo con el estudio de base.²²⁷ Las mujeres haitianas de las zonas rurales tienen acceso reducido a servicios de salud,²²⁸ más inestabilidad financiera y problemas para asegurar los recursos necesarios para alimentar a sus familias.²²⁹ Aún así, se ha discutido con anterioridad que sólo cuatro de estas familias encabezadas por mujeres fueron tratadas como "vulnerables" para fines de los paquetes de compensación de 2011 y los documentos a la fecha sólo identifican claramente una familia encabezada por una mujer tratada como "vulnerable" para la ronda de compensaciones de 2013.²³⁰ Las otras familias recibieron compensación en efectivo únicamente y, con base en la información a la fecha, estas mujeres jefes de familia recibieron en promedio \$1,000 dólares menos como compensación final en efectivo que sus contrapartes hombres, exacerbando los obstáculos

²²³ ESIA, p. 98. Véase también *Baseline*, p. 15; *Gender Action Building Back by Half? Gender Issues in IFI Investments in Post-Earthquake Haiti* (2013), p. 11 <http://bit.ly/2aBIVNf> ["Gender Action Building Back by Half"]; y la historia de Marie Marthe Rocksaint arriba.

²²⁴ Véase the CIA (2012), p. 27. El Cuadro 9 registra que, con base en un estudio realizado en Caracolen 2007, un número mucho mayor de mujeres que de hombres reportó que su ingreso provino de la pesca, la agricultura y la ganadería (98 por ciento y 95 por ciento de los participantes eran hombres) mientras que muchas más mujeres reportaron que su ingreso provenía de actividades comerciales (90 por ciento de participantes eran mujeres).

²²⁵ Bureau des Avocats Internationaux y otros *Gender Issues Facing Women and Girls*:

Review of Haiti's Report under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (22 ene. 2016), p. 8 <http://bit.ly/1QJo6XC>; *Gender Action Building Back by Half*, p. 12.

²²⁶ Apéndice 6, resumen de entrevistas.

²²⁷ El estudio de base no es una lista completa, pues no identifica a 76 familias.

²²⁸ *Gender Issues Facing Women and Girls*, p. 8.

²²⁹ *Gender Action Building Back by Half*, p. 12.

²³⁰ Véase sección 0. La información con la que contamos sobre jefes de familia vulnerables por razones de género en 2013 es incompleta.

que ya enfrentan estas familias para lograr seguridad financiera y alimentaria.²³¹ Durante las entrevistas a profundidad con 16 mujeres jefes de familia en mayo de 2016:²³²

- Dos de las 16 (12.5 por ciento) reportaron que no tenían actividades generadoras de ingreso (en comparación con tres de cada 36 hombres jefes de familia (8 por ciento));
- Ninguna reportó estar satisfecha con sus condiciones de vida en comparación con tres hombres jefes de familia que afirmaron estar satisfechos; y
- Todas reportaron que sus ingresos son inestables en comparación con los tres hombres jefes de familia que expresaron que sus ingresos son "algo estables" y uno indicó que su ingreso es "estable".

Por último, incluyendo a las niñas, es probable que el género femenino se haya visto desproporcionadamente afectado por ciertas fallas en los paquetes de compensación y rehabilitación y una mejor inclusión de sus puntos de vista habría evitado estos resultados negativos. Dentro de la sociedad haitiana, las mujeres tienen la principal responsabilidad por alimentar a la familia y, por ende, se ven particularmente afectadas por la pérdida de seguridad alimentaria.²³³ También tienen un importante papel en apoyar la educación de sus hijos. Luego de su desplazamiento, las víctimas han enfrentado dificultades para financiar la educación de sus hijos como resultado de la pérdida de ingreso.²³⁴ Desafortunadamente, como resultado de estas dificultades financieras, es probable que las niñas hayan sufrido de manera desproporcionada la pérdida de educación, pues las víctimas probablemente dieron prioridad a sus hijos hombres en cuanto a la educación, mientras que se esperó que las hijas desempeñaran tareas domésticas.²³⁵ Una mejor inclusión de los puntos de vista de las mujeres probablemente habría llevado a la prioridad de la seguridad alimentaria y los programas educativos a un nivel más alto, como parte de un programa integral de compensación.

Sin embargo, los temas de género no se discutieron seriamente en ningún punto del proceso de reasentamiento.²³⁶ En ninguna parte el PAR o el estudio de base atendieron explícitamente los riesgos o el impacto de género, en violación de los requisitos de la Política de Reasentamiento o la de Igualdad de Género.²³⁷ Ni el estudio de base ni el PAR prestaron suficiente

²³¹ Véase Apéndice 11.

²³² Apéndice 6, resumen de los resultados de las entrevistas.

²³³ ActionAid (2015), p. 10; Gender Action CIP, p. 1.

²³⁴ Apéndice 6, resumen de resultados de entrevistas; entrevistas adicionales con Dieudonné y Judith Florvil con fecha 11 de julio 2016 (disponibles a petición expresa).

²³⁵ Véase Gender Action *Building Back by Half*, p. 12; Equality Now and others *The Haiti Gender Shadow Report* (2010), p. 19 <http://bit.ly/2ayIn9I>. "Debido a los roles de género estereotípicos, el costo de la educación privada y la desigual división del trabajo, las niñas y las mujeres de bajos ingresos a menudo tienen menos oportunidades de recibir una educación de calidad. Esta desigualdad de género en la educación se ve exacerbada por la devastación que causó el terremoto del 12 de enero, pues las familias de bajos ingresos ahora tienen aún menos recursos para enviar a sus hijos a la escuela..."

²³⁶ El Haiti Social Impact Assessment del BID (Feb. 2012) <http://bit.ly/2aEZsfM> presenta recomendaciones de género sobre condiciones laborales en el PIC, y el CIA (2012) presenta conclusiones de género acerca de los riesgos ambientales; sin embargo, ningún documento atiende los riesgos o el impacto de género con relación al desplazamiento. Mientras que la EIAS destacó el significativo papel de las mujeres como generadoras de ingreso agrícola, este no es un análisis suficiente del nexo entre el reasentamiento y el género: p. 98.

²³⁷ En violación de la RP, ¶¶V(1), V(3); Gender Equality Policy, ¶¶ 4.4, 4.11(b) y (c), 4.13 (a) y (b), 4.15, 4.19. Esto es

atención a la mayor vulnerabilidad de las mujeres en términos de seguridad alimentaria o generación de ingresos, así como tampoco en términos de la mayor vulnerabilidad de las niñas en términos de la pérdida de acceso a la educación.²³⁸ Cuando la Kolektif y sus representantes preguntaron directamente, el BID y la UTE no describieron ninguna planeación específica de género.²³⁹

“Cuando dieron la compensación no nos preguntaron, dijeron que lo que tenían era lo que nos estaban dando... dijeron ‘si no tomas la compensación vas a perderlo todo. Estás obligada a tomarlo si no quieres perderlo todo. Toma lo que te estamos dando. Yo dije ‘no estoy de acuerdo’ pero ellos dijeron ‘si no quieres esta compensación vas a perderlo todo’”

“No podía comprar tierra. El dinero no era mucho en realidad. Con el dinero que nos dieron podía pagar algunas cosas pequeñas para los niños, pagar algunas deudas que tenía y gastos médicos. No tenía dinero para hacer nada más. Hoy todavía estoy enferma.”

“Si hubiera podido encontrar tierra para comprar con el dinero que daban la había comprado.”

“Hasta tuvimos que vender el ganado porque no teníamos dónde ponerlos. El dinero ni siquiera alcanzaba para comprar ganado.”

“Hoy tengo muchas dificultades...Tengo más y más deudas”
Vigenise Bien Aime



Tampoco se recabaron ni tomaron en cuenta los puntos de vista de las mujeres durante los procesos de consulta.²⁴⁰ Sólo siete mujeres víctimas pertenecían a ALENAC (junto con diez mujeres que no eran víctimas). El BID y la UTE no garantizaron que la comunidad más general de víctimas contara con suficiente información y oportunidades para ser consultadas o participar de forma significativa en el desarrollo de los paquetes de compensación.²⁴¹ Dados los obstáculos a la

desafortunadamente común en los proyectos de desarrollo, incluyendo los de Haití después del terremoto: Gender Action *Building Back by Half*, p. v, 30-31.

²³⁸ *Idem*

²³⁹ Apéndice 4, minutas de la reunión.

²⁴⁰ Violando la Política de Equidad de Género, ¶¶4.6, 4.11(g) y obligaciones de consulta general (véase la sección III.B.vii).

²⁴¹ Para más detalle, véase la discusión de temas de consulta en la sección III.B.vii más adelante.

igualdad e la participación femenina en Haití,²⁴² el BID y la UTE necesitarían haber asegurado que se realizaran ciertas reuniones, grupos de enfoque y entrevistas individuales con víctimas mujeres, para garantizar que fueran consultadas apropiadamente así como asegurar su participación y, en última instancia, su acuerdo.

Como resultado de lo anterior, los paquetes de compensación no incluyeron medidas específicas para mitigar el impacto de género, garantizar la compensación de pérdidas entre las mujeres o asegurar la rehabilitación socioeconómica de su sustento en detrimento de las víctimas mujeres y sus familias.

v. Evaluación inadecuada e incongruente del riesgo de empobrecimiento

La Política de Reasentamiento del BID requiere que el Banco lleve a cabo “en la primera oportunidad posible” “un análisis detallado... a fin de determinar los riesgos [de empobrecimiento] y diseñar medidas preventivas para minimizarlos.”²⁴³ Cuando la información de base indica que un número significativo de personas que serán reubicadas pertenece a grupos marginados o de bajos ingresos, debe prestarse consideración especial a los riesgos de empobrecimiento a los que podrían quedar expuestos como resultado del reasentamiento.²⁴⁴ En los casos en los que se presentan riesgos de empobrecimiento, sólo deberá ofrecerse compensación en efectivo como opción si las circunstancias de los desplazados, las condiciones de mercado y los servicios disponibles garantizan que se podrá invertir de modo que restaure su nivel de vida.²⁴⁵ Esta última obligación es resultado de una amplia experiencia de desarrollo que demuestra que los pagos en efectivo no son apropiados como único medio de compensación,²⁴⁶ especialmente cuando quienes la reciben ya son vulnerables al empobrecimiento.

Estas obligaciones se aplicaron claramente a este caso. El Estudio de Base registra que más de 75 por ciento de las familias víctimas vivían bajo la línea de pobreza,²⁴⁷²⁴⁷ y que la gran mayoría de nosotros dependía en gran medida de nuestra tierra para obtener seguridad alimentaria e ingreso.²⁴⁸²⁴⁸ La rehabilitación de nuestra tierra y seguridad alimentaria siempre sería increíblemente desafiante: tanto los alimentos como la tierra son escasos en el norte de Haití y hemos enfrentado fuertes incrementos en el costo de vida desde 2011. La escasez de tierra se ve exacerbada por un sistema de tenencia de la tierra altamente informal: incluso USAID ha experimentado intensas dificultades para asegurar un título de propiedad. Los mismos documentos del proyecto del BID reconocen que somos extremadamente vulnerables a los cambios externos,²⁴⁹²⁴⁹ y que, a pesar de cierta compensación, quedaríamos más pobres como resultado de nuestro desplazamiento.²⁵⁰²⁵⁰

Como se describió de manera detallada con anterioridad, este riesgo de empobrecimiento se concretó. Debido a la falta de un apoyo adecuado del BID o de la UTE, no hemos obtenido

²⁴² Véase *The Haiti Gender Shadow Report*, p. 9; *Gender Issues Facing Women and Girls*, pp. 3-4.

²⁴³ RP, ¶IV(3).

²⁴⁴ *Idem* El empobrecimiento se presenta por uno de los siguientes seis medios: (i) pérdida de vivienda, tierra, acceso a propiedad común u otros derechos a propiedad debido a la falta de un título de propiedad claro, presión económica u otros factores; (ii) pérdida de empleo; (iii) pérdida de acceso a medios de producción (iv) inseguridad alimentaria, aumento en la morbilidad y mortalidad; (v) desarticulación de redes sociales y (vi) pérdida de acceso a la educación. *Idem* Varios de estos factores son claramente relevantes en este caso.

²⁴⁵ *Idem*

²⁴⁶ Véase, *Involuntary Resettlement Background Paper*, pp. 21, 24,30

²⁴⁷ 284 familias de 366 identificadas en esa época: *Baseline*, p. 2, ¶6.

²⁴⁸ Véase nota de pie 47 anterior.

²⁴⁹ ESIA, p. 96.

²⁵⁰ CIA (2012), p. 5, donde se reconoce el riesgo de que “a pesar de algún nivel de compensación el proceso de desplazamiento de agricultores y rancheros rurales podría empeorar la pobreza rural.”

tierras de reemplazo con la misma calidad y en su lugar hemos recurrido a otras actividades generadoras de ingresos que no brindan ingresos equivalentes ni seguridad alimentaria.²⁵¹ Algunas familias no tienen ningún tipo de ingreso.²⁵² La compensación en efectivo se utilizó en su mayor parte para cubrir necesidades inmediatas —necesidades que normalmente se habrían satisfecho con los ingresos y la producción de nuestra tierra— y ahora estamos peor que antes.²⁵³

El BID incumplió con su obligación de realizar un análisis detallado del riesgo de empobrecimiento —y tomar las medidas de mitigación adecuadas— antes de que ocurriera el desplazamiento. Además, el análisis de “vulnerabilidad”²⁵⁴ que se completó (con retraso) en el estudio de base de 2011 y que se actualizó en 2013, tuvo fallas importantes. Como resultado, estos análisis no cumplieron con los requisitos para un análisis “detallado” del riesgo de empobrecimiento, tal como lo ordena la Política de Reasentamiento ¶IV (3). Entre otros asuntos:

- Si bien el estudio de base reconoció que más de 75% de las familias vivían por debajo de la línea de pobreza, solo 51 hogares fueron considerados como vulnerables en 2011 y solo 35 en 2013.²⁵⁵
- Al parecer, de los 51 hogares identificados como vulnerables en 2011, solo ocho fueron considerados como vulnerables en 2013.²⁵⁶ No hemos visto, ni recibido ninguna explicación sobre los criterios utilizados para la evaluación de vulnerabilidad de 2013 ni sobre el motivo por el cual esta evaluación tuvo resultados tan diferentes.²⁵⁷
- El género debió haber quedado claramente reconocido, en particular, pero no de manera exclusiva, en relación con los hogares encabezados por mujeres. A pesar de los mayores riesgos de inseguridad económica para los hogares encabezados por mujeres, solo cuatro de esos 32 hogares fueron considerados como vulnerables en 2011,²⁵⁸ y hasta ahora los documentos solo identifican con claridad a un hogar encabezado por una mujer que se consideró como vulnerable en 2013.²⁵⁹
- La edad mayor a los 65 años, después de la cual se hace increíblemente difícil recuperar el sustento, debió estar incluida desde el principio como criterio.²⁶⁰ Aunque el BID y la UTE nos informaron que los mayores de 65 años estaban incluidos en el análisis de 2013, los resultados indican lo contrario: el estudio de base identificó 68 jefes de familia mayores de 65 años de edad en 2011 (entre solo 351 hogares

²⁵¹ Apéndice 6, Resumen de los resultados de las entrevistas.

²⁵² *Idem.*

²⁵³ *Idem.*

²⁵⁴ Así se describió el análisis en el estudio de base y RAP (2011). Usamos el mismo término con fines de consistencia.

²⁵⁵ Véase la lista de los identificados como vulnerables en 2011 y 2013 en el Apéndice 10.

²⁵⁶ *Idem.*

²⁵⁷ A pesar de solicitar esa información del BID y la UTE. Véase la Sección V y el Apéndice 12.

²⁵⁸ Compárese RAP (2011), el Apéndice 11 (que identifica cuatro hogares encabezados por mujeres) o el Apéndice 10 de esta denuncia, con los 32 hogares identificados en el estudio de base 2011, p. 1, ¶2 y pp. 15-16. Había potencialmente más hogares como esos, dado que el estudio de base no es exhaustiva.

²⁵⁹ Véase nuestra comparación entre las dos listas en el Apéndice 10 y la nota 171 anterior.

²⁶⁰ Solo el grupo de edad por encima de los 75 años quedó considerado como un criterio de vulnerabilidad en 2011: véase RAP (2011), Apéndice 10. No hemos recibido ninguna confirmación clara por escrito sobre los criterios de 2013.

identificados hasta el momento);²⁶¹ sin embargo, se identificó a 35/36 hogares como vulnerables *en su totalidad* en 2013. Identificamos al menos a 32 personas mayores de 65 años de edad en 2013, pero no han sido consideradas como vulnerables.²⁶²

La situación de Anne Leroy ejemplifica tanto los desafíos enfrentados como el tratamiento inadecuado e incoherente de los hogares particularmente vulnerables. Anne es una mujer jefa de familia, poseía un terreno pequeño pero productivo (~ 0.5ha) en el CIP. En 2013 tenía 69 años de edad. A pesar de esos indicadores de vulnerabilidad, Anne recibió un pago único de dinero en efectivo como indemnización final (USD\$ 3 502). No ha podido establecer un ingreso sostenible. Aunque Anne era miembro de ALENAC, expresó su inconformidad por la compensación y el proceso de consulta. En una entrevista del 11 de julio de 2016, nos comentó:

“Hoy ya no puedo hacer nada para ganar dinero, son mis hijos quienes me ayudan, cuando necesito comprar agua, o lo que sea. Algunos tienen pequeños negocios, yo ni siquiera puedo tener uno porque no tengo suficiente dinero”.

“La compensación no fue buena para nosotros. Antes nuestras tierras nos daban muchas cosas, muchas, muchas. Sembrábamos muchas frutas y verduras, producíamos muchos guisantes, maíz, ¿sabe? Pues ahora no tenemos suficiente dinero, cuando vamos al mercado, ya es difícil comprar comida para los niños, si quieres comprar aceite, especias, carne, necesitas dinero, y ahora no lo tenemos. Antes de tener tomates, guisantes, cuando íbamos al mercado podíamos ganar dinero y comprar comida. Ahora no puedo comprar”.

“¡No conseguí lo suficiente para comprar tierra! ... lo que nos dieron, ¡hoy ni siquiera alcanza para comprar agua! Tengo un hijo que tuvo un accidente en Santo Domingo, y usé el dinero para él, así que entonces ya no tengo más dinero. ... Prometieron casas, terrenos, negocios”.

“¡Nada de eso! Nos dieron algo de dinero, y después se marcharon. No nos dieron lo que prometieron. No entiendo por qué no cumplieron sus promesas ... Al final, el poco dinero que recibimos no fue suficiente para que la gente viviera”.

Anne Leroy.

En lo general, los criterios de vulnerabilidad no lograron considerar toda la gama de circunstancias en las que vivíamos:

- Nuestra dependencia de la agricultura como medio de subsistencia y de seguridad alimentaria;
- la escasez de alimentos y de tierras en el norte de Haití, con la afluencia de población en la zona ejerciendo cada vez más presión sobre ambas;
- la inseguridad en la tenencia de la tierra desde tiempos remotos, como el historial de confiscación de tierras a agricultores pobres en la zona;
- el estatus socioeconómico marginal y otras desigualdades que viven los descendientes de africanos en la región;²⁶³

²⁶¹ Con 21 casos de edad mayor que 75 años, el criterio de edad para vulnerabilidad en 2011.

²⁶² Apéndice 11, Cuadro de compensación. Véase también el Apéndice 6, Resumen de los resultados de las entrevistas: nueve de 58 jefes de familia entrevistados en mayo de 2016 tenían más de 65 años de edad en 2013, y todos ellos recibieron una compensación en efectivo, por lo que no se les consideró como vulnerables.

²⁶³ El BID reconoce que los descendientes de africanos enfrentan desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas en la región: véase <http://bit.ly/2asO7fJ>. Su Política de Equidad de Género ordena explícitamente que el Banco atienda a las mujeres descendientes de africanos: ¶4.4 No es correcto suponer que no existen desigualdades similares en Haití,

- la posición extremadamente vulnerable en la que se nos colocó cuando perdimos nuestras tierras y nuestros cultivos sin compensación y tuvimos que esperar más de tres años antes de recibir una compensación final.

En esta amplia gama de circunstancias, consideramos que una buena parte de las víctimas, si no es que todas las víctimas, enfrentaron importantes riesgos de empobrecimiento. Aun así, el BID y la UTE no lograron identificar estos riesgos y proporcionaron paquetes de compensación en efectivo a muchas víctimas a pesar de estos riesgos, en contra de la Política de Reasentamiento, ¶IV (3). Si se hubiera llevado a cabo un análisis exhaustivo de riesgo, el BID y la UTE se habrían visto obligados a considerar las condiciones sociales y económicas necesarias para asegurar que el dinero se pudiera invertir de manera que se restaurara nuestro nivel de vida.²⁶⁴ Dadas la escasez de tierras y la inseguridad de tenencia en el norte de Haití, nuestro conocimiento financiero limitado y las presiones económicas inmediatas provocadas por la pérdida de nuestra tierra, esas condiciones económicas no existían, al menos no sin los servicios complementarios para apoyar la planificación económica y la inversión.

La falta de un análisis exhaustivo del riesgo de empobrecimiento y de las medidas que mitiguen esos riesgos de manera adecuada por parte del BID y de la UTE, ha contribuido a la pobreza y demás daños que hemos experimentado y seguimos enfrentando.

vi. Una inadecuada diligencia debida con respecto a la disponibilidad de tierras alternas

Un grave error en el proceso de compensación fue la decisión del BID y la UTE para incumplir el acuerdo de entregar tierras de reemplazo. Como se dijo antes, existen muchos aspectos de esta decisión que siguen siendo confusos para las víctimas. No obstante, parece que un factor importante en la decisión de abandonar esta forma de compensación fue la dificultad para localizar en la zona suficiente tierra de reemplazo con calidad de producción equivalente.

Es obligación del BID investigar la disponibilidad de bienes de reemplazo “en especie” como parte de su diligencia debida: en su análisis de alternativas,²⁶⁵ mediante consultas con la comunidad anfitriona²⁶⁶ y en un análisis de impacto de la comunidad anfitriona.²⁶⁷ La información obtenida de esa diligencia debida debió haber informado sobre las decisiones del BID en torno a la ubicación del proyecto, costo, aprobación y diseño, incluyendo los recursos necesarios para compensar a las víctimas, entre otros. Sin embargo, esta diligencia debida no se llevó a cabo con suficiente anticipación ni a un nivel suficientemente alto, y no se incorporó de manera adecuada en la toma de decisiones del BID.

La Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), el único documento de proyecto que analiza el impacto y los costos de reasentamiento que estaba disponible para el Consejo antes

simplemente porque los descendientes de africanos conforman la gran mayoría de la población haitiana (95%). El Banco Mundial advierte que una buena parte del poder político y económico del país está concentrado en una élite con piel más clara: World Bank *Haiti - Social resilience and state fragility in Haiti: A country social analysis* (27 de abril de 2006).

²⁶⁴ RP, ¶IV(3).

²⁶⁵ *Idem*, ¶III(1).

²⁶⁶ La consulta con la comunidad anfitriona está explícitamente requerida por RP, ¶V(2). Si bien comprendemos que se llevó a cabo algún tipo de consulta, no logró aportar información precisa, *pronta* sobre la disponibilidad de tierras de reemplazo.

²⁶⁷ RP, ¶V(5).

de que aprobara este proyecto, no incluye ninguna evaluación de la disponibilidad de tierras de reemplazo.

“¡No obtuve suficiente dinero para comprar otras tierras! La tierra que teníamos la heredamos. ... cuando vinieron, preguntaron: ‘¿Qué quieres?’ Y dijimos: ‘¡Es tierra lo que necesitamos!’ Cuando dijimos que queríamos tierras, iban a darnos tierra de algún otro lugar, ¡que no aceptamos! Porque la tierra que querían darnos la habrían tomado de alguien más para dárnosla. Cuando no encontraron tierras, dijeron: ‘Les daremos dinero’ ... nos hicieron firmar. Nos dijeron: ‘Firma! Ahora debes firmar.’ ... ¡Y no estuvimos de acuerdo! Pero cuando dijeron: ‘Vamos a pagar’ entonces sí estuvimos de acuerdo y firmamos”.

Louis Tirène.



Créditos: Antoine Bouhey/ActionAid

Una vez que el desplazamiento ya había ocurrido y el proyecto estaba aprobado por el Consejo del BID, el RAP reconoció que habría dificultades para obtener tierras de reemplazo de calidad equivalente. Y dijo lo siguiente:

*“La investigación y las conversaciones iniciales con personas de la localidad revelaron que no hay otra tierra equivalente a las que ahora ocupan en términos de área, suministro de agua, cercanía a sus hogares, y fertilidad. Como dijo uno de los agricultores durante una reunión comunitaria en Fort Liberté: ‘... ya teníamos las mejores tierras de la región, no hay adónde ir’”.*²⁶⁸

Sin embargo, el RAP sostuvo que un lugar alternativo en Fond Blanc (Terrier Rouge), identificado por la UTE, podría desarrollarse para otorgar tierras de reemplazo a las 365 familias que solicitaron esta forma de compensación.²⁶⁹ El RAP no logró reconocer que otras comunidades ya estaban ocupando y cultivando esas tierras y no pudo determinar si podíamos ser acomodados con esas familias. Este análisis no cumplió con los requisitos de diligencia debida de bienes de reemplazo de la Política de Reasentamiento.²⁷⁰

Además, sigue siendo confuso para nosotros si se investigaron *completamente* otras oportunidades de tierras de reemplazo —en Terrier Rouge y en otros lugares potenciales. Como

²⁶⁸ RAP (2011), p. 9.

²⁶⁹ *Idem.* Esto requeriría: inversiones significativas en desarrollo, seguridad, expansión del acceso a la infraestructura e irrigación, y supervisión técnica “para restaurar una atmósfera satisfactoria y productiva”.

²⁷⁰ RP, ¶III(1), V(2) y V(5).

se mencionó antes, entendemos que es posible que las víctimas hubieran podido acomodarse en Terrier Rouge, no obstante esta opción fue rechazada por el BID y la UTE debido al costo de ciertas condiciones exigidas por quienes ya estaban cultivando esas tierras.²⁷¹ Una vez que se desistió de Terrier Rouge, no tuvimos noticias de que otros lugares estuvieran bajo investigación adecuada.

Como resultado, esperamos casi tres años por tierras de reemplazo que nunca llegaron. Al final, recibimos un paquete de compensación en efectivo inferior cuando a fines de 2013 se dejó atrás la propuesta para obtener tierras de reemplazo.

C. Falta de consulta y participación significativas

Las fallas de diligencia debida en este caso se exacerbaron por la falta de consultas. La Política de Reasentamiento del BID junto con su Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias ordenan consultas y participación significativa de las personas afectadas desde la etapa inicial y durante el proceso de compensación y planificación del proyecto.

Primero, en relación con el proceso de reasentamiento, la Política de Reasentamiento ordena:

- La participación de la comunidad mediante consultas que se lleven a cabo de manera oportuna y sean adecuadas cultural y socialmente, y mediante la inclusión de una muestra representativa tanto de la comunidad desplazada como de la comunidad anfitriona. Las consultas deben realizarse durante la fase de diseño y deben continuar durante toda la ejecución y supervisión del plan. Es necesario identificar a los subgrupos más vulnerables así como representar sus intereses de manera adecuada: ¶V(2).
- La preparación de un plan de reasentamiento preliminar como parte de la EIAS, que debe someterse a un proceso de consulta significativa con la población afectada así como estar disponible como parte de la EIAS, antes de la misión de análisis. La EIAS/RAP preliminar debe contener pruebas de consulta con las poblaciones afectadas: ¶V(6).

Además, los Principios y lineamientos sobre Reasentamiento involuntario señalan que “los planes de proyectos, políticas, procedimientos de compensación y derechos legales ... deben hacerse disponibles de forma accesible para toda la población afectada, en idiomas locales de ser necesario, mediante el uso de radio o televisión para llegar a las personas que tienen poca o ninguna educación formal”.²⁷²

En segundo lugar, en cuanto a los documentos más generales del proyecto, la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (“Política de Salvaguardias”) requiere:

- Consulta oportuna y adecuada así como información durante el proceso de EIAS: ¶4.19.
- Tanto las operaciones de categoría “A” como las de categoría “B” requieren consultas

²⁷¹ Véase la Sección III. A. i, en particular la pág. 18

²⁷² Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID: Principios y lineamientos (*Involuntary Resettlement in IDB Projects: Principles and Guidelines*), p. 21.

con las partes afectadas y la consideración de sus puntos de vista como parte del proceso de evaluación ambiental. Las operaciones de la categoría “A” requieren específicamente al menos dos consultas durante la preparación del proyecto: una durante la fase de definición del alcance de la evaluación ambiental o de los procesos de diligencia debida, y otra durante la revisión de los informes de evaluación: ¶4.20.²⁷³

- Para fines de consulta, debe brindarse información adecuada en el o los lugares, en formatos e idiomas necesarios para permitir que las partes afectadas puedan consultarla de manera significativa para formarse una opinión y comentar sobre el curso de acción propuesto: ¶4.20.
- Durante la ejecución, las partes afectadas deben ser informadas acerca de las medidas de mitigación ambientales y sociales asociadas que les afectan, tal como se define en el Plan de Gestión Ambiental y Social (“PGAS”): ¶4.20.
- El BID revisa la EIAS y el PGAS antes de la aprobación del proyecto para asegurar el cumplimiento de las normas del BID, y considera la calidad de la documentación en su proceso de aprobación del proyecto: ¶4.19.

Además, la Política de Acceso al Información del Banco —junto con las Políticas de Reasentamiento y Salvaguardias— crea la suposición de divulgación de todas las evaluaciones ambientales y sociales relacionadas con proyectos del sector público: dicha divulgación es necesaria para facilitar la participación de la comunidad en el desarrollo y proceso de monitoreo del proyecto. Por ejemplo, la EIAS debe ser preparada con su PGAS y divulgarse al público antes de la misión de análisis del Banco.²⁷⁴ Deben publicarse también otros análisis ambientales pertinentes.

Una vez más, la infracción más grave a estos requisitos fue el hecho de que el desplazamiento ocurrió antes de que se realizara cualquier consulta. No obstante, incluso la consulta pública tardía que se produjo durante el desarrollo del RAP y la EIAS no cumplió con los requisitos del BID.

En relación con el desarrollo del RAP en específico:

- La consulta se retrasó y no se inició hasta poco antes de que el Consejo aprobara el proyecto. Además de una reunión inicial en enero de 2011, parece que las primeras reuniones comunitarias sustanciales que aportaron información detallada sobre el proceso de reasentamiento a un amplio grupo de víctimas fueron el 25 de junio de 2011:²⁷⁵ alrededor de la misma hora en que se terminó la EIAS,²⁷⁶ y un mes antes de que el Consejo aprobara el proyecto.
- Desde mediados de junio de 2011, la consulta se realizó principalmente por medio de ALENAC. Sin embargo, ALENAC no fue una representación transversal de las

²⁷³ Véase también Lineamientos de implementación de la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias (*Implementation Guidelines for the Safeguards Policy*), pp. 34-35 <http://bit.ly/2b07Vwx>: la segunda consulta durante la revisión de la evaluación de impacto es importante para informar, reunir comentarios y ajustar la evaluación y el correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social (“PGAS”).

²⁷⁴ Política de salvaguardias, ¶4.19.

²⁷⁵ Compárense las reuniones iniciales (enero y mayo) con las autoridades locales. Véase RAP (2011), Apéndice 2, pp. 128-129.

²⁷⁶ Como se anotó antes, la EIAS debió haber incluido el RAP preliminar: RP, ¶V(6).

víctimas y la confiabilidad de esta asociación no era socioculturalmente apropiada. Tal como se mencionó con anterioridad, sus miembros no fueron elegidos por la mayoría de las víctimas, como tampoco lo fueron los temas de consulta. Solo 22 de sus miembros —apenas más de la mitad— están claramente identificados como víctimas de desplazamiento.²⁷⁷ Ni el BID ni la UTE hicieron ningún intento para verificar que la mayoría de las víctimas considerara a ALENAC como representantes legítimos.²⁷⁸

- Ni el RAP ni los acuerdos mismos de compensación de 2011 se produjeron en idioma *creole*, el único idioma de la avasallante mayoría de víctimas.
- La información sobre el RAP no se divulgó en el formato adecuado para que todo el grupo de víctimas hiciera comentarios,²⁷⁹ considerando los bajos niveles de alfabetismo.²⁸⁰ Aunque se dio una breve explicación sobre el RAP en las consultas, ni el BID, ni la UTE ni sus consultores se dieron el tiempo necesario para explicar en detalle y a cada víctima este arreglo relativamente complejo .
- Aparentemente el RAP, junto con su estudio de base, no estuvo disponible en el sitio web del BID antes de marzo de 2012.²⁸¹ Parece que una versión actualizada del RAP, que se elaboró una vez que se hizo evidente que el plan de viviendas para diez de las familias más vulnerables no estarían disponible,²⁸² sigue sin estar disponible en el sitio web del BID.
- A pesar de las múltiples peticiones de una lista completa de quienes recibieron compensación, solo se recibió una lista incompleta de 367 jefes de hogar.²⁸³ Esta lista, como otros documentos elaborados por el BID y la UTE, carecen de información clave sobre las víctimas, como edad, género, tamaño de la familia, y calidad y tamaño de la tierra, lo que nos impide analizar si se respetaron los derechos de compensación y los criterios de vulnerabilidad. Esta información es esencial dado que tenemos sólidas razones para creer que el desarrollo y la implementación de el estudio de base, el RAP y los acuerdos de compensación sufrieron graves errores.

²⁷⁷ Véase el Apéndice 7, Comparaciones entre las listas de víctimas de ALENAC y el estudio de base/junio de 2016. Véase también la Sección III. A anterior.

²⁷⁸ Véase el Apéndice 4, Notas de la reunión.

²⁷⁹ Como por ejemplo, mediante reuniones de gran convocatoria, grupos focales, reuniones individuales y reuniones específicas diseñadas para facilitar la consulta y la participación de las mujeres.

²⁸⁰ El estudio de base registra que 33.3% de los 366 (hasta entonces identificados) jefes de familia desplazadas era analfabeto, mientras que 49% de ellos tenía nivel de educación de la escuela primaria o menos: Estudio de base, p. 18.

²⁸¹ La fecha de publicación de este documento, que aparece mencionado en el sitio web del BID, es el 26 de marzo de 2012.

²⁸² 2015 ESMR, ¶4.34: “La UTE preparó un plan alternativo de reasentamiento para las restantes 10 personas y comenzará a implementarlo en las próximas semanas”.

²⁸³ En junio de 2016, se nos proporcionó una lista de 367 familias víctimas (las 366 identificadas en el estudio de base más Eliane Clerjuste, quien fue agregada a petición de la ALENAC y quien al parecer no fue tomada en cuenta en 2011 debido a no estuvo presente), en lugar de las 442 familias que según entendemos fueron desplazadas. La lista incluye el total de los pagos de compensaciones, pero no especifica a quién se le hicieron dichos pagos y con qué objeto: UTE Lista de personas compensadas de forma permanente (monetaria) + cantidades finales pagadas [*UTE Liste des personnes compensées définitivement (compensation monétaire) + montants définitifs payés*], que se adjunta en el Apéndice 13. Véase también la Sección V y el Apéndice 12. UTE Describió la lista como “definitiva” a pesar de que se identificaron receptores adicionales en otros documentos del mismo legajo.

“Cuando llegaron a quitarnos la tierra, dijeron que nos darían otras tierras. Después dijeron que no nos darían tierra y que nos darían dinero, no tierra ... no nos preguntaron lo que nosotros queríamos ... Hoy es más difícil comprar todo. No podemos trabajar. No podemos siquiera salir a comprar comida. No tenemos donde sembrar y tenemos hijos. Todo está caro en el mercado.”

Philomène Jean.



Crédito: Antoine Bouhey/ActionAid

Como parte de estas infracciones está la falta de información y consultas sobre el proyecto y su impacto en general:²⁸⁴

- Como ya se mencionó, hubo solamente una reunión comunitaria con nosotros antes de que se terminaran la EIAS y el PGAS,²⁸⁵ en vez del mínimo de dos consultas requeridas por la Política de Salvaguardias. Si bien las siguientes reuniones se llevaron a cabo durante septiembre, estas reuniones tuvieron lugar después de la aprobación del Consejo y después de que se terminaron la EIAS y el PGAS.²⁸⁶
- En ningún momento del proceso hubo documentos importantes del proyecto a disposición de las víctimas, con formato e idioma adecuados. No hemos visto un solo documento del proyecto en *creole*, más que los acuerdos de compensación de 2013. Las reuniones con todo el grupo celebradas entre septiembre y diciembre de 2011 no fueron diseñadas para explicar y obtener retroalimentación, de manera elocuente y accesible sobre asuntos ambientales y sociales. Tampoco hubo reuniones específicas con el propósito de recopilar el punto de vista de las mujeres, quienes se vieron expuestas a múltiples y excesivos riesgos ambientales y sociales.
- La EIAS misma estaba incompleta y en algún momento la complementaron con estudios adicionales,²⁸⁷ por lo que también se actualizó el PGAS.²⁸⁸ Sin embargo, no

²⁸⁴ Véase la sección IV.B más adelante.

²⁸⁵ EIAS, Apéndice 2. Las demás reuniones a las que se hace referencia se celebraron con las autoridades locales.

²⁸⁶ RAP (2011), Apéndice 2, p. 129; Lista de las consultas principales, <http://bit.ly/2aVUskN> citada en HA-L1076 *Project Profile* <http://bit.ly/2aTraFg>.

²⁸⁷ Véase la nota 390 más adelante.

²⁸⁸ Incluye el *Environmental, Social and Health and Safety Management Plans* (2012), p. 18 <http://bit.ly/2b6GcXO> [“2012

tenemos conocimiento de consulta alguna que haya tratado los resultados de estos estudios posteriores y los PGAS subsecuentes.²⁸⁹

- El BID no logró asegurar el cumplimiento de sus normas, en circunstancias en las que la falta de consulta fue evidente como se aprecia en los mismos documentos del proyecto, en quebranto de la Política de Salvaguardias, ¶¶4.19 y 4.20.

Sin información clave del proyecto, y sin oportunidades de participación trascendente en el desarrollo del RAP, no consideramos que se nos haya dado un “tratado equitativo”, como lo ordena la Política de Reasentamiento.²⁹⁰ En el momento en que se nos presentaron los acuerdos de compensación, no había otra opción que aceptar lo que nos ofrecieron. Como se menciona a continuación, no existe todavía un mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual pueda tomarse nota de las quejas o preguntas sobre el proceso de reasentamiento y nuestros derechos individuales. Sentimos que fuimos excluidos de un proceso que ha impactado de manera radical nuestras vidas.

D. Demora

Desde el desplazamiento, las víctimas han sido sometidas a graves demoras innecesarias para recibir la compensación. Algunas de las víctimas todavía están esperando, seis años después de haber sido despojadas de sus tierras. La demorada compensación ha afectado de manera particularmente severa a nuestros hijos, como familias nos ha costado trabajo pagar la comida, la salud y la educación desde el desplazamiento.²⁹¹

La Política de Reasentamiento del BID ordena la compensación *oportuna*.²⁹² Sin embargo, después del desplazamiento en enero de 2011, la compensación en efectivo final no se recibió sino hasta finales de 2013. La diligencia debida inadecuada por parte del BID y la UTE en cuanto a la disponibilidad de tierras de reemplazo fue en parte causante del retraso. Si bien estábamos preparados para esperar la tierra de reemplazo, el BID y la UTE no lograron anticipar el retraso (debido a su débil diligencia debida) y tampoco lograron garantizar que se llevaran a cabo los arreglos de transición adecuados. La compensación provisional —en forma de cosechas perdidas y pagos de seguridad alimentaria también perdidos— no nos permitió seguir adelante con nuestras vidas. Nos ayudó a cubrir algunas de las necesidades inmediatas, pero no nos brindó seguridad alimentaria continua ni nos permitió restablecer nuestros medios de subsistencia.

Además de lo anterior, 10 de las familias más vulnerables que eligieron la opción de vivienda no habían recibido dicha vivienda en mayo de 2016, y posiblemente aún están esperando.²⁹³ Quienes eligieron un plan de retiro también pasaron por demoras importantes.²⁹⁴ En

PGAS”]; y el plan de manejo de aguas residuales (diciembre de 2014).

²⁸⁹ Si bien algunas reuniones de grupos de interés relacionadas con la CIA (2012) pudieron haber incluido a miembros de la comunidad directamente afectados, no tenemos conocimiento de reuniones más amplias y abiertas sobre el resultado de ese informe ni sobre cambios posteriores al PGES: véase la lista de las principales consultas, en la nota 286; CIA (2012), p. 9. Los autores de la CIA Update (2015) consultaron a los representantes del proyecto y “a una muestra de representantes municipales”, pero no directamente a los miembros de la comunidad afectada: CIA Update (2015), pp. 6-7.

²⁹⁰ RP, ¶II.

²⁹¹ *Idem.*

²⁹² *Idem.*, ¶¶V(2) y V(3).

²⁹³ 2015 ESMR, ¶4.34.

²⁹⁴ HA-L1101 ESS, ¶3.15; 2015 ESMR, ¶4.34.

nuestras últimas entrevistas con 58 víctimas, cuatro de ellas informaron que no recibieron toda la compensación mencionada en los acuerdos de compensación, y dos dijeron que no recibieron ninguna compensación en absoluto.²⁹⁵

Esta infracción es continua, pues no hemos recibido aún una compensación suficiente para nuestra rehabilitación socioeconómica, tal como se explica a continuación.

E. Compensación inadecuada

Todas las fallas de diligencia debida y las consultas mencionadas han contribuido al mayor perjuicio que hemos vivido: la falta de una compensación adecuada por la pérdida de nuestras tierras y el fracaso en lograr nuestra rehabilitación socioeconómica.

La Política de Reasentamiento ordena explícitamente una compensación y rehabilitación “justa y adecuada” que pueda compensar nuestras pérdidas y nos devuelva un nivel de vida al menos equivalente a los niveles previos al desplazamiento.²⁹⁶ Por el contrario, la gran mayoría de las víctimas informan que se encuentran en una situación socioeconómica peor que antes del desplazamiento, enfrentando inseguridad económica y alimentaria.²⁹⁷

“Mi familia está peor. Todos están peor ahora. El costo de vida subió, todo está más caro. ... No se sentaron con la gente, no se sentaron con nosotros para conocer nuestras necesidades”.

“No tenía suficiente dinero, lo que nos dieron no fue suficiente”.

“Quisiéramos o no, dijeron que teníamos que firmar y que los que no firmaran no recibirían dinero. Ni siquiera nos dieron tiempo para leer el documento”.

Dieudonné Florvil, es una víctima que ahora alquila tierras para cultivar, pero dice que el terreno es más pequeño en tamaño y de peor calidad que su tierra en Caracol-Chabert. Solía cultivar yuca, entre otros, en su antiguo terreno, pero no puede cultivar yuca en las nuevas tierras porque no hay suficiente agua. Quería comprar tierra de reemplazo con su compensación, pero no fue suficiente el dinero para hacerlo.

Judith Florvil, esposa de Dieudonné, nos cuenta que cuando compra frutas, verduras y leña para su familia, cada vez son más caras y no le alcanza para comprar suficiente. Explica que la vida es más difícil porque *“no podemos producir tanta comida, ni yuca, ni siquiera plátanos no tenemos mucho ... incluso ganado barato y pequeño no podemos comprar”*. También cuenta las dificultades para enviar sus hijos a la escuela *“porque ahora pagamos tarde más a menudo”*.

Este resultado es trágico, pero no causa sorpresa, considerando las fallas de diligencia debida del BID. Tal como se explicó antes de forma detallada:

- Nuestro desplazamiento antes de que se cumpliera con ninguna salvaguardia, nos dejó particularmente vulnerables al empobrecimiento y aumentó el desequilibrio de poder preexistente durante las negociaciones de compensación;

²⁹⁵ Apéndice 6, Resumen de los resultados de las entrevistas.

²⁹⁶ RP, ¶III(2).

²⁹⁷ Véase la Sección III.A.ii, en especial las pp. 23-24 que resumen los resultados de entrevistas más a fondo con 58 cabezas de familias víctimas en mayo de 2016; véase también el Apéndice 6, Resumen de los resultados de las entrevistas.

- el valor monetario de nuestras cosechas perdidas y la pérdida de seguridad alimentaria se subestimó en 2011, y estas fallas continuaron durante todo el proceso de compensación;²⁹⁸
- los paquetes de compensación fallaron al no tomar en cuenta los fuertes incrementos en el costo de vida en Caracol;²⁹⁹
- la inadecuada diligencia debida del BID y la UTE sobre la disponibilidad de tierra de reemplazo³⁰⁰ generó en una situación en la que no pudieron dar la tierra de reemplazo que el RAP ordenó, dejándonos sin otra opción que aceptar un paquete de compensación en efectivo inferior;
- hemos recibido poco o ningún tipo de apoyo alternativo de medios de subsistencia, que nos ayude en la transición hacia nuevas fuentes de ingresos;³⁰¹ y
- el paquete de compensación no tuvo en cuenta los importantes riesgos de empobrecimiento que la mayoría de las víctimas, sino es que todas, enfrenta. La compensación en efectivo, como único medio de compensación fue inapropiada e

²⁹⁸ Los pagos de seguridad alimentaria se determinaron esencialmente dividiendo una cifra arbitraria total, entre el número de familias elegibles para compensación, y el número de personas en cada familia (aproximadamente USD\$80 por persona): Cuadro 1; Apéndice 4, notas sobre las reuniones; 2013 ESMR, ¶3.58 (“Los pagos anuales comprendían ... USD\$80 por cada miembro de la familia por la pérdida de cultivos de subsistencia”). Esta cifra no se parece en nada al costo real mínimo de seguridad alimentaria en 2011: cerca de USD\$270 por persona: Cuadro 1; CNSA *Bulletin #1: Le Panier Alimentaire en Haiti* (junio de 2012), p. 1 <http://bit.ly/2b8M9VY>. Los ingresos por cosecha perdida también se subestimaron para un número significativo de familias víctimas debido a la decisión inapropiada de estimar el ingreso promedio de todas las parcelas (por hectárea) cuando en realidad hubo una variación significativa debido al tipo de cultivo, frecuencia de cosecha y uso de riego: Cuadro 1. Incluso con la admisión misma de el estudio de base, las 48 hectáreas irrigadas tenían una ganancia neta de más del doble (USD\$3,118) de la cifra de compensación (USD\$1450): Estudio de base, p. 39.

²⁹⁹ Véase el Cuadro 2 y el debate subsiguiente relativo al costo de vida. En 2011 —cuando las cantidades de dinero por cosecha perdida y seguridad alimentaria perdida se cuantificaron por primera vez— el BID aún no había realizado una evaluación exhaustiva del impacto social, ni proyecciones detalladas del crecimiento de la población y los riesgos asociados por el aumento de la demanda de alimentos, empleo, vivienda y tierras, y por tanto no los tomó en cuenta. Incluso una vez que esos aumentos fueron un hecho, el BID y la UTE inexplicablemente ignoraron el aumento del costo de vida y de ingresos perdidos, cuando los pagos por cosecha y seguridad alimentaria perdidas se repitieron en 2012 y 2013: *Idem*; Apéndice 4, Notas de la reunión. También tenemos entendido que la compensación monetaria final se estimó con base en un cálculo de cinco años de cosechas perdidas, con un modesto incremento por inflación: *Idem*. Tal como se mencionó antes, la fórmula no cuantifica la suma necesaria para comprar tierra de reemplazo, ni tampoco considera en absoluto los incrementos en el costo de vida en el noreste, específicamente, así como el incremento de ingresos que habríamos recibido si no se nos hubiese despojado de nuestras tierras.

³⁰⁰ Véase la Sección III.B.vi anterior.

³⁰¹ Con base en la lista de beneficiarios de capacitación brindada por la UTE y el BID (véase la nota 159 y el Apéndice 13), solo siete jefes de hogar afectados identificados en el estudio de base (es decir, menos de 2% de las víctimas) se vieron beneficiados con una capacitación profesional. De los 58 jefes de familias víctimas que Kolektif entrevistó, ninguno ha recibido capacitación y solo uno tenía un hermano que se había beneficiado con la capacitación: Apéndice 6, Resumen de los resultados de las entrevistas. Esto es a pesar de que el estudio de base reconoció que: “el restablecimiento de la producción de alimentos para las familias vulnerables es una necesidad además de las compensaciones” y “ofrecer la oportunidad de obtener ingresos agrícolas y no agrícolas es imprescindible”: Estudio de base, p. 2, ¶6 (A pesar de estas opiniones, la propuesta de transición de los medios de subsistencia de la Línea de base no está desarrollada, y tan solo recomienda que se asignen USD\$76 000 con este propósito, con base en las 366 familias identificadas en el estudio de base, esto solo suma USD\$207 por familia).

insuficiente en las circunstancias de este caso.³⁰²

El desarrollo de un paquete de compensación sostenible habría demandado una mayor consulta y evaluación de nuestras necesidades específicas. Necesitábamos, y aún necesitamos, un proceso que:

- Sea sensible al género, teniendo en cuenta las diferencias de género en las oportunidades de empleo y la intensificación del riesgo de inseguridad económica que enfrentan las mujeres haitianas;
- respete las diferentes pérdidas y necesidades de rehabilitación de los diferentes hogares;
- respete los riesgos específicos de empobrecimiento que enfrentan muchos hogares — más de los 35 hogares categorizados como vulnerables en 2013— y apoye a esos hogares en la obtención de tierras de reemplazo, vivienda o establecimiento de pequeños negocios que puedan ser una fuente de ingresos, de acuerdo con sus preferencias; y
- brinde apoyo, entre otros, para un mecanismo de ahorro comunitario que asegure que toda compensación en efectivo que se pague pueda invertirse y utilizarse de manera sostenible.

El resultado que deseamos de este proceso se explica con mayor detalle en la Subsección C, más adelante.

F. Fallas de monitoreo, supervisión y evaluación de los impactos del reasentamiento

³⁰² El propio documento de antecedentes sobre reasentamiento involuntario del BID reconoce “lo impropio de los pagos monetarios como único medio de compensación” (Documento de Antecedentes sobre el Reasentamiento Involuntario [*Involuntary Resettlement Background Paper*], p. 21. Véase también *Involuntary Resettlement Principles and Guidelines*, pp. 22, 25) y más adelante explica que:

En muchos casos, la ecuación de la compensación con pagos en efectivo es problemática. Es posible que el desplazamiento afecte severamente ciertos sectores de la población, en particular los que se encuentran en pobreza, de maneras que pueden rebasar el valor monetario de la propiedad que se pierde. También es posible que la reubicación prive a las personas de su principal fuente de ingresos y, en algunos casos, puede amenazar su paz social y su identidad cultural.[...]

La experiencia del Banco Mundial y del BID en relación con los reasentamientos muestra que el pago de dinero en efectivo por sí solo rara vez es una estrategia adecuada. Las razones más importantes de ello son: (a) la compensación en efectivo a menudo es insuficiente para reemplazar los bienes perdidos con otros de valor equivalente, y (b) las personas desplazadas a menudo carecen de oportunidades o habilidades para usar sus pagos de modo que puedan reemplazar sus bienes y oportunidades perdidas. Además, la presión para resolver las necesidades inmediatas, tales como alimento, vivienda temporal, servicios médicos o pagos de deudas, a menudo resulta en una compensación que se gasta antes de que pueda invertirse en vivienda o activos productivos. Esto resulta cierto en particular para los grupos con bajos ingresos y puede llevarlos a su empobrecimiento permanente. Por tanto, debe considerarse la posibilidad de ayudar a las personas desplazadas para que encuentren viviendas, tierras o empleos alternativos. Esto es de especial importancia cuando estas personas dependen de la tierra para su subsistencia.

Documento de Antecedentes sobre el Reasentamiento Involuntario (*Involuntary Resettlement Background Paper*), p. 30.

El BID también ha fallado en cuanto a la manera oportuna del monitoreo y la evaluación del proceso de reasentamiento. De haberlo hecho bien, muchos de los problemas descritos se habrían identificado y corregido mucho antes.

La Política de Reasentamiento ordena que el RAP contenga disposiciones para el monitoreo y la evaluación.³⁰³ Las actividades de monitoreo deben centrarse en las condiciones sociales y económicas obtenidas o mantenidas en las comunidades reasentadas y las comunidades anfitrionas, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. La evaluación final debe programarse en una fecha límite en la que se espere que se hayan alcanzado los niveles de vida para los cuales se diseñó el plan de provisiones.³⁰⁴

El RAP, en este caso, estableció que una evaluación de mediano plazo debe tener lugar después de 15 meses de haberse implementado y que una evaluación final debe hacerse después de 30 meses.³⁰⁵ Tenemos entendido que el BID y la UTE consideran que este periodo inicia con la fecha de la compensación final (septiembre de 2013), más que con la primera implementación del RAP (septiembre de 2011).³⁰⁶ Consideramos que esta es una aproximación equivocada: según su razonamiento, los requerimientos de monitoreo y evaluación podrían evitarse de manera indefinida mediante el solo hecho de dejar de brindar una compensación final. El enfoque también contradice los Principios y lineamientos de Reasentamiento involuntario del BID, en el cual se explica que el monitoreo durante la implementación del RAP debe cubrir el *impacto* que el plan de reasentamiento tenga en las personas desplazadas, así como su avance físico.³⁰⁷ Además, aun cuando su enfoque fuera correcto, las evaluaciones no han ocurrido de manera oportuna. No se han realizado evaluaciones (de mediano plazo ni final) concluidas hasta la fecha de esta queja, ahora 40 meses desde septiembre de 2013. Si bien el BID podría responder que han estado participando de manera activa con la UTE/SONAPI durante este periodo, no han consultado con ALENAC, la Kolektif o las víctimas de manera más general, y no hemos visto ningún beneficio real de ninguno de los convenios con la UTE/SONAPI que estén teniendo. En todo caso, esta participación no sustituye la evaluación socioeconómica detallada de los *impactos* del reasentamiento, como lo exige la Política de Reasentamiento, ¶V (7).

El BID también debió haber solicitado planes de acción detallados y eficientes para resolver el incumplimiento de la Política de Reasentamiento, antes de la aprobación del Consejo de cada inversión subsecuente relacionadas con el CIP. La Política de Salvaguardias exige expresamente que el BID solamente financie las operaciones existentes si el solicitante de un crédito puede demostrar que la operación cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Política. En caso de que, como parte de la diligencia debida del BID, se identifique algún tipo de incumplimiento, entonces el plan de acción debe someterse a la aprobación del Banco antes de que el Consejo apruebe dicha operación.³⁰⁸ El hecho de que varias familias continúen *todavía* esperando recibir la compensación acordada³⁰⁹ plantea serias dudas sobre la adecuación de cualquier plan de acción elaborado con respecto a este proyecto, así como la capacidad del BID

³⁰³ RP, ¶¶V(6) y V(7).

³⁰⁴ *Idem*, ¶V(7).

³⁰⁵ RAP (2011), p. 49.

³⁰⁶ Véase la carta del UTE de fecha 26 de julio de 2016, en el Apéndice 12.

³⁰⁷ *Involuntary Resettlement Principles and Guidelines*, p. 28.

³⁰⁸ Política de salvaguardias, ¶4.29.

³⁰⁹ Véase la Sección III.B.viii anterior.

para estar satisfecho de que la operación logrará el cumplimiento.³¹⁰

Finalmente, advertimos que en la actualidad no existe un mecanismo de resolución de conflictos para el nivel del proyecto que sea independiente, de modo que podamos presentar nuestras dudas o quejas sobre el proceso de reasentamiento. La Política de Reasentamiento ordena explícitamente que el RAP contenga “un mecanismo para la solución de disputas sobre tierras, compensación y otros aspectos del plan”.³¹¹ Si bien el RAP recomienda que, durante la implementación del RAP, se establezca una entidad independiente y respetada (como un *ombudsman*) para garantizar un trato justo de todos los casos,³¹² no tenemos conocimiento de ningún mecanismo de este tipo que se haya establecido para este caso.

Estas infracciones no tienen excusa, considerando el número y el alcance de los errores que hemos padecido. Que contribuyen al perjuicio continuo que en este momento estamos sufriendo.

G. Lo que la Kolektif quiere de este proceso

A pesar del daño sufrido hasta la fecha, creemos que nuestra compensación y rehabilitación completas, en cumplimiento con las obligaciones del BID, continúa siendo posible mediante el diálogo constructivo entre nosotros, nuestros representantes, el BID y la UTE. Como parte de todo diálogo, deseamos tratar las siguientes soluciones que Kolektif ha diseñado en colaboración con aproximadamente 210 víctimas.³¹³

i. Compensación económica justa

Solicitamos que todas las compensaciones económicas se valoren de nuevo teniendo en cuenta el costo real de la pérdida de la tierra, particularmente con base en:

- Las especificidades (riego, cultivos) de las parcelas de tierra de las víctimas;
- el costo real de la pérdida de cosechas, con fundamento en los precios de mercado de los cultivos;
- el costo real de la seguridad alimentaria en la zona;
- el costo de las transacciones de tierras en la zona;

³¹⁰ Véase también las preocupaciones de cumplimiento y sostenibilidad expresadas por el BID mismo en la Sección II anterior.

³¹¹ RP, V(6).

³¹² RAP (2011), pp. 47-48.

³¹³ Estas demandas se trataron durante las reuniones con el comité coordinador de Kolektif en marzo, abril y mayo; las reuniones generales de Kolektif (150-200 personas que en promedio asistieron); en consultas con organizaciones establecidas en la comunidad local; entrevistas individuales; y un debate abierto final con 210 víctimas. Durante el debate general, se acordó que la opción de dinero en efectivo y el mecanismo de resolución de conflictos, para las personas que no habían recibido su compensación completa, formarían parte de las demandas. Después, usando un sistema de votación “Ohio-caucus”, se pidió a las personas que se agruparan de acuerdo con sus opciones preferidas, entre ellas: i) tierra o vivienda en renta, ii) plan de desarrollo local y colectivo, iii) educación para los niños, y iv) trabajo en el parque industrial. Entonces se pidió a estos grupos que eligieran una segunda opción entre las otras tres restantes. Esto mostró un apoyo relativamente equitativo a las opciones de la primera opción, en tanto que solo cinco personas mostraron interés en trabajos en el parque industrial como segunda opción (y ninguna como opción preferida). Esa última demanda fue por tanto retirada de la lista final de demandas.

- el aumento del costo de vida;
- las necesidades específicas de cada familia;
- los impactos ambientales y sociales acumulados del CIP; y
- los retrasos acumulados antes de obtener una compensación justa.

ii. *Un mecanismo de verificación de la compensación y de atención de quejas*

También solicitamos la creación de un organismo independiente que verifique que cada víctima haya recibido la compensación a la que tenía y tendrá derecho, y que resuelva las quejas de las víctimas que consideren que no han recibido dicha compensación. El mecanismo debe recibir y responder a las quejas de manera justa y transparente, de acuerdo con las mejores prácticas para dichos mecanismos de resolución de conflictos. Tal mecanismo fue una recomendación del RAP, pero nunca se estableció.

Tal como se mencionó, varios jefes de hogares de víctimas afirmaron durante entrevistas con nosotros que no recibieron la cantidad total de compensación estipulada en los acuerdos de compensación que firmaron. Además, considerando que el número total de hogares afectados reconocidos por los documentos del proyecto cambió frecuentemente (entre 351 y 442), es posible que las familias que se identificaron posteriormente hayan perdido la compensación a la que tendrían derecho si hubieran sido identificadas de manera adecuada por el estudio de base. No obstante las solicitudes de información, la UTE y el BID no brindaron una lista exhaustiva y detallada de las compensaciones distribuidas a cada uno de los 442 hogares. Sin esa lista, no es posible asegurar que cada hogar haya recibido a la fecha, la compensación completa a la que tenía derecho y en la que había acordado.

Como el colectivo activo más grande de víctimas, debemos ser parte de las consultas y tener la oportunidad de participar durante el desarrollo de este mecanismo de resolución de conflictos, y todas las víctimas deben estar informadas sobre su creación y procedimientos para procesar las quejas. Este proceso debe complementar —mas no reemplazar— la reconsideración del paquete de compensación antes solicitado.

iii. *Revisión de los criterios y la lista de personas vulnerables*

Los criterios de vulnerabilidad aplicados por el BID y el UTE en 2011 y 2013 fueron demasiado estrechos e incorrectamente aplicados, con el resultado de que muy pocas familias fueron identificadas como vulnerables al empobrecimiento y se beneficiaron de las medidas diseñadas para mitigar este riesgo. Consideramos que la mayoría, si no es que todas las víctimas se enfrentan a riesgos de empobrecimiento significativos, considerando: (i) las circunstancias socioeconómicas de las víctimas; (ii) las altas tasas de pobreza y dependencia de los medios de subsistencia agrícolas y la inseguridad alimentaria de la población rural de Haití; y (iii) las presiones sobre la tierra y el costo de vida desde 2011 en Caracol.

Por tanto, solicitamos una revisión transparente de los criterios de vulnerabilidad y la aplicación de esos criterios con las víctimas.

iv. *Compensación no económica justa para rehabilitar los medios de subsistencia*

La compensación justa debe basarse en una elección genuina entre opciones que efectivamente rehabilitan los medios de vida de las víctimas. La compensación económica, sin

más, no fue suficiente para lograrlo en este caso.

Por tanto, solicitamos una nueva fase de compensación y rehabilitación, en la cual se ofrezca a las víctimas la opción de elegir entre el acceso a la tierra mediante un sistema de “certificado” de acceso a vivienda con ingresos regulares de alquiler o una compensación económica adecuada que considere el costo real de la tierra de reemplazo. Este nuevo paquete de compensación y rehabilitación deberá desarrollarse como parte de un plan individual y colectivo de desarrollo, que incluya:

- **Apoyo individual para cada familia:** *Todas* las víctimas deben recibir apoyo mediante un plan de apoyo individualizado que contemple el fortalecimiento y el monitoreo de las actividades económicas de cada familia. Dicho apoyo individualizado implicará la identificación de oportunidades y factores que generen ingresos mediante dichas actividades, con capacitación técnica y de gestión adecuadas por parte de las organizaciones e instituciones pertinentes. Este apoyo se llevará a cabo en colaboración con las organizaciones pertinentes establecidas en la comunidad (como organizaciones de agricultores y pescadores) y con las instituciones locales (como el Fondo de Asistencia Económica y Social [Fond d’Assistance Economique et Sociale] y los Consejos de Administración de Sección Comunitaria [Conseils d’Administration de Section Communale]).
- **Apoyo a las organizaciones locales pertinentes:** Para garantizar la congruencia entre estos proyectos individuales y un apoyo adecuado de las organizaciones locales, los paquetes de compensación deben incluir el fortalecimiento de organizaciones establecidas en la comunidad de las que las víctimas sean miembros y reciban apoyo para sus proyectos.
- **Apoyo para la creación de una estructura colectiva de gestión de los fondos de compensación:** Debe crearse una estructura colectiva que gestione los fondos de compensación por medio de mecanismos de ahorro y crédito con la capacidad de apoyar de manera sostenible a las actividades de las víctimas (como evaluación económica, consejería, capacitación y planificación).
- **Tomar en cuenta de manera genuina los derechos y las necesidades específicas de las mujeres:** Los derechos y las necesidades específicas de las mujeres víctimas y de las mujeres en las familias de las víctimas deben considerarse de manera auténtica y genuina, mediante un plan ambicioso y detallado. Además, las mujeres víctimas y las mujeres miembros de las familias de víctimas deben participar en el diseño de dicho plan, lo cual no fue el caso en el plan de acción inicial.

v. *Apoyo a los proyectos educativos de las familias de las víctimas*

Finalmente, debido a las demoras en la implementación de un plan justo de compensación y rehabilitación, consideramos necesario apoyar a los niños de los hogares afectados en sus proyectos educativos. La disminución de los ingresos familiares desde la pérdida de nuestras tierras y el tiempo previsto para implementar un nuevo plan de compensación, han impedido que muchas familias financien la educación de sus hijos. Aun así, la sostenibilidad de los niveles de vida de largo plazo para las familias y las comunidades vecinas del CIP requiere un incremento en el nivel de educación de estos niños. Por lo que solicitamos apoyo específico para los proyectos educativos de los niños de las víctimas, de modo que se mejore su educación mediante formación específica o acceso a educación superior.

“Con lo que nos dieron, no puedes comprar tierras. Hasta mi casa vieja, no pude terminar de construirla con el dinero que nos dieron. No pude terminarla porque no tengo el dinero para eso. ... Antes podía cultivar muchas cosas para comer. Maíz, guisantes, papas, cacahuètes, yuca. Tenía una hectárea. No puedo ganar dinero hoy. ... Estamos peor que antes. ... Nos dieron lo que quisieron, no nos preguntaron cómo veíamos las cosas, cómo valorábamos lo que necesitábamos. ... Dijeron tienes que firmar, si no firmas no recibirás la compensación final. Por eso firmamos”.

Ilna St Jean.



Crédito: Antoine Bouhey/ActionAid Haiti

IV. Nuestros problemas ambientales y sociales más amplios

Los documentos del proyecto del BID, así como los informes de otras organizaciones, identifican una gama de riesgos y daños ambientales y sociales potencialmente graves por la construcción y operación del CIP y sus instalaciones, como la central eléctrica entre otras. El BID mismo afirma que “los impactos negativos ambientales y sociales del CIP de largo plazo e indirectos son mucho más amplios que el sitio del proyecto real y se extienden por todo el Corredor Noreste de Haití”.³¹⁴ Como se explica más adelante, no hemos recibido suficiente información sobre estos riesgos e impactos, ni de su gestión en un formato o idioma apropiado, en violación de los requisitos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del BID.

A. Antecedentes adicionales basados en los hechos

Tenemos entendido que los riesgos e impactos del CIP y sus instalaciones incluyen:

i. Daño al río Trou-du-Nord

El BID ha reconocido un riesgo de contaminación del río Tou-du-Nord por desechos sólidos y líquidos, como el drenaje, tanto durante la construcción³¹⁵ del CIP como durante su operación,³¹⁶ y desde la central eléctrica.³¹⁷ En 2011, los trabajadores que limpiaron el terreno

³¹⁴ 2015 ESMR, ¶4.4.

³¹⁵ *Environmental and Social Management Plan* (5 agosto de 2011), pp. 26-27 <http://bit.ly/2aMe4Yv> [“2011 PGAS”].

³¹⁶ CIA Update (2015), p. 127; *Environmental and Social Management Report* (noviembre de 2014), pp. 27-28 <http://bit.ly/2aEpEUe> [“2014 ESMR”].

³¹⁷ La central eléctrica también plantea un riesgo adicional de contaminación del río Trou-du-Nord: podría disminuir la

para la construcción no conservaron una zona de mitigación de 20 metros de vegetación cerca de la orilla del río Trou-du-Nord, con lo cual se intensificaron los riesgos para la salud del río.³¹⁸ También hay preocupación por el aumento de la erosión,³¹⁹ las inundaciones³²⁰ y porque la cantidad de agua freática consumida por el CIP podría agotar gravemente el río durante los períodos de sequía.³²¹ Las mujeres que lavan ropa en cuerpos de agua superficiales, como el río Trou-du-Nord son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua si el agua se contamina.³²² Los animales también están en riesgo.

Tenemos entendido que algunos de estos daños ya empezaron a ocurrir. Una planta permanente de tratamiento de aguas residuales (“WWTP”) se planificó originalmente para que se terminara en 2012, pero se retrasó por casi dos años. Durante ese retraso, se construyó una WWTP provisional, pero no funcionó correctamente y excedió su capacidad de operación, trayendo como resultado que las aguas residuales no tratadas se vertieran en el medio ambiente.³²³ La UTE también construyó un sistema séptico que no cumplió con los estándares del BID para efluentes de aguas residuales. Estas fallas llevaron al Consejo del BID a otorgar una excepción a la Directiva B.11 de su Política Ambiental y de Salvaguardias en 2013, hasta que se completó la WWTP permanente y se alcanzaron las normas de descarga de efluentes.³²⁴ Aunque la WWTP permanente ya está en funcionamiento y el CIP está descargando únicamente aguas residuales tratadas en el río Trou du Nord, los niveles de bacterias y el color del agua aún no cumplen con los estándares del BID.³²⁵ Se espera que hasta agosto de 2016 se pueda cumplir de manera total con los estándares del BID.³²⁶

Hay “*mucha basura en el agua, el agua que sale del parque, ni siquiera se puede respirar, huele mucho, más cuando el viento sopla. Había una mujer que se fue a bañar al río y después le dio mucha comezón*”.

Louis Tirène.

“*No siempre que vas al río puedes ver que está directamente contaminado. Arrojan cosas al río en ciertos momentos. Un día puedes venir y ver el río muy limpio, y después si regresas al día siguiente el agua huele muy mal y está completamente verde*”.

Renan Carries.

calidad del agua del río si el combustible de la planta se filtra en el ambiente o si los productos petrolíferos y otras toxinas no se manejan y desechan de manera apropiada: 2011 USAID EA p. 49.

318 USAID *Environmental Assessment of the USAID/Haiti North Park Power Project* (junio de 2011), p. 48 [“Power Plant ESIA”] <http://bit.ly/2b6USIm>. Esta zona de vegetación está diseñada para proteger al río de los impactos de la tierra cercana y puede ser significativo para mantener la calidad de agua y los nutrientes para la vida silvestre del río.

319 2011 PGAS, p. 25-26.

320 *Idem*, p. 26. En tanto el CIP se construyó en una planicie para alimentos, el CIP y las áreas río abajo podrían padecer de un aumento de inundaciones si se congestionan las tuberías con desecho sólido del CIP: CIA Update (2015), p. 127.

321 CIA Update (2015), p. 141.

322 CIA (2012) p. 3.

323 HA-L1091 ESS, ¶¶1.3, 3.12-3.13.

324 *Idem*. Véase también 2013 ESMR, ¶¶1.9, 3.43-3.45; 2015 ESMR, ¶4.15. Tenemos entendido que el Consejo del BID aprobó la excepción al tiempo que se aprobó la HA-L1081 (16 dic. 2013): 2015 ESMR, ¶1.8.

325 2015 ESMR, ¶1.8. La WWTP empezó a funcionar el 24 de julio de 2014, pero solo empezó a descargar en el ambiente el 23 de septiembre de 2015.

326 *Idem*, ¶1.8, nota 1.

ii. *Daño a la bahía Caracol*

El BID también reconoció el riesgo de daño a la bahía Caracol y a su fauna marina debido a contaminantes, sustancias químicas y temperaturas elevadas del agua.³²⁷ Esto pone en riesgo a importantes recursos comunitarios, como los manglares, las cuencas de sal, los moluscos y los peces. La bahía Caracol también es hogar de especies en peligro de extinción, como manatíes y tortugas,³²⁸ así como un arrecife de coral en vulnerabilidad que podría quedar dañado por el aumento de metales y compuestos orgánicos en el agua provenientes del CIP.³²⁹

Una afluencia de población cerca del CIP también podría dañar la bahía.³³⁰ Un aumento de las actividades pesqueras podría “acelerar la reducción de bancos de peces y de las pesquerías o bien dañar los esfuerzos de recuperación”.³³¹ La población de manglares podría quedar igualmente mermada, debido al cultivo de madera.³³² Aunque el aumento de la población a la fecha no ha sido tan alto como se había proyectado inicialmente, se espera que el CIP emplee a unas 37 000 personas,³³³ frente a las 9 266 en julio de 2016.³³⁴ Junto con la decisión de los propietarios para dejar de dar empleo prioritario a las comunidades locales, el aumento proyectado indica que el riesgo de afluencia de población continúa siendo importante.³³⁵

Aunque el Parque Nacional Three Bays tiene el propósito de proteger recursos marinos vulnerables e incrementar la biodiversidad en bahía Caracol, desde 2015, no hubo pautas ni medidas concretas que se hayan implementado para proteger la zona.³³⁶ El BID recientemente hizo una advertencia de que “las garantías que hizo el BID para que se tomen las medidas de mitigación necesarias para proteger el área marina protegida, se someterán a pruebas significativas durante la operación del parque en los próximos 5 a 10 años”.³³⁷

iii. *Disponibilidad reducida y contaminación del agua freática*

El BID reconoció que la construcción y la operación del CIP podrían reducir la disponibilidad del agua freática en el área, tanto debido al consumo como a la contaminación.³³⁸

³²⁷ 2011 PGAS, p. 27; CIA Update (2015), pp. 127-128; 2015 ESMR ¶¶1.3, 4.49; HA-1091 ESS, ¶4.4; HA-L1101 ESS, ¶3.9; 2014 ESMR, ¶¶4.39-4.41.

³²⁸ 2015 ESMR ¶2.8; Nature Conservancy *Baseline Ecological Inventory for Three Bays National Park, Haiti* (octubre de 2016, comisionado por el BID), <http://bit.ly/2ilFibq>.

³²⁹ CIA Update (2015), p. 127-128; *Ecological Inventory for Three Bays National Park*, pp. 86 y 115.

³³⁰ Antes del CIP, había preocupación por la sobrepesca y la explotación de manglares en la bahía Caracol: CIA Update (2015), p. 137. Un aumento en la población cerca del CIP podría intensificar aún más esas preocupaciones.

³³¹ CIA Update (2015), p. 138.

³³²

Idem.

³³³ Véase BID “Fact sheet: The IDB and Haiti’s Caracol Industrial Park” (6 de julio de 2012) <http://bit.ly/2aALWKu>.

³³⁴ SONAPI, *Q2 2016 Update - Parc Industriel de Caracol* (20 de julio de 2016), p. 6, <http://bit.ly/2allhSI>.

³³⁵ 2015 ESMR, ¶¶4.25, 4.41, 4.5. El Plan Local de Empleo ayudó a mitigar el aumento de la población mediante la contratación solo en kioscos cerca del parque y ofreciendo estándares de contratación preferenciales para los miembros de la comunidad local. S&H Global dejó de aplicar esta política, trayendo como consecuencia que la migración será “cada vez más difícil de controlar”.

³³⁶ CIA Update (2015), p. 58. También hay riesgo de que las actividades de pesca y cultivo ilegal persistan, a pesar de los esfuerzos de conservación: *Idem*, p. 139.

³³⁷ 2015 ESMR ¶1.3.

³³⁸ IGAS 2011, p. 26; CIA Update (2015), pp. 127, 139; 2014 ESMR ¶¶4.13, 4.39 y 4.42; HA-L1101 ESS, ¶¶4.1, 4.4, 4.16;

Miembros de nuestra comunidad han informado de que hay menos agua freática disponible desde que el CIP comenzó a operar y les preocupa que el parque consuma demasiada agua dadas las condiciones de sequía en el norte de Haití.³³⁹ El suministro de agua del CIP, como su pozo principal (que se conecta con el principal manto acuífero de esta región),³⁴⁰ ya está contaminado por desechos y bacterias.³⁴¹

En el año 2015, el BID informó que el CIP estaba operando “sin la supervisión y el manejo adecuados de los recursos hídricos, sin suministro entubado de agua potable, [y con] monitoreo inadecuado de la sustracción de agua freática”,³⁴² aumentando el riesgo de que el agua freática sea menos accesible para las comunidades cercanas en tanto el CIP continúa en operación y expansión.

iv. Contaminación del aire por el CIP y la central eléctrica, incluye polvo

Las actividades industriales que se llevan a cabo en el CIP emiten polvo y sustancias químicas potencialmente contaminantes, así como vapores.³⁴³ El aumento de la población cerca del CIP también podría provocar más contaminación por combustible, polvo y demás contaminantes, causando daños a la salud pública.³⁴⁴ Los miembros de la comunidad informan que el aumento de tráfico pesado en carreteras no pavimentadas cerca del CIP ya está generando grandes cantidades de polvo.³⁴⁵

La central eléctrica, parte de las instalaciones del CIP, utiliza combustóleo pesado y diésel como combustible. Si bien esta forma de generación de energía podría reemplazar a “más fuentes contaminantes, como generadores pequeños e ineficientes” hasta cierto punto,³⁴⁶ la central eléctrica, sin embargo, produce contaminación y gases de efecto invernadero³⁴⁷ que se filtran en nuestro aire y podrían afectar la salud de las personas.³⁴⁸

EIAS, p. 67. The Massacre Transboundary Aquifer (“MTA”), una fuente crucial de agua freática para las comunidades en el noreste de Haití, es la base del CIP. Si bien se cree que el CIP debería tener un suministro adecuado de agua para las actividades iniciales de los inquilinos del parque, la información sobre la capacidad del MTA para continuar suministrando suficiente agua al parque es desconocida. HA-T1179 tiene por objeto evaluar la disponibilidad y calidad del agua y una gestión integrada de los recursos hídricos en el noroeste de Haití: HA-L1101 ESS ¶¶2.7-2.8, 4.16-4.17.

³³⁹ ActionAid (2015), p. 13: “los residentes se quejaron de que se estaba extrayendo demasiada agua en el parque frente a la sequía de 2014”. En una entrevista, Ilna St Jean comentó que se había secado un pozo cercano y que hay menos agua en el río Trou-du-Nord, impactando a los peces (11 de julio de 2016, disponible bajo solicitud).

³⁴⁰ Véase la nota 338.

³⁴¹ Se determinó que la eliminación y tratamiento inadecuados de las aguas residuales domésticas eran la fuente probable de contaminación” (2015 ESMR, ¶4.8 y nota 14), indicando ya sea “desinfección inadecuada o contaminación... mediante tapones en las tuberías” (2014 ESMR, p. 22). Además, la estación de bomberos del CIP construida en la “inmediación vecina del principal pozo productivo”, quebranta las normas internacionales y coloca un riesgo adicional de contaminación al sistema de agua del CIP: 2014 ESMR, ¶4.14.

³⁴² 2015 ESMR, ¶4.10.

³⁴³ CIA Update (2015), p. 127.

³⁴⁴ *Idem*, pp. 5, 127, 147-149.

³⁴⁵ Entrevistas con Dieudonné Florvil, Ilna St Jean y Anne Leroy con fecha 11 de julio de 2016 (disponibles por petición).

³⁴⁶ CIA Update (2015), p. 127.

³⁴⁷ *Idem*, pp. 147-148.

³⁴⁸ *Power Plant ESIA*, p. 85. La USAID advierte que “también debería explorarse el uso de fuentes alternativas de energía

v. ***Contaminación del suelo y de la tierra por la central eléctrica del CIP***

El BID reconoció la posibilidad de que el suelo cerca del CIP se hubiera contaminado durante la construcción y operación del parque,³⁴⁹ con situaciones como la acumulación y la inadecuada eliminación de desechos en el CIP y sus alrededores.³⁵⁰ El CIP construyó un depósito temporal de desechos sólidos para eliminarlos mientras se construía un vertedero permanente.³⁵¹ Sin embargo, el depósito temporal comenzó a deteriorarse y los desechos se acumularon cerca del CIP.³⁵² Se esperaba que en 2016 se rebasara la capacidad de este vertedero temporal.³⁵³ Existen planes para mitigar la contaminación del aire y del suelo mediante el establecimiento de un centro de tratamiento integral de desechos sólidos,³⁵⁴ pero no nos queda claro si esto será suficiente y si se implementará a tiempo para evitar mayor acumulación de desechos y contaminación.

La acumulación de desechos también es un problema fuera del CIP, posiblemente debido, en parte, al aumento de población asociado con este desarrollo.³⁵⁵ Para el año 2030, si la población de las comunidades del corredor nordeste de Haití se duplica o triplica, como se espera, la generación de desechos podría aumentar en algún punto entre 1 y 1.4 millones de toneladas por año.³⁵⁶

Además de los desechos sólidos, el CIP también genera residuos peligrosos para los cuales no existen servicios para su adecuado tratamiento y eliminación en Haití.³⁵⁷ Los documentos del proyecto indican que una instalación de eliminación de desechos adecuada debió haberse construido dentro del CIP a finales de 2016,³⁵⁸ pero no estamos seguros del estatus de dicha instalación y tememos que los desechos peligrosos no sean manejados de manera apropiada.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) también observó riesgos adicionales de contaminación del suelo y de la tierra como resultado específico de la central eléctrica.³⁵⁹

vi. ***Malas condiciones de empleo en el CIP***

El BID reconoció posibles infracciones laborales en el CIP³⁶⁰ y desde entonces ha documentado la falta de cumplimiento de la compañía Sae-A de varios códigos laborales y mejores prácticas, como por ejemplo, compensación adecuada, pago de horas extras, salud y

en fases de expansión futuras de la planta de energía” para mitigar las preocupaciones ambientales: *Power Plant ESIA*, p. 85.

³⁴⁹ 2011 PGAS, pp. 25-26; CIA Update (2015), p. 127.

³⁵⁰ 2014 ESMR, ¶¶4.25-4.26; 2015 ESMR, ¶4.17.

³⁵¹

Idem.

³⁵² *Idem*; entrevistas con Louis Tirène e Inna St Jean del 11 de julio de 2016 (disponibles por petición).

³⁵³ CIA Update (2015), p. 61.

³⁵⁴

Idem.

³⁵⁵ *Idem*, pp. 150-151; 2015 ESMR, ¶2.18.

³⁵⁶ CIA Update (2015), p. 150; CIA (2012), p. 28-29.

³⁵⁷ 2015 ESMR, ¶4.18.

³⁵⁸

Idem.

³⁵⁹ *Power Plant ESIA*, p. 47-48. La eliminación inadecuada de desechos tóxicos y petróleo podría disminuir la vegetación de las áreas cercanas a la planta de energía: 2011 USAID EA p. 48. El cemento o la grava abandonados cerca de la instalación de la planta podría cambiar la estructura del suelo e incrementar su erosión: *Power Plant ESIA*, p. 47.

³⁶⁰ HA-L1101 ESS, ¶4.9.

seguridad ocupacional, falta de guarderías para los hijos de los trabajadores y licencia de maternidad adecuada.³⁶¹ La manera en que estas infracciones afectan a las mujeres está fuera de proporción, ya que el CIP ahora está contratando tres veces más mujeres que hombres.³⁶²

Se han tenido informes de que los salarios del CIP son bajos y a menudo insuficientes para cubrir las necesidades básicas.³⁶³ Las mujeres costureras que trabajan en el CIP informan de “presión verbal fuerte que cae en el límite del abuso” por parte de los supervisores para alcanzar tasas elevadas de producción,³⁶⁴ y una empleada embarazada dijo que su supervisor, literalmente, la golpeó.³⁶⁵ El acoso sexual es un riesgo reconocido dentro de la industria textil en Haití,³⁶⁶ y, según informes, los trabajadores del CIP lo han padecido.³⁶⁷ Aún más, el sistema de transporte para los trabajadores hacia el CIP y de regreso implica prácticas de abordaje inseguras y sobre ocupación, así como la conducción de los vehículos a altas velocidades.³⁶⁸ Un sistema de transporte deficiente pone en peligro la seguridad de las trabajadoras.³⁶⁹

Aunque la organización Better Work Haiti³⁷⁰ (“BWH”) y el gobierno de Haití han iniciado un intento para mejorar la observancia de los códigos laborales por parte del CIP, el Décimo Informe de Cumplimiento de BWH documentó “repetidas fallas” en el cumplimiento de las obligaciones de salario mínimo, servicios médicos y primeros auxilios, sustancias químicas y peligrosas, y preparación para emergencias.³⁷¹ Si bien BWH capacitó a más de 150 empleados de alto nivel en cumplimiento laboral,³⁷² los empleados continúan expuestos a condiciones laborales deficientes hasta que se monitoree el cumplimiento del código laboral, y se implemente en su totalidad.

Dos de los miembros de la familia de Ilna St Jean trabajan en el CIP, y ella está preocupada por sus condiciones laborales: “... ¡ellos trabajan mucho! Si sienten ganas de orinar, no pueden ir al baño siquiera. El jefe se queda allí para que no salgan. Hay personas que no se sienten bien, y hasta que no se caen las dejan salir. ... Tengo un primo que se cortó los dedos así [muestra el corte de tres dedos]. Todavía no le han dado dinero... muchos de ellos están enfermos de los

³⁶¹ 2013 EMSR p. 15-16, 27; HA-L1101 ESS ¶3.18; HA-L1091 ESS, ¶3.16; 2015 ESMR, ¶4.32. Véase también *Worker Rights Consortium Stealing from the Poor: Wage Theft in the Haitian Apparel Industry* (15 de octubre de 2013), pp. 6-7, 34 <http://bit.ly/2aTEkAo>.

³⁶² 2015 ESMR, ¶4.32.

³⁶³ *Stealing from the Poor*, p. 32.

³⁶⁴ *Gender Action CIP*, pp. 14, 16.

³⁶⁵ *Idem*, p. 16.

³⁶⁶ *Social Impact Assessment* (2012), p. 13; *Gender Action CIP*, p. 3.

³⁶⁷ Entrevistas con la comunidad (los detalles quedaron retenidos para evitar identificación y represalias). No hemos investigado estos informes.

³⁶⁸ 2015 ESMR ¶4.26; HA-L1101 ESS, ¶4.31.

³⁶⁹

Idem.

³⁷⁰ Better Work Haiti (BWH) es un esfuerzo de alianza entre la Corporación Internacional Financiera y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Brinda servicios de evaluación, consejería y capacitación a compañías, entre ellas S&H Global.

³⁷¹ 2015 ESMR ¶4.22. Durante una misión de análisis en julio de 2015, el BID también descubrió la ausencia de irrigadores contra incendio en varios edificios y la “falta de un depósito de agua destinado al combate de incendios”: *Idem*, ¶4.20.

³⁷² *Idem*, ¶4.31.

ojos, del corazón... Golpean a los trabajadores con frecuencia. Los empujan, los golpean...”.

Los miembros de nuestra comunidad informan estar preocupados por el acoso sexual a las mujeres que trabajan en el CIP, entre otros problemas graves: “... Todos los días escuchamos sobre eso, a veces despiden a las mujeres por ese motivo”.

vii. Otros impactos sociales debidos a la afluencia de población

Como ya se mencionó, el aumento actual y prospectivo de la población relacionado con el desarrollo del CIP y sus instalaciones secundarias conllevan numerosos riesgos. Se proyecta que para 2018 haya 18 000 trabajadores en el CIP,³⁷³ y la población de varias comunidades del noreste de Haití, como Limonade, Caracol, Trou du Nord y Fort Liberte, podría duplicarse o triplicarse para 2030.³⁷⁴ La demanda de nuestros recursos y servicios sociales, que en la actualidad ya son deficientes o inaccesibles para algunos, aumentará, entre ellas las demandas de agua potable, servicios médicos, tratamiento de aguas residuales, eliminación de desechos sólidos, seguridad y vivienda asequible.³⁷⁵ Si este aumento de la población no se maneja de manera adecuada, podríamos experimentar también un aumento de la delincuencia, más viviendas de chozas y barrios bajos,³⁷⁶ crisis de salud pública³⁷⁷ y tensión entre nuestras comunidades y al interior de ellas.³⁷⁸ Las mujeres de la localidad son particularmente vulnerables a cualquier aumento de la violencia.³⁷⁹

Si bien el CIP ha traído algunas oportunidades de trabajo y fortalecido la infraestructura de algunas comunidades,³⁸⁰ las localidades de Limonade, Terrier-Rouge y Trou-du-Nord ya han informado que sus limitados recursos ya están siendo afectados.³⁸¹ En Terrier-Rouge se ha visto

³⁷³ *Idem*, ¶1.4.

³⁷⁴ CIA Update (2015), pp. 150-151. Si bien solo 2% de los trabajadores extranjeros se contrataron para trabajo de construcción (*Idem*, p. 46), a medida que el CIP se extiende, podrían contratarse más trabajadores extranjeros en las fábricas.

³⁷⁵ *Idem*, pp. 1, 135; 2015 ESMR ¶¶4.4, 4.41, 4.45; 2014 ESMR, ¶¶4.42, 4.45; HA-L1101 ESS ¶4.9.

³⁷⁶ EIAS, pp. 102-103; *Social Impact Assessment* (2012), p. 6. Para mayo de 2013, ya se habían empezado a desarrollar barrios bajos en las inmediaciones del CIP: *Mitigating the Social Impacts of the Caracol Industrial Park* (HA-T1181): *Terms of Reference*, ¶1.6 <http://bit.ly/2bkTyCS>.

³⁷⁷ Entre los riesgos para la salud están la propagación de enfermedades como ETS, VIH/SIDA, cólera y demás enfermedades transmitidas por el agua como tifoidea y hepatitis: HA-L1076 *Environmental and Social Strategy*, ¶5.16 [HA-L1076 ESS] disponible en el Apéndice 3 de HA-L1076 *Project Profile*; HA-L1101 ESS, ¶4.18). El aumento de población podría también generar un incremento en la acumulación de desechos, generando condiciones propicias para la transmisión de enfermedades por medio de roedores, pájaros e insectos: 2011 ESMP, p. 48.

³⁷⁸ 2015 ESMR, ¶¶4.25, 4.41; 2014 ESMR, ¶4.42. Hemos notado que ya existe cierta tensión, con las protestas por la falta de energía y demandas por parte de las comunidades locales, como Fort Liberte y Ouanaminthel, para que se conecten a la red eléctrica del generador de energía del CIP. Parece que una protesta terminó trágicamente con la muerte de por lo menos cuatro personas, entre ellas un niño y un joven de 16 años de edad: véase Kim Ives “Nationwide Uprising Gains Strength in Haiti” (*Global Research*, 3 de diciembre de 2014) <http://bit.ly/1wecLrH>.

³⁷⁹ 2015 ESMR, ¶4.25; 2011 PGAS, p. 49; CIA Update (2015), p. 42. Como parte del contexto, el trabajo sexual tal como, lamentablemente, el tráfico sexual, explotación de prostitución y prostitución infantil, prevalecen en Haití, con poca reglamentación de la prostitución y poca protección por parte de la policía: véase Bureau des Avocats Internationaux y otros *Violence against Women, Trafficking, Prostitution, and Exploitation by UN Peacekeepers* (22 de enero de 2016), <http://bit.ly/1R402Oy>.

³⁸⁰ CIA Update (2015), pp. 75-78.

³⁸¹ *Idem*, pp. 76-78.

un aumento en el volumen de desechos y de delincuencia.³⁸² Como ya se comentó, toda la zona ya experimentó un fuerte aumento en el costo de vida.³⁸³ Los miembros de la comunidad informan que los caminos, de por sí deficientes, cerca del CIP ya no son suficientes frente al aumento del tráfico pesado, lo cual provoca grandes cantidades de polvo y un aumento en los accidentes de tránsito.³⁸⁴

Estas tensiones solo se verán intensificadas si el CIP continúa atrayendo más gente a nuestras comunidades. El BID y otras partes interesadas en este proyecto debieron haber asegurado que servicios públicos adecuados estuvieran en funcionamiento antes de aumentar su demanda.

B. El BID no nos informó de manera adecuada sobre estos riesgos ambientales y sociales, ni cómo manejarlos

Los riesgos e impactos ambientales y sociales mencionados anteriormente no han quedado adecuadamente claros para nosotros ni para las demás comunidades que habitan en las zonas afectadas. No tenemos suficiente información, en un formato o lenguaje apropiado, de modo que quede claro qué tan probables y qué tan graves son estos riesgos e impactos; cómo podrían afectarnos ahora o en el futuro, y cuánto éxito han tenido en su gestión actual. Como consecuencia, pensamos que el BID ha fracasado en garantizar consultas comunitarias significativas sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales, así como su manejo.

Como ya se dijo antes, la Política de Cumplimiento Ambiental y de Salvaguardias del BID ordena consultas e información oportunas y adecuadas durante el proceso de evaluación ambiental.³⁸⁵ Las operaciones de la categoría “A” requieren consultas al menos dos veces durante la preparación del proyecto, durante la fase de determinación del alcance de los procesos de evaluación ambiental o durante el proceso de diligencia debida, así como durante la revisión de los informes de evaluación. La EIAS debe ser preparada con su PGAS y publicarse antes de la misión de análisis del BID. Para fines de consulta, se debe brindar información apropiada en la(s) localización(es), formato(s) e idioma(s) tales que permitan a las partes afectadas participar en las consultas, para formarse opiniones y comentar sobre el plan de acción propuesto. Durante la ejecución, las partes afectadas deben mantenerse informadas de las medidas de mitigación ambiental y social relacionadas con el proyecto, que puedan afectarles.³⁸⁶

Hubo una grave falta de consultas comunitarias significativas en general, como ya se dijo en la Sección III. B vii, como los impactos sociales y ambientales de este proyecto, en incumplimiento de la Política de Salvaguardias, ¶¶4.19 y 4.20:

- No hubo una consulta significativa sobre el contenido o los hallazgos de la EIAS, ni acerca del PGAS propuesto, antes de la finalización de esos documentos y de que el Consejo aprobara el proyecto. La única reunión de consulta de la comunidad mencionada en la EIAS se celebró el 27 de enero de 2011, aunque el tema de la misma fueron principalmente los impactos de reasentamiento del CIP.³⁸⁷ En junio de 2011

³⁸² *Idem*, p. 77.

³⁸³ Véase el Cuadro 2 y el debate subsiguiente; y la Sección III.B.ix.

³⁸⁴ Entrevistas con Dieudonné Florvil, Ilna St Jean y Louis Tirène del 11 de julio de 2016 (disponibles por petición).

³⁸⁵ Política de salvaguardias, ¶¶4.19 y 4.20.

³⁸⁶ *Idem*, ¶4.20.

³⁸⁷ Véanse los resultados de esta reunión resumidos en EIAS, Apéndice 2, pp. 8-9. Se realizaron otras reuniones con

hubo otras reuniones relacionadas con el reasentamiento, pero tenemos entendido que no se trató la totalidad de impactos sociales y ambientales del proyecto.³⁸⁸ La primera reunión, identificada en los documentos del BID, que trató específicamente sobre la EIAS y el PGAS, fue el 15 de septiembre de 2011,³⁸⁹ después de la finalización de la EIAS y después de que el Consejo del BID había aprobado el proyecto, a pesar de las reuniones que se celebraron mucho antes con funcionarios nacionales y locales.

- La EIAS misma estaba incompleta, según admitió el propio BID, y más adelante la complementaron con estudios adicionales,³⁹⁰ por lo que también se actualizó el PGAS.³⁹¹ No obstante, no tenemos conocimiento de alguna consulta posterior sobre los resultados de estos estudios ni sobre el desarrollo de planes de gestión actualizados.³⁹²
- En ningún momento se pusieron a disposición de las víctimas documentos o información importante de los proyectos en un formato e idioma adecuados. No hemos visto un solo documento de proyecto en *creole*, aparte de los acuerdos de compensación de 2013. Tampoco se divulgó información sobre la EIAS en un formato adecuado para que fuera comentada, considerando los bajos niveles de alfabetismo.³⁹³ Las reuniones de todo el grupo que ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011 no facilitaron la participación *significativa* de la comunidad afectada.
- No tenemos conocimiento de que se llevara a cabo ninguna reunión específica para facilitar la consulta con las mujeres, quienes enfrentan múltiples riesgos, fuera de proporción, tanto ambientales como sociales.

Finalmente, no nos parece que se nos haya consultado de manera adecuada a medida que se han aprobado nuevos créditos y que las circunstancias han cambiado, violando con ello los requerimientos de consulta que aplican a los créditos posteriores. Por ejemplo, en 2015 se llevó a cabo una Evaluación de Impacto Acumulativo actualizada. Los autores de ese estudio consultaron a los representantes del proyecto y a una “muestra de representantes municipales”, pero no a los miembros de la comunidad directamente afectados.³⁹⁴ Dadas las frecuentes fallas del proyecto para cumplir con las directrices ambientales y sociales del BID, tal como lo reconoció el BID,³⁹⁵ la comunidad afectada debió haber sido consultada de manera significativa sobre las evaluaciones ambientales, los planes e informes de gestión ambiental y social, y los planes de acción para

autoridades locales y nacionales sobre cuestiones de negocios, pero no pueden considerarse como consultas comunitarias.

388 RAP (2011), Apéndice 2, p. 129.

389 Lista de las principales consultas del BID. Véase la nota 286 anterior. Se celebraron otras reuniones durante diciembre de 2011.

390 Estudios como la Evaluación del Impacto Social (febrero de 2012), el estudio sobre manejo de desechos sólidos y peligrosos (marzo 2012), los Estudios de Impacto Acumulativos (agosto de 2012), el estudio de base ecológica rápida (octubre de 2013), la Evaluación Ambiental del Sistema de Tratamiento de Drenaje Temporal (enero de 2014); entre otros.

391 Entre ellos la PGAS 2012 y el plan de administración de desechos (diciembre de 2014).

392 Si bien algunas reuniones de grupos de enfoque relacionadas con la CIA (2012) pudieron haber incluido directamente a los miembros de la comunidad afectada, no tenemos conocimiento de ninguna reunión general, abierta sobre el resultado de dicho informe ni de ningún cambio subsecuente al PGAS: véase la lista de consultas principales del BID, en la nota 286; CIA (2012), p. 9.

393 Para mayor detalle, véase Sección III.B.vii.

394 CIA Update (2015), pp. 6-7.

395 Véase Sección II.

resolver el incumplimiento de salvaguardias importantes,³⁹⁶ desarrollados para los créditos posteriores.

Si bien la preparación de la EIAS y del PGAS es responsabilidad del solicitante del crédito, esos productos deben someterse a revisión del BID antes de la aprobación del proyecto. El BID debe asegurar el cumplimiento de sus estándares, y considerar la calidad de la documentación en su proceso de aprobación de proyectos.³⁹⁷ En este caso, el BID no aseguró el cumplimiento, en circunstancias en las que la falta de consulta es evidente a partir de los documentos mismos del proyecto, violando la Política de Salvaguardias, ¶¶4.19 y 4.20.

Como resultado de las fallas del BID, no se nos ha brindado oportunidades importantes para comprender los impactos reales y potenciales del CIP en nuestras comunidades, ni para aportar ideas en torno al manejo de dichos riesgos e impactos.

C. Lo que la Kolektif quiere de este proceso

Por consiguiente, la Kolektif solicita un proceso nuevo y significativo de consulta, en el que se expliquen los riesgos e impactos ambientales y sociales actuales, y se facilite la aportación de ideas por parte de las comunidades afectadas en cuanto a cómo se manejarán dichos riesgos e impactos. Este proceso debe diseñarse de modo que asegure que esos complejos problemas queden muy claros para las comunidades afectadas, y se celebren reuniones de grupos más pequeños y específicos diseñadas para facilitar la consulta y participación de las secciones pertinentes de nuestras comunidades, como las mujeres, los pescadores, entre otros.

V. Nuestros intentos para resolver estos problemas no han tenido éxito

Tanto nosotros como nuestros socios³⁹⁸ hemos intentado interactuar con el BID y la UTE para resolver estos problemas. Hemos esperado colaborar en alguna evaluación de nuestras circunstancias socioeconómicas y la subsecuente reevaluación y rediseño de los paquetes de compensación. Aunque la reacción inicial del BID y la UTE parecía positiva, desde entonces solo hemos recibido retrasos, compromisos sin cumplir y, en algunas situaciones, negativas de interacción.³⁹⁹

La Kolektif se formó en abril de 2014. Tanto antes como después de esa fecha,⁴⁰⁰ las organizaciones con las que tenemos alianzas se han comunicado con la UTE en nombre de nuestras comunidades (en colaboración estrecha con los ahora miembros de la Kolektif) respecto a una amplia gama de temas relacionados con el proceso de desplazamiento y reasentamiento.

La Kolektif inició contacto directo con el director de la UTE, Mikael de Landsheer, y el director del BID en Haití, Gilles Damais, mediante una carta con fecha del 3 de abril de 2016 (enviada el 14 de abril del mismo año) firmada por 225 víctimas individuales del desplazamiento. Esta carta inicial solicitaba información detallada sobre los procesos de reasentamiento y compensación,⁴⁰¹ y proponía una reunión para el 29 de abril. Ante el silencio, la directora de

³⁹⁶ Política de salvaguardias, ¶4.29.

³⁹⁷ *Idem*, ¶4.19.

³⁹⁸ Véase el Apéndice 1.

³⁹⁹ Un cronograma detallado de nuestras comunicaciones se encuentra en el Apéndice 12.

⁴⁰⁰ Entre 2013 y 2015.

⁴⁰¹ Nuestras cartas solicitaban específicamente información sobre cómo se calculó la compensación, el número de familias

Action Aid Haití (“AAH”), Yolette Etienne, intentó contactar a los directores del BID y de la UTE entre el 22 y el 29 de abril por medio de una serie de mensajes de texto y correos electrónicos. Finalmente, el BID y la UTE reconocieron nuestra carta el 28 de abril y estuvieron de acuerdo en reunirse con nosotros el 5 de mayo de 2016.

En principio, el tono de la reunión parecía constructivo.⁴⁰² A pesar de que el BID y la UTE solo pudieron dar respuestas parciales a nuestras peticiones de información durante la reunión, se comprometieron a proporcionar respuestas más detalladas para el 13 de mayo de 2016. Aún más, el BID afirmó que llevaría a cabo una evaluación de nuestras circunstancias socioeconómicas y proporcionaría sus conclusiones a finales de año. El BID indicó que la Kolektif sería consultado durante la evaluación y que una nueva fase de compensación y rehabilitación *podría* iniciarse, dependiendo de los resultados de la evaluación.⁴⁰³

Sin embargo, el BID y el UTE no cumplieron con sus compromisos. La fecha límite del 13 de mayo pasó, y no recibimos la información prometida. La directora de AAH, una vez más, envió varios correos electrónicos y mensajes de texto a los directores de la UTE y del BID, pidiendo que cumplieran su compromiso de brindar respuestas detalladas a nuestras preguntas. Tres semanas después de lo prometido, y ocho semanas después de nuestra correspondencia inicial, la UTE envió a Kolektif respuestas por escrito junto con documentos de sustento. No obstante, estas respuestas contenían imprecisiones⁴⁰⁴ y estaban incompletas en cuanto a: ningún detalle sobre cómo se tomaban en cuenta específicamente las necesidades de las mujeres; no había una lista completa de familias víctimas y qué tanta compensación se recibió;⁴⁰⁵ ninguna explicación de por qué la lista de personas vulnerables cambió; ningún detalle sobre cómo los líderes naturales fueron seleccionados; y casi ningún detalle sobre la decisión crítica de abandonar la opción de compensación “tierra por tierra”.

Desde el momento en el que se recibió esta respuesta inadecuada, hemos contactado al BID y a la UTE en numerosas ocasiones, casi en vano. El 29 de junio de 2016, enviamos una carta al BID y a la UTE explicando nuestras preocupaciones específicas, solicitando más información sobre la evaluación socioeconómica propuesta y proponiendo una reunión para el 8 de julio. De nuevo, no recibimos ninguna respuesta hasta que la directora de AAH envió mensajes de texto y correos electrónicos de seguimiento a los directivos del BID y la UTE. El 6 de julio, la UTE y el BID respondieron con una negativa para la reunión, afirmando que estaban avanzando en la evaluación. La UTE y el BID no ofrecieron una reunión posterior, sino hasta después de que se finalizaran las conclusiones de la evaluación.

Más recientemente, enviamos cartas de seguimiento a la UTE y el BID con fecha del 10 de julio de 2016 (enviadas el 13 de julio). Estas cartas de seguimiento provocaron preocupación

afectadas, la opción “tierra por tierra”, y la selección de líderes naturales que representaran a las familias víctimas.

⁴⁰² Véase el Apéndice 4, Notas de la reunión; y Apéndice 5, un Memorando de Ayuda puesto en circulación por el BID y la UTE después de la reunión. Aunque no se ve reflejado en el Apéndice 5, el BID confirmó durante la reunión de mayo que el plan de compensación se había concluido de manera apresurada y que había problemas con el proceso de elección de líderes naturales, la consideración de problemas de género, y los retrasos para llevar a cabo ciertos pasos.

⁴⁰³ Véase el Apéndice 4, Notas de la reunión.

⁴⁰⁴ Por ejemplo, las respuestas afirman que todas las mujeres jefas de familia se consideraban vulnerables, lo cual consideramos que es incorrecto: véase Sección III.B.iv anterior.

⁴⁰⁵ Los documentos de apoyo solo abarcan una lista parcial de 367 familias víctimas y una lista de los pagos totales, sin especificar a quién se hizo cada pago ni para qué: Apéndice 13, UTE *Liste des personnes compensées définitivement (compensation monétaire) + montants définitifs payés*.

sobre la falta de consulta y participación de las víctimas en el proceso de evaluación. Estamos preocupados de que las acciones del BID y de la UTE pongan en riesgo la repetición de los mismos errores de diligencia debida y en los procesos de consulta. En particular:

- Ante la ausencia de cualquier compromiso para garantizar consultas comunitarias significativas y participación en el diseño y el desarrollo de la evaluación, se evaluarían los riesgos de no comprender adecuadamente la situación de las personas desplazadas; y
- la falta de una propuesta de fecha límite podría resultar en un retraso innecesario más adelante en el proceso de compensación y rehabilitación del sustento de las personas desplazadas.

Por consiguiente, solicitamos que, antes de que inicie la evaluación, la UTE y el BID:

- Se reúnan con nosotros para tratar la evaluación propuesta;
- nos brinden, con anticipación, una copia de los términos de referencia de la evaluación y un compromiso de que se considerarán nuestros comentarios sobre esos términos de referencia;
- Commit to involving the Kolektif during the evaluation process, including through an opportunity to review and comment on any versions and recommendations, with a clear and precise schedule of engagement; and
- Se comprometan a involucrar al Kolektif durante el proceso de evaluación, e incluyan la oportunidad de revisar y comentar cualquier versión y las recomendaciones, con un cronograma claro y preciso de compromiso; y
- se comprometan a que la evaluación considerará la valoración por parte de los ciudadanos (las entrevistas exhaustivas y otros estudios) dirigida por la Kolektif.

Recibimos respuesta de la UTE el 26 de julio de 2016. Aunque la respuesta intentaba garantizarnos que el proceso de evaluación sería participativo, no brindaba ningún detalle ni plazos para consultar con las víctimas o Kolektif. La respuesta no abordó ninguna de nuestras preocupaciones o solicitudes; tan solo afirmaba que todas las preocupaciones se abordarían “de una forma o de otra”. Además, la respuesta sugería que la carta del 10 de julio no estaba firmada por las víctimas, y solo por organizaciones civiles, lo cual implicó que “traería problemas”.⁴⁰⁶

Si bien el 2 de septiembre reiteramos nuestro deseo de trabajar de manera constructiva con el BID y la UTE, dado el tono despectivo de la UTE en su carta del 16 de julio, no tenemos confianza en que nuestras preocupaciones se tomen en serio en este momento. No hemos visto evidencias de que la evaluación prometida esté en proceso.

No obstante, permanecemos optimistas de que es posible un diálogo constructivo entre Kolektif, sus representantes, el BID y la UTE.⁴⁰⁷ Considerando los retrasos que hemos experimentado hasta la fecha y el registro deficiente por parte del BID y de la UTE de las

⁴⁰⁶ La carta del 10 de julio estaba claramente firmada por Kolektif, lo cual, tal como se mencionó anteriormente, representa a cerca de 225 víctimas y familias víctimas. La UTE se ha comprometido antes con nuestras organizaciones aliadas y tiene conocimiento de su colaboración estrecha con nosotros.

⁴⁰⁷ Tenemos la esperanza de que la compañía Sae-A, la más grande propietaria (y potencialmente inversionista) del CIP también se una a este diálogo.

consultas a las víctimas acerca de las acciones que afectan directamente su vida, solicitamos el apoyo de la Fase de Consulta de MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación) a fin de que proporcione un marco de referencia para un compromiso más estructurado. Sin ese marco de referencia del MICI para este diálogo, tememos que el BID y la UTE continúen siendo despectivos e ignorando nuestra voz y nuestras preocupaciones. Si no es posible el diálogo, o no ayuda a resolver los problemas, solicitamos que proceda la queja ante la Revisión de Observancia.

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros y con nuestros representantes para cualquier pregunta que tengan respecto de esta queja, de acuerdo con los datos de contacto que se detallan en el Apéndice 1. Quedamos a la espera de su respuesta en relación con este asunto tan importante.

Atentamente,

IDB's and UTE's poor record of consulting the victims on actions that directly affect their lives, we request the support of MICI's Consultation Phase to provide a framework for more structured engagement. Without MICI providing a framework for this dialogue, we fear that IDB and UTE will continue to dismiss and ignore our voices and concerns. If dialogue is not possible, or fails to resolve the issues, we request that the complaint proceed to Compliance Review.

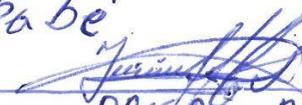
Please do not hesitate to contact us and our representatives with any questions you may have regarding this complaint, in accordance with the contact details set out in Annex 1. We look forward to hearing from you about this important matter.

Sincerely,

Pou

Kolektif Pèyizan Viktim tè chabè'





PROSPER ZORY
Sèkretè

Kòdonatè: Mevil Jocelyn

Pou: APV



Menard Wilson
Sèkretè

Pou

Tèt Kole Teyizan Ayisyen



Jancy Charles

Pou
Action Pour la Reconstitution et la Defense de l'Environnement (AREDE)


Coord. Milostène



Lista de apéndices

Apéndice 1 – Descripción de Kolektif, organizaciones aliadas y detalles de contacto

Apéndice 2 – Autorización formal de representantes

Apéndice 3 – Lista de proyectos del BID importantes

Apéndice 4 – Notas de la reunión entre BID, UTE y Kolektif de mayo de 2016

Apéndice 5 – *Aide Memoire* de BID y UTE en respuesta a la solicitud de información

Apéndice 6 – Resumen de los resultados de las entrevistas

Apéndice 7 – Comparación entre ALENAC y el estudio de base/listas de víctimas de junio 2016

Apéndice 8 – Muestra 2011 Acuerdo sobre seguridad alimentaria y cosecha perdida (traducción)

Apéndice 9 – Muestra 2013 Acuerdo de compensación final (traducción)

Apéndice 10 – Comparación de las personas identificadas por el BID y la UTE como vulnerables 2011-2013

Apéndice 11 – Cuadro de compensación (cotejado por Kolektif y sus aliados)

Apéndice 12 – Comunicación previa con la Dirección del BID y de la UTE

Apéndice 13 – Documentos trascendentes proporcionados por la UTE el 3 de junio de 2016 (no es una lista completa)

- Alix Innocent, Chargé de Coordination du PAR *Rapport: Rencontre de Discussions Pour La Mise En Ceuvre d' un Cadre de Négociation entre L'UTE et Les Agriculteurs de Chaber t* (19 de agosto de 2013)
- INFP Rapport d'exécution du Programme de formation professionnelle lié à l'implantation du Parc Industriel de Caracol (octubre de 2012)
 - Apéndice: Formation UTE/INFP (Caracol) Lista de participantes (x4)
- UTE *Plan de compensation: Choix d'options d'accompagnement par les personnes vulnérables*
- UTE *Cotisations a payer pour les agriculteurs délocalisés dans le cadre du programme PIC*
- UTE *Liste des personnes compensées définitivement (Compensation monétaire)+Montants définitifs payés*

Apéndice 14 – Acte d'Engagement entre UTE y L' Association des Petits Planteurs du Nord Est